

CRÓNICA LEGISLATIVA

ÓRGANO DE INFORMACIÓN DE LA LV LEGISLATURA • H. CÁMARA DE DIPUTADOS • PODER LEGISLATIVO FEDERAL

REFORMAS ELECTORALES

LOS DEBATES DE ABRIL A JUNIO

LAS MUJERES EN EL
LEGISLATIVO





Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas
Presidenta de la Gran Comisión

Dip. Miguel González Avelar
Secretario de la Gran Comisión

Dip. Manuel Díaz Infante
Secretario de la Gran Comisión

Lic. Joaquín Contreras Cantú
Oficial Mayor

Lic. Graciela Brasdefer Hernández
Tesorera

Lic. Adalberto Campuzano Rivera
Oficial Mayor de la Gran Comisión

Lic. Ramón García González
Coordinador de Comunicación Social

CRÓNICA LEGISLATIVA

Año III número 14 abril-junio de 1994

Director: Dip. Luis A. Beauregard Rivas

Subdirectora editorial: Bertha Trejo Delarbre

Subdirectores: Dip. Juan José Bañuelos Guardado, Dip. Martín Tavira Urióstegui, Dip. Yolanda Elizondo Maltos, Dip. René Bejarano Martínez, Dip. Luisa Álvarez Cervantes

Consejo Editorial: Dip. Julieta Guevara Bautista, Dip. Juan Antonio Nemi Dib, Dip. Alfredo Ling Altamirano, Dip. Arturo Nájera Fuentes, Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Dip. Fernando Lerdo de Tejada, Dip. José Antonio González Fernández, Dip. Amador Rodríguez Lozano, Dip. José Manuel Correa Ceceña, Sr. Héctor de Antuñano, Sra. Rosa María Fernández

Investigación: Luisa Béjar, Rafael Flores

Redacción: Sergio López M., Álvaro González

Diseño: Grupo Editorial Eón, S. A. de C. V.

Distribución: Víctor Rivera

Servicios de apoyo: Sistema de Información y Documentación Legislativa, Comité de Biblioteca y Dirección General de Comunicación Social

Crónica Legislativa, órgano de información de la LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aparece ocho veces al año en los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre, y se distribuye en forma gratuita. Domicilio: Av. Congreso de la Unión s/n, edificio H., Palacio Legislativo de San Lázaro, Col. del Parque, 15969 México, D. F. Tel. 522-3159. Certificado de Licitud de Título número 6486 y Certificado de Licitud de Contenido número 5406; expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Reserva de derechos al uso exclusivo del título, en trámite en la Dirección General del Derecho de Autor. Registro como publicación periódica expedido por la Dirección General de Correos, en trámite. Impresa en Grupo Editorial Eón, S. A. de C. V., Av. México Coyoacán 421, Col. General Anaya, México 03330, D. F. Tels. 604-1204 y 688-9112. Portada: Palacio Legislativo de Chihuahua; foto: Francisco Muñoz.

Sumario

REFORMAS ELECTORALES

3

Mayor autonomía al IFE y tipificación de delitos electorales

18 Ciudadanización de las elecciones

330 DIPUTADAS y 27 SENADORAS

9

Participación femenina en el Legislativo

12 Legisladoras: intercambio de experiencias

DE ENERO A ABRIL

49

Los asuntos críticos para el país, en la tribuna de la Permanente

LA CAMARA DE ABRIL A JUNIO

13

Seguridad pública, debate y reformas al Cofipe

21 De iniciativas, pensionados y consejeros ciudadanos



35 Los debates de ayer y de hoy

38 Novedades en derecho penal (2a. parte)

47 Las inasistencias de los legisladores

59 Entrevista con Francisco Berlín Valenzuela

62 Diputados en campaña

64 DESDE LA CURUL

66 REGISTRO

68 PERFILES PARLAMENTARIOS

72 DE LOS CLÁSICOS

2 PUNTO DE ACUERDO

8 VENTANA PARLAMENTARIA

24 Luis Donaldo Colosio, diputado

26 BAJO LA LUPA

27 Raíces del presidencialismo

30 EL ORDEN DE LOS DÍAS

32 Difundir en toda su amplitud el trabajo legislativo

PUNTO *de Acuerdo*

María de los Ángeles Moreno Uriegas

El pasado 15 de abril dimos inicio a nuestro último periodo de sesiones ordinarias. Será éste, sin duda, tiempo para considerar proyectos legislativos tendentes a consolidar lo logrado durante casi tres años de esfuerzo en la LV Legislatura que, por muchos conceptos, ha sido excepcional. Es un hecho que nuestro trabajo como legisladores ha cumplido un papel de enorme trascendencia en el profundo proceso de transformación del país. El perfeccionamiento del marco jurídico que constituye la base de nuestras instituciones, ha sido pieza esencial para encauzar con certeza el avance nacional.

Este periodo significará también oportunidad y compromiso político para plantear, de manera firme y clara, nuestras ideas y convicciones acerca del presente y el futuro que queremos para nuestra patria.

Para cualquier país, abordar un proyecto de modernización global implica enormes dificultades. Para el nuestro ha sido y es un desafío formidable transformar con buen éxito la estructura productiva, sanear las finanzas públicas, abatir la inflación, lograr una mejor inserción en el ámbito internacional y, al mismo tiempo, propiciar una mayor apertura democrática y ampliar los espacios de entendimiento y concordia entre los mexicanos. Y éste ha sido nuestro empeño: emprender al mismo tiempo una reforma económica de grandes alcances y una profunda reforma política, preservando libertades públicas y abriendo espacios a una mayor colaboración con el resto del mundo.

Los mexicanos hemos transitado con perseverancia por varios años de intenso trabajo. En ello hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, sustentados en la fortaleza de nuestras instituciones. Por eso, tenemos muy buenas razones para con-

fiar en un futuro mejor para todos.

Lo que hemos logrado es producto del esfuerzo común; todos hemos colaborado para enfrentar las dificultades, superar la situación económica y social, abatir rezagos y desigualdades, combatir la inflación y propiciar

un crecimiento sostenido y sustentable que respete y preserve nuestra riqueza natural.

Ha sido labor de todos hacer triunfar la tolerancia y el diálogo entre los partidos, entre los sectores productivos y entre los diversos grupos sociales del país. Hemos preferido la conciliación a la confrontación, y hemos optado por aplicar la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza.

El proceso de reformas que hemos llevado a cabo en estos años para avanzar en la democracia, para mejorar la impartición de justicia y para abrir oportunidades más equitativas a las regiones, a los estados, a los grupos sociales y a las comunidades, debe seguir adelante.

En materia política, estamos inmersos en un proceso eminentemente democrático, porque la gran mayoría de los mexicanos estamos seguros que nuestro destino habremos de decidirlo en las urnas, pacíficamente, y no en la confrontación o en la violencia.

Quienes amamos a México hemos de actuar y probar que entre nosotros no habrá discordia, sino suma de esfuerzos; que en la medida de la representación o influencia de cada quien, pararemos el rumor y a quienes quieren dividirnos y enfrentarnos.

Hoy más que nunca se requiere unidad nacional, lealtad política y cohesión social. Debemos actuar con entusiasmo en defensa del México que con el esfuerzo de muchas generaciones hemos construido.

LV



SERGIO MENDOZA

Mayor autonomía al IFE y tipificación de delitos electorales



ANDRÉS GARCÍA

Desde enero pasado venía avanzando el intercambio de puntos de vista para establecer los consensos de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en favor de reformas a los ordenamientos constitucionales y a la legislación penal federal, relacionados con normas de tipo electoral. Este esfuerzo culminó los días 22 y 23 de marzo, cuando se aprobaron dos im-

portante reformas que buscan hacer más transparentes y confiables los procesos electorales del país.

Merced a esas reformas, se confiere mayor autonomía a los órganos electorales, se amplía la participación activa de la ciudadanía en la integración de los mismos y se incrementan las sanciones económicas y penales a quienes quebranten los ordenamientos en la materia.

El segundo periodo extraordinario de sesiones del primer receso del tercer año de ejercicio de la LV Legislatura, fue presidido por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra. El proyecto de la enmienda lo firmaron y presentaron al pleno camarl legisladores de cuatro partidos (PRI, PAN, PRD y PARM), en tanto que PPS, PFCRN y 15 diputados perredistas impugnaron la iniciativa.

El dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional —elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— establece que la organización de los comicios federales es función del Estado y se lleva a cabo mediante un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Señala que su órgano superior de dirección se integrará por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como por representantes nombrados por los partidos políticos. Además, dispone que los órganos ejecutivos y técnicos contarán con el personal calificado necesario, al tiempo que los

En el marco de un intenso diálogo interpartidista, la Cámara de Diputados aprobó en periodo extraordinario de sesiones, modificaciones al artículo 41 de la Constitución General de la República y adiciones a 10 artículos del Código Penal, que consideran la tipificación de 17 delitos electorales y las sanciones respectivas por la comisión de esos ilícitos

*Los consejeros
ciudadanos serán
electos en la Cámara
de Diputados, de
entre los propuestos
por los grupos
parlamentarios*

órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Los consejeros ciudadanos —se asienta también en el dictamen— serán electos por el voto de las dos terceras partes

de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los diferentes grupos parlamentarios.

Apoyos y objeciones al artículo 41

El debate se inició en la tarde del día 22. Cuauhtémoc Amezcua, coordinador de la diputación del PPS, presentó una moción suspensiva de la iniciativa, avalada de inmediato por el PFCRN en la voz del diputado Odilón Cantú Domínguez. Ambos argumentaron que para la elaboración de la iniciativa no se había tomado en cuenta a todos los partidos. En votación económica, el pleno rechazó la moción.

Ya iniciada la discusión sobre el dictamen, Tomás Correa Ayala, a nombre del PFCRN, calificó de “afrenta al Poder Legislativo” el acuerdo entre PRI, PAN y PRD para la reforma consti-

tucional a partir de reuniones realizadas en la Secretaría de Gobernación. “Sólo se viene a protocolizar acuerdos pactados en otro lado”, dijo, antes de criticar el contenido de la iniciativa, porque “no corresponde al espíritu pactado en los últimos días de enero por ocho candidatos presidenciales y partidos políticos”. Por todo ello, informó que la decisión del PFCRN era recomendar el voto en contra del dictamen, pero dejaba la responsabilidad del voto “a la conciencia de cada uno” de los diputados de su fracción.

También en contra se manifestaría el PPS a través de Gabriela Guerrero, quien aseveró que las modificaciones al artículo 41 constitucional estaban encaminadas a dejar en manos de dos partidos políticos la integración del órgano encargado de organizar el proceso electoral federal. En el mismo sentido se pronunciaría, a nombre de los diputados sin grupo parlamentario, José María Téllez Rincón.

Ricardo Valero, coordinador de la fracción del PRD, al fijar la postura de su partido dijo que “asegurar no sólo la elección de agosto, sino un proceso electoral justo y transparente para profundizar en las reformas que permitan una transición a la democracia, deben ser continuados sin descanso”, y añadió: “el paso que damos contribuye a las posibilidades de paz, la democracia y la justicia con dignidad”.

Enseguida, el también perredista Jorge Moscoso Pedrero solicitó la palabra para hechos, y a nombre de un grupo de 14 diputados de su partido, hizo entrega a la presidencia de un documento que exponía las causas de su condicionamiento en relación con las reformas al artículo 41. Patentizó que él y sus representados estaban



convencidos que se puede y se debe avanzar mucho más en los cambios.

En su turno, Alfredo Castañeda Andrade, del PARM, hizo patente el voto favorable de su partido a la reforma discutida, aunque propuso una enmienda al párrafo octavo de la misma.

A favor del dictamen se manifestaron también los priistas Juan Ramiro Robledo Ruiz y Juan José Rodríguez Prats. "Todos los partidos políticos ganaríamos con más votación, con menos abstención, con menos disputa, con más certidumbre", dijo el primero. Rodríguez Prats enfatizó que "no hay nada de lo que podamos avergonzarnos; por el contrario, en el futuro podremos contemplar que en la observancia de las disposiciones que estamos aprobando, México avanzará y tendremos la satisfacción personal de que habremos cumplido".

Por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa aseguró que su partido "sostiene e impulsa esta nueva reforma y dará su apoyo aprobatorio, porque ratifica que la vía escogida por el PAN es la correcta; es la vía que subordina el interés partidista, en consecuencia parcial, al interés nacional, al logro de un acuerdo que traslade el punto fundamental de las decisiones nacionales al consenso de los partidos".

Luego de que participaron un total de 14 oradores, que establecieron y abundaron en torno a las posiciones señaladas, se decretó un receso para continuar la sesión al día siguiente.

El miércoles 23 de marzo, en medio de una ardua discusión, subió a la tribuna la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del grupo de 14 diputados del PRD que se declararon en contra del resto de su fracción legislativa. Sos-

tuvo que en modo alguno son diputados radicalizados, "del todo o nada". "El tiempo dirá —subrayó— quiénes fueron los diputados que asumieron con sensatez, con responsabilidad y madurez, su voto a la hora de decir sí o no a esto que continúa siendo un maquillaje electoral".

En su turno, el veracruzano Juan Antonio Nemi Dib, del PRI, aseveró que "el cambio que nos exige a todos la nación debe rechazar los purismos,

sas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.

El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la Ley. Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la Ley. Los magistrados del Tribunal deberán satisfacer los requisitos que establezca la Ley, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta del Presidente de la República.

Los consejeros ciudadanos del órgano superior de dirección deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los grupos parlamentarios en la propia Cámara. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

Reformas al artículo 41

El texto de los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 constitucional, reformados en el periodo extraordinario, quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 41.

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección se integrará por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo y por representantes nombrados por los partidos políticos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las me-

esos purismos que devienen en dogma y la simple, absoluta, irracional negación de los contrarios". Por ello, sentenció, "los señores diputados que se decidan a votar en favor de la iniciativa, lo estarán haciendo en favor de más democracia para México".

Francisco Saucedo Pérez, de la fracción parlamentaria del PRD, en una larga intervención, aseguró que si bien las reformas a la legislación electoral "avanzan en la incorporación de pro-

La reforma al artículo 41 constitucional fue aprobada con 339 votos a favor y 35 en contra

**Mesa directiva del segundo
periodo extraordinario de sesiones
Primer receso del tercer
año de ejercicio
(23-25 de marzo de 1994)**

Presidente

Francisco Arroyo Vieyra (PRI)

Vicepresidentes

Layda Elena Sansores San Román (PRI)
Daniel De la Garza Gutiérrez (PAN)
Miguel Angel León Corrales (PRD)
Israel González Arreguín (PFCRN)
Francisco Dorantes Gutiérrez (PARM)

Secretarios

Jorge Vinicio Mejía Tobías (PRI)
Germán Petersen Biester (PAN)
Jorge Leobardo Lepe García (PRI)
Juan Hernández Mercado (PRD)

Prosecretarios

Marlene Catalina Herrera Díaz (PRI)
Teófilo Martínez Vergara (PFCRN)
Yolanda Elizondo Maltos (PARM)
Edmundo Sosa López (PRI)

puestas que han sido planteadas desde hace mucho tiempo por organizaciones sociales, civiles y políticas, a fin de cuentas son una reforma limitada”.

A su vez, por el PRI, Agustín Basave Benítez —en uso de la palabra para rectificar hechos— sostuvo que “está quedando claro quiénes quieren privilegiar el proceso que culmina el 21 de agosto, y quiénes quieren privilegiar el proceso que empieza el 22 de agosto”.

Por su parte, los legisladores Raymundo Cárdenas Hernández y René Bejarano Martínez, enunciaron las dos posturas opuestas del PRD, que se pusieron en la palestra de la discusión durante todo el debate. Por un lado, a favor de la reforma electoral, Cárdenas expuso que se considera ésta como un avance, si bien “no suficiente”; por el otro, Bejarano se opuso, porque “la propuesta no garantiza elecciones confiables, limpias, transparentes”.

En el debate, diputados del PPS y el PFCRN reiteraron también su oposición a las reformas, en tanto que legisladores perredistas abundaron en la definición de las dos posiciones de su grupo parlamentario.

Así, la votación nominal determinó la aprobación de las reformas al artículo 41 constitucional con los votos a favor del PRI, PAN, PARM y una parte mayoritaria del PRD, lo que en conjunto significó 339 sufragios. En contra estuvieron 35 diputados, específicamente del PPS, el PFCRN y una porción menor del PRD, integrada por 14 diputados.

Rigor contra delincuentes electorales

Por la tarde del mismo miércoles 23, los diversos grupos parlamentarios rea-

nudaron los trabajos para discutir las reformas al capítulo del Código Penal relativo a los delitos electorales.

De acuerdo con la minuta procedente del Senado, la reforma tenía como objeto “clarificar y sancionar con mayor rigor, aquellas conductas atípicas en las que pudiera incurrir cualquier persona (ministros de culto religioso, funcionarios electorales, funcionarios partidistas o servidores públicos) en relación al proceso electoral federal del presente año”.

La iniciativa —firmada por el PRI, el PAN, el PRD y el PARM— presentó modificaciones a los artículos 402, 403, 404, 405, 406, 407 y 409 del Código Penal, así como adiciones al 403, 405 y la creación de los artículos 411, 412 y 413.

El debate lo inició el perredista Gilberto Rincón Gallardo, quien recalcó que si bien “por sí misma la ley no elimina las irregularidades electorales, estas medidas legales son un principio muy importante, sobre todo porque vivimos momentos de cambio, de cambios políticos y de cambio en la correlación de fuerzas”.

A continuación, Juan José Rodríguez Prats, del PRI, conminó a la concurrencia para superar “la cultura maniquea”. “Superemos —agregó— el encasillamiento y procuremos que esta ley obligue a todos y que todos la respetemos, que esta es la nueva cultura política que debe prevalecer rumbo a la elección del 21 de agosto”.

Gonzalo Cedillo Valdés, del PARM, expresó ante el pleno que las deliberaciones sostenidas en el recinto legislativo “no son más que el reflejo fiel de la necesidad surgida en el momento histórico social que nuestro país vive”; por ello, agregó, se dio “la adecuada

Las modificaciones al Código Penal

buscan clarificar y sancionar con mayor rigor

conductas ilícitas en relación con el

proceso electoral federal

Los delitos electorales

Conforme a las reformas al Código Penal aprobadas por la LV Legislatura, se consideran delitos electorales:

- *Hacer proselitismo o presionar a los sufragantes el día de la jornada electoral.
- *Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio o el cómputo de votos.
- *Recoger sin causa legal credenciales de elector.
- *Solicitar votos a cambio de dinero u otra recompensa.
- *Violar el secreto del voto.
- *Votar o pretender votar con credencial ajena al titular.
- *Reunir o trasladar votantes e influir en el sentido del sufragio el día de la elección.
- *Introducir o sustraer ilegalmente en las urnas boletas electorales.
- *Destruir o alterar boletas o documentos electorales.
- *Comprometer el voto mediante declaración firmada, o bien por medio de amenaza o promesa.
- *Impedir en forma violenta la instalación de una casilla.

*Inducir el sentido del voto, acto éste realizado por ministros de culto religioso.

*Sustraer o destruir documentos electorales.

*Instalar una casilla en lugar diferente al indicado por la ley.

*Realizar actos contra la actuación de los representantes de los partidos.

*Obligar un funcionario público a sus subordinados a emitir su voto en favor de un candidato o partido.

*Condicionar la prestación de un servicio público o la realización de obras públicas a la emisión del voto en favor de un candidato o partido.

*Destinar fondos, bienes o servicios públicos al apoyo de un partido o candidato. Se contemplan igualmente penas adicionales a las ya existentes, tales como la inhabilitación y la destitución del cargo, si los infractores son funcionarios públicos o pertenecen a instancias electorales. Además, las sanciones serán acumulativas, no ya alternativas, de modo que se aumentarán también los montos de las multas, así como los correctivos en ilícitos que ameriten prisión.

proporcionalidad a las penas propuestas, para así erradicar las conductas antisociales en materia político-electoral”.

Carlos González Durán, del PRD, dejó asentado que se recibe esta reforma electoral “con buenos ojos, en la medida en que fortalezca esta decencia, esta rectitud y este no menoscabo de derechos que incorrectamente se han atropellado o no se han respetado en el pasado”.

Correspondía su turno al quinto orador, Israel González Arreguín, del PFCRN, cuando —alrededor de las 19:30 horas— el rumor de que había ocurrido un atentado contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por el PRI, inquietó a los legisladores presentes. Entonces, la diputada Luisa Álvarez Cervantes, del Frente Cardenista, pidió al presidente de la mesa directiva que decretara un receso, pues-

to que, advirtió, había “noticias graves” que así lo ameritaban.

No obstante, la coordinación parlamentaria tomó la decisión de llevar adelante la sesión y dar trámite a las reformas penales, parte sustancial de la llamada tercera reforma electoral.

El debate, sin embargo, ya no pudo proseguir, por lo que después de la intervención de González Arreguín —último orador en la lista—, que cuestionó las reformas a las que calificó de “excluyentes”, finalmente se procedió a la votación, lográndose la aprobación del dictamen enviado por el Senado, con el apoyo de 268 votos en pro, 23 en contra y dos abstenciones.

Así, se aprobó la primera fase de la reforma electoral más reciente. La parte complementaria, que incluiría las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), quedó por discutirse en el periodo ordinario que iniciaría en abril.

Acto seguido, representantes de los seis grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para condenar de manera enérgica y unánime el atentado contra el candidato del PRI. El secretario de la Gran Comisión, Miguel González Avelar, leyó un documento, que fue signado por todas las fracciones, donde se afirmaba que “la democracia acaba de recibir un brutal atentado por manos de quienes con la violencia pretenden desestabilizar al país y crear un ambiente de incertidumbre y confusión entre todos los mexicanos”, y añadía: “ratificamos que la democracia es la única vía legítima y aceptable moralmente para encarar en México nuestra vida política y social”.

El periodo extraordinario se clausuraría la tarde del día siguiente, 24 de marzo.

LV

Ahora en Centroamérica

Entre los países de América Latina que renovarán sus órganos parlamentarios durante 1994 —más de una docena—, hay dos centroamericanos que, con muy diferentes características uno del otro, realizaron sus procesos electorales hace unas cuantas semanas: Costa Rica y El Salvador.

El Congreso unicameral de Costa Rica es una de las legislaturas más pequeñas, no sólo de la región, sino de todo el mundo, con sólo 57 miembros. El domingo 16 de febrero, este país centroamericano, reconocido por su civilidad y su cultura política, llevó a cabo los comicios para integrar la asamblea legislativa y para designar al Ejecutivo y a las autoridades de 81 municipalidades.

La contienda fue avalada por más de 120 observadores internacionales. Participaron en las elecciones 16 partidos, aunque dos de ellos, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN), acapararon el 85 por ciento de los votos ejercidos por más del 80 por ciento del electorado.

El triunfo en los comicios legislativos correspondió al PLN, que conquistó 28 curules. Por su parte, los socialcristianos alcanzaron 25, mientras los partidos minoritarios sólo lograron obtener cuatro.

El domingo 20 de marzo se efectuaron en El Salvador las elecciones más esperadas en mucho tiempo, luego de la firma de

los acuerdos de paz hace dos años. No obstante algunas denuncias que no lograron enturbiar el proceso, la jornada transcurrió, a juicio de candidatos de todas las tendencias, autoridades electorales y tres mil observadores internacionales, sin mayores sobresaltos.

La elección del Ejecutivo tuvo que quedar pendiente para una segunda ronda electoral, programada para el 24 de abril, toda vez que el requisito constitucional de obtener el 50 por ciento de los votos más uno, no fue alcanzado por ninguno de los contendientes. En la segunda vuelta triunfó el candidato de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Armando Calderón Sol, que superó en la elección presidencial a Rubén Zamora, postulado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En cuanto a la elección de los miembros del Congreso para los próximos tres años, en la que participó media docena de partidos, Arena obtuvo la mayoría parlamentaria con la asignación de 39 diputados. El segundo lugar fue para el FMLN, con 21 curules, y el tercero, para el Partido Demócrata Cristiano, con 18.

Las seis diputaciones restantes —de un total de 84— se repartieron entre el Partido Conciliación Nacional, con cuatro; Convergencia Democrática, con una, y Movimiento Unidad, también con una. LV

Participación femenina en el Legislativo

La presencia cada vez mayor de la mujer en los órganos legislativos mexicanos es resultado de una lucha tenaz iniciada ante el Congreso Constituyente en 1916-1917. Reconocido su derecho al sufragio y a ser elegidas apenas en 1953, un total de 357 mujeres han llegado hasta ahora a las cámaras federales, 330 de ellas como diputadas y 27 como senadoras. Dos de ellas, además, han destacado como líderes de la fracción mayoritaria de la Cámara baja: Socorro Díaz, en la LIV Legislatura, y María de los Ángeles Moreno, en la actual LV Legislatura.

Foro Electoral, órgano del Instituto Federal Electoral (IFE), publicó en su número 6, al inicio de la actual Legislatura, un estudio sobre la participación política femenina.

El trabajo recuerda que, aunque había ya algunos antecedentes, es en el Constituyente de Querétaro cuando a través de Herminia Galindo se presenta una solicitud expresa en pro del sufragio femenino. En esa ocasión, sin embargo, se argumentó que no todas las mujeres estaban capacitadas para ejercer los derechos políticos, juicio que determina la decisión final de mantenerlas formalmente al margen de la vida política en México.

A pesar de esta negativa, varios gobernadores de la época, entre ellos Felipe Carrillo Puerto, de Yucatán, y Tomás Garrido Canabal, de Tabasco, decidieron integrar a la mujer a la vida política. No sólo le concedieron el voto, sino también apoyaron varias candidaturas femeninas al cargo de regidoras y diputadas locales.

En agosto de 1935, el movimiento feminista independiente se unificó en el Frente Unico Multiclasista, una vez

constituido en el Frente Unico Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM) con 800 organizaciones y cerca de 50 mil asociadas. Tres años después, este organismo intentó dar un impulso definitivo a su causa al apoyar la precandidatura de Refugio García para diputada federal por Uruapan, y la de Soledad Orozco como legisladora local por León en los plebiscitos del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Sin embargo, su registro por parte de la organización les fue negado.

Hacia el derecho al sufragio

Después de este episodio, el presidente Lázaro Cárdenas presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución para corregir la exclusión política de las mujeres. El proyecto recibió el respaldo del Senado de la República. Turnado luego a la Cámara de Diputados, se decidió, no obstante, posponer su aprobación

para después de la Asamblea Constituyente del Partido de la Revolución Mexicana (marzo de 1938). Y otra vez quedó pendiente.

El reclamo se mantuvo vivo. Tanto, que en la contienda electoral de 1945-1946 el tema de los derechos políticos de la mujer quedó incorporado como uno de los asuntos principales de la plataforma política de casi todos los candidatos presidenciales.

Con la restructuración del partido oficial para convertirlo en Partido Revolucionario Institucional (PRI), en enero de 1946, la participación femenina recibió una fuerte promoción al incrementarse la cuota de participación de mujeres en los cuerpos directivos de la organización. De manera adicional, apenas tres días después de haber tomado posesión de su cargo, el presidente Miguel Alemán envió una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la fracción primera del artículo 115 constitucional, a fin de



SERGIO MENDOZA



mujer quedó formalmente incorporada en la vida política de México.

Mujeres a las cámaras

Es evidente que, de los tres Poderes de la Unión, es el Legislativo donde la mujer ha participado con mayor intensidad. Su presencia se constata desde la XLII Legislatura, con la elección en 1954 de la licenciada Aurora Jiménez Palacios a la Cámara de Diputados por el único distrito de Baja California.

La primera participación femenina en la Cámara de Senadores fue un poco más tardía. No ocurrió sino hasta la XLVI Legislatura, la que contó con la presencia de las senadoras María Lavalle Urbina, por el estado de Campeche, y Alicia Arellano Tapia, por el de Sonora.

Desde que el derecho a voto para la mujer quedó garantizado a todo nivel, 357 han ocupado un lugar en el Poder Legislativo Federal (gráficas 1 y 2).

otorgar el voto a la mujer en elecciones municipales.

Durante la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, un grupo de mujeres priistas encabezadas por Margarita García Flores, dirigente de Acción Femenil de su partido, sostuvo una entrevista con el candidato con el propósito de solicitarle su apoyo en el reconocimiento constitucional del sufragio femenino. En respuesta, Ruiz Cortines les ofreció su aval, con la condición de que acompañaran su demanda con la firma de 20 mil mujeres, condición que se cumplió con la coor-

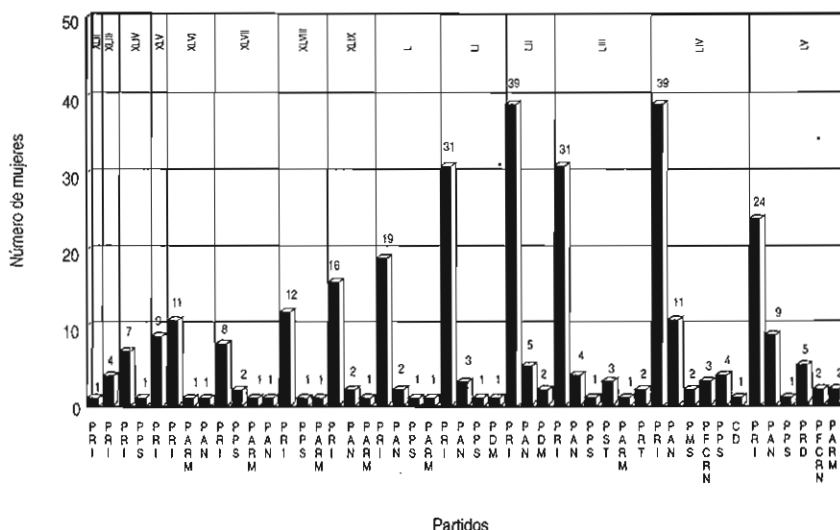
dinación de esfuerzos de las integrantes de Alianza de Mujeres de México.

En su discurso de toma de posesión, el primero de diciembre de 1952, el nuevo Presidente de la República anunció que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 34 y 115, lo que en efecto hizo poco después. El proyecto, finalmente, fue aprobado por ambas cámaras federales y publicado el 17 de octubre de 1953. A partir de esa fecha, la

*En el
Constituyente se
argumentó que no
todas las mujeres
estaban capacitadas
para ejercer los
derechos políticos*



Gráfica 1



Importante resulta destacar que la primera diputada perteneciente a un partido minoritario fue Macrina Rabadán Santa Ana del Arenal, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista (PPS) en la XLVI Legislatura. En tanto, la primera mujer de un partido de oposición que accedió al Senado, fue Ifigenia Martínez Hernández en la pasada LIV Legislatura.

El número de mujeres que ha llegado a las cámaras de nuestro Congreso es en primera instancia resultado del apoyo otorgado al sector femenino por cada organización partidista. En el proceso electoral de 1988, el PRD (entonces Frente Democrático Nacional) ocupó el primer lugar en este rubro al promover un 30 por ciento de candidaturas femeninas, mientras que en el PRI se destinó a las mujeres el 11 por ciento y en el PAN el 8.7 por ciento.

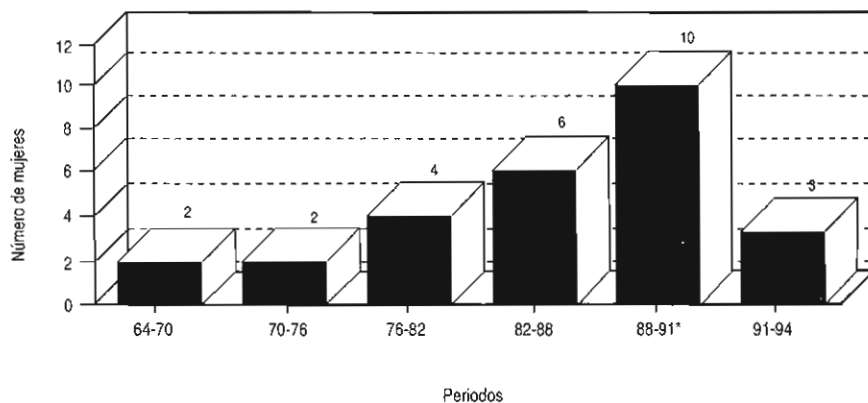
En las elecciones de 1991 para integrar la LV Legislatura, de dos mil 912

FUENTE: Archivo de la Cámara de Diputados.

fórmulas registradas de mayoría relativa para la Cámara de Diputados, 424 correspondieron a mujeres, lo que equivale a 14.56 por ciento del total (y 23.96 por ciento para el cargo de suplente). En lo que toca al Senado, de un universo de 297 candidaturas, 33 en la modalidad de propietarias fueron femeninas, dato que corresponde al 11.11 por ciento (19.52 por ciento de los suplentes).

Aunque en constante crecimiento, el número de legisladoras está lejos aún de corresponder al peso de las mujeres en la población total

Gráfica 2



* Una pertenció al FDN

FUENTE: *El Senado Mexicano*, Senado de la República, 1987.

De estas cifras se puede concluir que el número de mujeres legisladoras ha estado lejos de tener correspondencia con su peso en el censo nacional de población. No obstante, es indiscutible que su participación ha mostrado una tendencia constante hacia el crecimiento, lo que permite prever que en el futuro, dada la modernización de la sociedad mexicana, su participación con seguridad será ampliada en beneficio de la actividad legislativa y del país entero.

Legisladoras: intercambio de experiencias

En Canadá, la participación de la mujer en puestos de elección popular ha tenido, en cosa de dos décadas, un crecimiento acelerado. Mientras en 1970 la Cámara de los Comunes no registraba participación femenina alguna, a la fecha el 18 por ciento de las posiciones del Parlamento canadiense se encuentran ocupadas por mujeres.

Entre otros testimonios que contribuyeron al conocimiento y análisis de la situación de la mujer en el mundo moderno, se contó el anterior, vertido por la viceprimer ministra de Canadá, Sheila Copps, en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Legisladoras, realizado del primero al 3 de marzo en la ciudad de Puebla.

Con la participación de diputadas federales y locales, senadoras, asambleístas, académicas y representantes de partidos políticos y congresos de otras naciones, este Segundo Encuentro dividió sus actividades en cuatro mesas de trabajo, todas ellas coordina-

das por diputadas federales de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara baja.

Los temas de las mesas y sus correspondientes coordinadoras fueron:

—“La soberanía nacional en el mundo de hoy”: Julieta Guevara Bautista (PRI) y María Guadalupe Salinas Águila (PAN);

—“El desarrollo de la cultura política en el mundo contemporáneo”: Irma Piñeyro Arias (PRI), Patricia Ruiz Anchondo (PRD) y Yolanda Elizondo Malto (PARM);

—“Crecimiento económico y marginalidad social”: Layda Sansores San Román (PRI) y Luisa Álvarez Cervantes (PFCRN); y

—“La globalización y regionalización en el escenario internacional”: Julieta Mendivil Blanco (PRI) y Gabriela Guerrero Oliveros (PPS).

En la inauguración del Encuentro —cuya organización fue estimulada por los buenos resultados del Primer Encuentro celebrado en Ixtapan de la Sal, Estado de México, en octubre de

1992— la presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, María de los Ángeles Moreno, hizo énfasis en la responsabilidad de las legisladoras: “tenemos la obligación de hacer política permanente; realizar y mejorar este quehacer grande y limpio que busca, en esencia, servir a la colectividad”, afirmó.

Pese a los éxitos alcanzados por el género femenino en su actividad pública —documentados por diversas participaciones en este Encuentro—, fue preciso reconocer que aún no se han logrado en la práctica las condiciones para la participación de la mujer con igualdad política y económica. Este sector, se dijo, continúa ocupando la mayoría de los empleos en las categorías de más bajos ingresos, a la vez que sigue siendo menor la participación femenina en cargos de representación popular y en la administración pública y privada.

Además de legisladoras mexicanas, participaron en esta reunión reconocidas analistas como Soledad Loaeza, Paulina Fernández Christlieb, Hilda Aburto e Ikram Antaqui, así como representantes del Servicio Exterior Mexicano, como Rosario Green, Aída González y Alejandro Carrillo Castro. También aportaron sus experiencias y puntos de vista, mujeres de otras naciones, entre las que se cuentan la escritora Isabel Allende y la arquitecta Mónica Baeza Córdor, ambas de Chile; la licenciada Eglee Isava Emanuelli, de Argentina; la diputada Nieves Alemañá, de Cuba; Hortensia Gutiérrez, del Parlamento de Andalucía; Benedita Souza da Silva, del Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro, y la profesora Rina Martha Leiva, de Venezuela.



Seguridad pública, debate y reformas al Cofipe

Una nueva serie de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), fue tarea primordial de los diputados durante el primer mes del último periodo ordinario de sesiones de la LV Legislatura, iniciado el 15 de abril



La correspondiente a las reformas al Cofipe fue la única iniciativa que se debatió durante el primer mes de sesiones. En el resto de las jornadas camarales, asuntos de diversa índole fueron abordados desde la tribuna. Entre ellos, destacó la polémica sobre la recientemente creada Coordinación de Seguridad Pública de la Nación.

En la sesión del 27 de abril, la perredista Rosa Albina Garavito Elías se refirió a la nueva Comisión, creada por disposición del Ejecutivo Federal el día 25 de ese mes. Recordó la legisladora que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, además de que la seguridad pública, según el artículo 115 constitucional, está encomendada a los municipios, por lo que la creación del nuevo organismo violenta la norma constitucional.

Además, continuó la oradora, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal —aplicable a la creación de la Coordinación, según dijo— se refiere a las coordinaciones que puede tener la Presidencia de la República, pero éstas deben inscribirse en el marco de la administración pública y no pueden contravenir ni la jerarquía ni las facultades indelegables que la ley establece. La diputada perredista propuso un punto de acuerdo, finalmente rechazado, para que el fundamento constitucional del decreto que crea la Coordinación de Seguridad fuese examinado en comisiones.

Los argumentos de Rosa Albina Garavito en contra de la Coordinación de Seguridad fueron apoyados por sus compañeros de bancada Guillermo Flores Velasco y Carlos González Durán, además del diputado pepesista Juan Jacinto Cárdenas García y del panista José Francisco Paoli Bolio.

A su vez, el PRI, el PARM y el PFCRN se mostraron a favor de la creación del nuevo organismo. Coincidieron en

Iniciativas

Discapacitados. El 20 de abril, la diputación del PAN presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional Pro Personas con Discapacidad, organismo que tendría, entre otras, la finalidad de elaborar un plan nacional para el desarrollo de personas con ese problema. El Instituto buscaría promover las adecuaciones legales pertinentes para que los ocho millones de personas que se encuentran en esta situación pudieran gozar de mejores condiciones de vida en todos los órdenes.

En la sesión del 27 de abril, el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa para realizar modificaciones a diversas leyes federales para garantizar a la población discapacitada el pleno goce de sus derechos. La iniciativa pretende modificar el articulado de la Ley Aduanera, de las leyes generales de Asentamientos Humanos, Educación, Protección al Consumidor, y de la Ley Federal de Turismo. Asimismo, la fracción perredista presentó al pleno un punto de acuerdo sobre la creación del Sistema Nacional de Información de la Población Discapacitada y otro sobre la creación e inserción de materias sobre la problemática y atención de la población discapacitada en los planes de estudios superiores de las universidades y tecnológicos del país.

Más sobre el Cofipe. El 4 de mayo, los diputados parmistas Javier Centeno Ávila y Adolfo Kunz Bolaños, junto con el diputado sin grupo parlamentario, Pablo Emilio Madero, presentaron una iniciativa para efectuar diversas modificaciones al Cofipe, especialmente en cuanto a la integración del Consejo General del IFE y al financiamiento a los partidos.

*L*a nueva Coordinación de Seguridad Pública provocó encendidos debates

que la seguridad nacional se había tornado un problema de principal importancia en los últimos tiempos. Sin embargo, el diputado frentista Odilón Cantú Domínguez consideró conveniente la comparecencia de Arsenio Farell Cubillas, titular de la Coordinación, para que informara a los diputados acerca de los planes y programas que dicho cuerpo implementaría.

De singular interés fue el debate que sostuvieron las fracciones del PAN y del PRI en torno a la constitucionalidad de la Coordinación. Por el PAN, Francisco Paoli Bolio, a través de numerosas intervenciones, precisó que de acuerdo con el 89 constitucional, el establecimiento de reglamentos era facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que las facultades otorgadas al organismo de seguridad eran extra-legales. Asimismo, consideró a esta unidad como una entidad supraordenada a las otras dependencias de la administración pública, debido a que no se presentaba como una coordinación intersecretarial.

Por el PRI, Juan José Rodríguez Prats, Juan José Castillo Mota y Cuauhtémoc López Sánchez Coello, opusieron sus argumentos a los del PRD y el PAN. Afirmaron que la creación de la Coordinación se fundaba legalmente en el artículo 89 constitucional y en el 8o. de la Ley de la Administración Pública Federal. Este

último, según señalaron los priistas, da al Ejecutivo la facultad para crear las unidades de coordinación que requiera. Además, abundó López Sánchez, según el artículo 89 de la Constitución, el Ejecutivo tiene la facultad de generar diversas disposiciones hacia el interior de la propia administración, que por su carácter no surten efecto en los particulares. Por otra parte, señalaron que la Coordinación no sustituiría las funciones de otras dependencias ni afectaría la soberanía de los estados, sino que, por el contrario, haría más expedita y organizada la acción de las distintas dependencias.

Sin embargo, el panista Paoli Bolio insistió en que las acciones de la Coordinación sí afectarían a los particulares, y aseveró que el decreto que creaba la Coordinación violaba la legalidad al conferirle la facultad de dictar lineamientos y celebrar convenios con otros organismos.

Tercera reforma electoral

ue en la última sesión del mes, el 12 de mayo, cuando se presentó el dictamen de la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), conocida como la tercera reforma electoral del sexenio. Esta iniciativa había sido presentada por los grupos parlamentarios del PRI, el PAN, el PRD y el PARM.

Esto ocurrió después que, desde la tribuna, el diputado Juan José Rodríguez Prats renunciara a su militancia partidaria luego de 29 años de pertenecer a las filas del PRI. La decisión del legislador tabasqueño, según señaló, se debió a su inconformidad con la forma en que se había seleccionado a

Las modificaciones al Cofipe están encaminadas a dar mayor credibilidad a los comicios

los candidatos a senadores por su partido.

Luego de que el PPS presentó una propuesta de moción suspensiva, que no prosperó, los legisladores debatieron los principales puntos de la reforma, sintetizados por Cuauhtémoc López Sánchez Coello al fundamentar el dictamen. El diputado priista expresó que la modificación en la integración de los órganos calificadoros de las elecciones era parte fundamental de la reforma. "Los partidos políticos dejan de ser juez y parte para convertirse en actores del proceso, por lo que al suprimírseles el derecho a voto se fortalece la garantía de la ciudadanía de contar con procesos electorales claros y transparentes", dijo. El legislador externó su coincidencia con la posibilidad de que extranjeros acudieran en calidad de visitantes a presenciar el proceso electoral.

Por el PAN, Jorge Zermeño Infante y Francisco Paoli Bolio sentaron la postura de su partido. En distintas oportunidades consideraron que la integración del Consejo General del IFE con miembros de la sociedad civil, así como la supresión del voto de calidad del presidente del Instituto, y del voto de los representantes de los partidos, significaba un claro avance en la imparcialidad de los órganos electorales, punto en el que se alcanzó el mayor consenso, pues en él coincidieron las fracciones del PAN, PRI, PARM y PRD. Paoli Bolio externó su beneplácito porque se reconociera como derecho de los ciudadanos la posibilidad de constituirse en observadores electorales. Además, el legislador panista hizo hincapié en la trascendencia de que en esta reforma hubieran concurrido las tres principales fuerzas políticas del país.

Los priistas Francisco Arroyo Vieyra y Luis Alberto Beauregard Rivas manifestaron su acuerdo con las reformas. Ambos legisladores las consideraron producto de un esfuerzo de responsabilidad y voluntad democrática de las fracciones que las suscribían. Beauregard Rivas destacó la facultad que tendrán los consejos locales para imponer topes a los gastos de campaña, así como la disminución de los requisitos para ser miembro de los mismos.

Por el PARM, Servando Hernández Camacho se pronunció a favor de la reforma y ponderó que los requisitos de elegibilidad para los consejeros ciudadanos se hubieran flexibilizado y que se hubiera suprimido el voto de calidad del presidente del Consejo, así como el voto a los representantes de los partidos.

No todo, sin embargo, fue consenso. Una parte de la fracción del PRD consideró que el alcance de las reformas al Código era insuficiente para asegurar la entera transparencia de los comicios de agosto.

La confiabilidad del padrón electoral, el acceso equitativo a los medios de comunicación y el control de recursos otorgados a los partidos fueron algunos de los puntos que el coordinador del grupo parlamentario perredista, Ricardo Valero Recio, estimó fundamentales para alcanzar un marco jurídico satisfactorio. Reconoció, pese a ello, que la ampliación de posibilidades para que los ciudadanos observaran las elecciones y el nuevo calendario para la entrega de las listas de electores y para la continuación de la fotorecensalización, eran reformas positivas. En su turno, Carlos González Durán, también del PRD, expuso su

Iniciativas

Presupuesto federal. En la sesión del 4 de mayo, la fracción del PRD propuso modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1994. En sus argumentaciones, consideró pertinente elevar las participaciones a los estados y municipios para obtener recursos de los montos destinados al Programa Nacional de Solidaridad. Asimismo, expresó la necesidad de dar un giro a la política económica actual, en vista de la disminución de las reservas nacionales, así como por el aumento de la deuda pública interna.

Seguro Social. El PAN presentó, en la misma ocasión, dos iniciativas. Una encaminada a modificar el artículo 99 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que, en caso de enfermedad, el Instituto otorgue al asegurado y a sus familiares asistencia médica de prótesis y ortopedia, además de las prestaciones en especie que actualmente se establecen. La segunda, también con respecto a la Ley del IMSS, busca ampliar la cobertura del Seguro Social para que los hijos de los derechohabientes con problemas de discapacidad reciban atención especial de guardería.

Pensiones. La última de las iniciativas propuestas por los partidos en este primer mes, correspondió al grupo parlamentario del Revolucionario Institucional. Presentada el 10 de mayo, esta iniciativa propuso modificar el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, para establecer que las pensiones otorgadas a los trabajadores no pudieran ser inferiores al 100 por ciento del salario mínimo general. El dictamen de esta iniciativa sería aprobado en el siguiente mes de sesiones.



CUARTOSCUINO

aprobación a las reformas, señalando que la presencia de los observadores y "el fortalecimiento de las condiciones de equidad e integridad de los tribunales electorales" representaban un avance en la materia.

No obstante, su correligionaria Rosa Albina Garavito expresó que si el consenso sobre la reforma era que ésta resultaba insuficiente, no había congruencia en aceptarla, por lo que, a nombre de un grupo de miembros del PRD, exhortó a las distintas bancadas a votar en contra de las modificaciones.

En distintas oportunidades, Demetrio Hernández Pérez, del PFCRN, y Juan Campos Vega, del PPS, se opusieron a la reforma por considerar que no representaba un consenso plural, sino los acuerdos cupulares de tres partidos políticos. Ambas fracciones señalaron que los cambios tendían a favorecer el bipartidismo o el tripartidismo, haciendo a un lado el régimen plural de partidos. Campos Vega hizo notar que los representantes de las cámaras legislativas en el Consejo General del IFE corresponderían a la mayoría y a la primera minoría, y que la elección de los seis ciudadanos que fungirían como consejeros dependería del crite-

rio de las dos terceras partes de la Cámara, por lo que en realidad los cuerpos electorales no eran imparciales sino que beneficiaban exclusivamente a las dos principales fuerzas políticas. El pepesista ratificó la opinión de su fracción de que la "ciudadanización" de los organismos electorales lesionaba el sistema de partidos.

Si bien el debate en lo particular no fue tan intenso como el que tuvo lugar al momento de fijar posiciones y en la discusión en lo general, las fracciones camarales presentaron numerosas propuestas de modificación al dictamen. El total de enmiendas propuestas fue de 37. De ellas, sólo 11 fueron aceptadas: siete del PAN, dos del PRI, una del PFCRN y una del PARM. Todas las propuestas formuladas por el PRD, 25 en total, fueron rechazadas. Asimismo, los legisladores sin partido hicieron una propuesta que tampoco fue avalada por el pleno.

En general, las modificaciones realizadas al dictamen tendieron a precisar los términos del articulado, si bien el PAN logró enmendar el artículo 80 para establecer que los partidos políticos no podrán registrar en un mismo proceso electoral más de 60 candidatos a diputados federales simultáneamen-

te por mayoría relativa y por representación proporcional, así como el artículo 200, para estipular el derecho de los representantes de los partidos en las casillas, a observar y vigilar el desarrollo de la elección.

Las reformas al Cofipe fueron aprobadas en lo general por 266 votos en pro, seis en contra y 16 abstenciones. En lo particular, se emitieron 276 sufragios a favor, dos en contra y 12 abstenciones, siendo el artículo 33 el más impugnado, con 28 votos en contra y 248 a favor.

Guadalajara, debate, antimotines

Además de los asuntos referidos, una miscelánea de temas se abordó desde la tribuna durante el primer mes de este último periodo de sesiones.

El 20 de abril, el PRD y el PAN firmaron un punto de acuerdo para que a través de su Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados se allegue información sobre las investigaciones en torno a las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco. Ambos partidos coincidieron en la necesidad de aclarar la responsabilidad de los actores involucrados en el siniestro. En la misma sesión, el PRD presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo una reunión con los titulares de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), para que informaran al pleno acerca de las medidas tomadas en la reunión sobre Prevención de Desastres, efectuada el 29 de abril de 1992.

Por su parte, el PRI presentó una denuncia en contra del PRD por las acciones en las que un grupo de este partido tomó las oficinas de la junta

os diputados del PRI, PAN y PRD enfrentaron las críticas del PPS, PARM y PFCRN, en torno al debate de los candidatos presidenciales

ejecutiva del IFE en el Distrito Federal. La bancada del Revolucionario Institucional también denunció, en la sesión del 3 de mayo, al diputado panista Raymundo Gómez Ramírez, por haber aceptado el cargo de secretario particular del gobernador de Chihuahua sin solicitar previamente licencia como diputado federal.

El PRD exigió, a su vez, el 27 de abril, el desafuero del diputado priista Fernando Espino Arévalo, por su presunta participación en actos de violencia cometidos en contra de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. La denuncia sobre estas agresiones había sido presentada previamente por la diputada Luisa Álvarez Cervantes, del PFCRN, quien hizo un llamado a que el diálogo sindical se superpusiera a la violencia.

El 26 de abril, todos los partidos se refirieron al 50 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las fracciones coincidieron en la necesidad de que la estructura de la ONU se democratizara, de manera especial en la conformación del Consejo de Seguridad. El PPS hizo notar la importancia del Tratado de Tlatelolco, que México suscribiera con países latinoamericanos para evitar la proliferación de armas nucleares en la región.

En la misma sesión, los diputados del PRI, el PAN y el PRD se enfrentaron a las consideraciones que las bancadas del PPS, el PARM y el PFCRN hicieran en torno al debate que habrían de celebrar días más tarde los candidatos presidenciales. Estos tres partidos cuestionaron que el debate no fuera lo suficientemente plural, además de afirmar que formaba parte de una tendencia para favorecer el tripartidismo. A

su vez, los legisladores de las tres principales fracciones afirmaron que celebrar un debate con los nueve aspirantes a la Presidencia ofrecía numerosas dificultades técnicas y negaron que el encuentro programado para el 12 de mayo lesionara en modo alguno la pluralidad. Asimismo, el PAN hizo notar que el impacto del debate se debía

a que en él concurrían las tres principales fuerzas políticas del país.

En su momento, el PRD denunció el asesinato del doctor Lauro Pérez Domínguez, presidente de ese partido en Yecuatla, Veracruz. Asimismo, el panista Víctor Orduña Muñoz acusó al internado "La gran familia", de Zamora, Michoacán, de retener a los menores en contra de su voluntad y la de sus padres. En sesión posterior, el 10 de mayo, el PARM dio a conocer la desaparición de su militante Gilberto Coronado Meléndez, en Tijuana, Baja California, mientras que el PAN informó sobre la presunta apropiación ilícita por parte del PRI de un bien inmueble localizado en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León.

Con motivo de la celebración del Día del Trabajo el primero de mayo, en la sesión del miércoles 27 de abril los legisladores coincidieron en la necesidad de establecer políticas económicas que permitieran recuperar el poder adquisitivo del salario, así como favorecer la creación de empleos.

Una semana más tarde, el 3 de mayo, el diputado Miguel Enciso Clark, del PAN, presentó en tribuna una denuncia en contra del secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, por presuntas apropiaciones ilegales de terrenos en Tijuana, Baja California. Por su parte, el PRD y el PFCRN expresaron su preocupación por la adquisición que el gobierno federal hiciera de equipo antitotines. Diputados de dichas fracciones consideraron que la seguridad nacional era un problema que no podía solucionarse mediante la represión. Este tema seguiría siendo motivo de polémica en las sesiones correspondientes al segundo mes. LV

Mesa directiva del primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones: 15 de abril a 15 de mayo de 1994

Tercer año de ejercicio

Presidente

Pedro Ojeda Paullada (PRI)

Vicepresidentes

Manuel Garza González (PRI)

J. G. Tarcisio Rodríguez

Martínez (PAN)

Carlos González Durán (PRD)

Abundio Ramírez Vázquez (PFCRN)

Manuel Laborde Cruz (PARM)

Francisco Hernández Juárez (PPS)

Secretarios

Ignacia García López (PRI)

Juan Huesca Pérez (PAN)

José Ignacio Mendicuti Pavón (PRI)

Guillermo Sánchez Nava (PRD)

Prosecretarios

Alberto Monterde Reyes (PRI)

Tomás Correa Ayala (PFCRN)

Javier Colorado Pulido (PARM)

Héctor Morquecho Rivera (PPS)

Ciudadanización de las elecciones

Las modificaciones a 23 artículos del Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), aprobadas el 12 de mayo, reglamentan el nuevo texto del artículo 41 constitucional, modificado a su vez en el periodo extraordinario de marzo pasado.

Como se reseña en las primeras páginas de esta edición de *Crónica Legislativa*, dichas reformas constitucionales se refieren a la organización e integración de los órganos del Consejo Federal del Instituto Federal Electoral (IFE), que ahora cuentan con una mayor participación de la ciudadanía. Por ello se ha señalado que estas reformas implican la *ciudadanización* de los órganos electorales.

Esta característica, así como la consagración del derecho ciudadano para observar los procesos electorales antes y después de los comicios, y no sólo durante ellos, fueron dos de los puntos fundamentales de la iniciativa de reformas, presentada por los grupos parlamentarios del PRI, el PAN, el PRD y el PARM.

Cabe señalar que estas reformas representan el esfuerzo más reciente de la presente Legislatura para conformar un marco jurídico que asegure la celebración de elecciones transparentes y confiables el próximo 21 de agosto.

Las principales innovaciones al Cofipe son:

De los observadores

En el apartado 33 del artículo 5o., se establece el derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos para participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral.



CUARTOSOLINO

Se estableció la independencia del Consejo General del IFE, máximo organismo electoral

Los observadores podrán solicitar ante la Junta Local correspondiente, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, siempre y cuando no sea confidencial en los términos fijados por la ley.

Los ciudadanos o agrupaciones interesadas deberán acreditarse ante la Junta Local o Distrital correspondiente a su domicilio y tendrán la facultad de observar los procesos electorales en cualquier parte del territorio nacional.

Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral en una o varias casillas, así como en el local del Consejo Distrital correspondiente.

Este artículo, además, especifica aquellas partes de la elección que los observadores podrán presenciar: instalación de la casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla, clausura de la casilla, lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital y recepción de escritos de incidencias y protesta.

Con respecto a los observadores extranjeros, el artículo 82 estipula que su presencia estará regulada por el Consejo General del IFE, que podrá invitar a los denominados *visitantes extranjeros* y acordar las bases y criterios con que se les habrá de atender e informar.

De los órganos electorales

Se establece la independencia del Consejo General del IFE, máximo organismo electoral, como principio rector de sus actividades (artículo 73).

De especial importancia fueron las reformas al artículo 74, en el que se estipula la forma como se integrará este órgano, que constará de un consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros del Poder Legislativo y seis consejeros ciudadanos. Además, contará con representantes de los partidos políticos nacionales.

Para la elección de los consejeros ciudadanos, se prevé que cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados proponga hasta cuatro candidatos. La comisión correspondiente de la Cámara formará una lista de candidatos de número hasta dos veces mayor de los seis requeridos. Con base en esa lista y por mayoría de las dos terceras partes de los presentes, se elegirá en el pleno de la Cámara a los representantes de la sociedad civil en el Consejo.

Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los consejeros ciudadanos, se elegirá también a seis consejeros suplentes a partir de una lista adicional creada para tal efecto por los grupos parlamentarios.

Los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes durarán ocho años en su cargo. Sin embargo, los consejeros ciudadanos que actuarán en el proceso electoral de 1994, durarán en

su cargo sólo hasta el 30 de noviembre de 1994 y podrán ser ratificados. Esta ratificación o el nombramiento de los nuevos consejeros ciudadanos para el periodo 1994-2002, estará a cargo de la LVI Legislatura, que deberá cumplir esa función en el primer periodo de sesiones ordinarias de su primer año de ejercicio, de acuerdo con el artículo tercero transitorio.

Entre los requisitos para ser consejero ciudadano, que se norman en el artículo 76, se suprime el de ser abogado, que se sustituye por el de poseer un título profesional o tener formación equivalente y conocimientos en materia político-electoral. Además, se disminuye la edad mínima de 35 a 30 años, y se reduce de cinco a tres años el lapso mínimo que deberá haber transcurrido antes de la designación como consejero, en caso de que el candidato haya desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político.

De particular relevancia es la supresión del voto de calidad con que contaba el presidente del Consejo General del IFE, según el artículo 79.

Cabe mencionar, además, que los partidos políticos podrán sustituir en cualquier momento a sus representantes y que éstos tendrán derecho a voz pero no a voto, tanto en el Consejo General como en los consejos locales y distritales.

De las juntas y los consejos

En el primer apartado del artículo 100, se establece como atribución de las juntas locales ejecutivas el formular y presentar al Consejo Local el proyecto de tope máximo de gastos que pueden erogar los partidos políticos en las



Los magistrados del Tribunal Federal Electoral serán electos por la Cámara de Diputados

campañas senatoriales. Las juntas locales serán también las encargadas de acreditar a los ciudadanos y agrupaciones como observadores electorales.

Por otra parte, el número de consejeros ciudadanos integrantes de los consejos locales y distritales se reduce de nueve a seis, de acuerdo con los artículos 102 y 113, respectivamente.

Entre las reformas relativas a las atribuciones de los consejos locales, destacan la de aprobar el tope máximo de gastos de campañas senatoriales y la de acreditar a ciudadanos y agrupaciones como observadores electorales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105.

En tanto, los topes máximos para los gastos de campaña de los candidatos a diputados de mayoría relativa, serán propuestos por las juntas distritales ejecutivas, de acuerdo con el artículo 110, y aprobados por los consejos distritales, según el artículo 116. Además, estos consejos tendrán entre sus funciones, determinar el número y la ubicación de casillas en cada distrito, insacular a los funcionarios de casilla, registrar los nombramientos de los representantes acreditados por los partidos para la jornada electoral y acreditar a ciudadanos y agrupaciones como observadores electorales.

Serán también los consejos distritales, de conformidad con el artículo 197, los que determinarán el número y la ubicación de las casillas especiales, que no podrán sumar más de cinco en cada distrito electoral.

Del Tribunal Federal Electoral

En lo que toca a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, el artículo 269 establece que su elección corresponderá a la Cámara de Diputados —o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión—, con base en una lista presentada por el Ejecutivo federal o por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda. En esa lista se deberá proponer por lo menos a dos candidatos para cada uno de los cargos de magistrados correspondientes a las salas Central y Regional del Tribunal, señalando los candidatos para cada sala.

La elección será por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. Los correspondientes suplentes para cubrir las ausencias temporales o definitivas, se elegirán a partir de una lista adicional, que también presentará el Ejecutivo.

El artículo 272 prevé la integración de una Comisión de Justicia cuando el presidente del Consejo General del IFE con el apoyo de cuando menos tres consejeros más, o del presidente del Tribunal Federal Electoral, estime, respectivamente, que hay motivo para la remoción de alguno de los consejeros ciudadanos o de algún magistrado del Tribunal.

Transitorios

El artículo quinto transitorio autoriza a la Dirección General del IFE para que adecue la documentación electoral en atención a la nueva conformación de los consejos General, locales y distritales; en tanto, el artículo sexto señala que toda alusión a los consejeros magistrados dentro del Cofipe, deberá entenderse como referida a los consejeros ciudadanos. Por último, el séptimo transitorio fija para el 30 de junio la fecha en la que será entregada en cintas magnéticas la lista nominal definitiva de electores a los partidos políticos, mientras que la lista impresa será entregada a más tardar el 21 de julio.

Del 17 de mayo al 15 de junio

De iniciativas, pensionados y consejeros ciudadanos



Denuncias, problemas ambientales y de política exterior, así como las iniciativas para inscribir en letras doradas los nombres de José María Luis Mora y Jesús Romero Flores en los muros del Palacio Legislativo, fueron algunos de los temas tratados en el segundo mes del último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. El segundo mes se caracterizó también por la presentación de diversas iniciativas partidarias, entre las que destacan las encaminadas a proteger a la población discapacitada y aquéllas que buscan elevar el monto mínimo de las pensiones para los jubilados.

Propuestas de los partidos

La difícil y precaria situación de los pensionados en México se cristalizó en la discusión y aprobación de la iniciativa del PRI mediante la que se elevan los montos de las asignaciones mínimas para jubilados y pensionados del

Instituto Mexicano del Seguro Social al 100 por ciento del salario mínimo.

Aprobada con 296 votos a favor, tres en contra y 10 abstenciones, la reforma fue considerada insuficiente por todos los grupos parlamentarios. El PPS, el PRD y el PFCRN hicieron notar que la depreciación del salario mínimo hacía insignificante el monto del aumento, lo que volvía indispensable que se buscaran mayores y más amplias medidas para elevar el nivel de vida de la población pensionada. Ya el 17 de mayo, el PFCRN había presentado una iniciativa para elevar a dos salarios mínimos el monto más bajo de las pensiones.

Si bien el PAN y el PRI coincidieron en calificar de insuficiente el aumento, llamaron la atención acerca de la imposibilidad actual de aumentar los montos de las pensiones debido a la grave crisis económica por la que atraviesa el Instituto Mexicano del Seguro Social. El PAN subrayó la necesidad de equiparar las cuotas de los trabajado-

res con las prestaciones otorgadas por el organismo. El 18 de mayo, el propio PAN presentó una propuesta para modificar la Ley del Seguro Social y explicitar el derecho de los pensionados a un mes de aguinaldo.

Un importante compromiso de la actual Legislatura fue el contraído con la población discapacitada que, según asentaron algunos diputados, representa entre el siete y el 10 por ciento del total de la población nacional. En ese tenor, las fracciones del PFCRN, el PRI y el PRD presentaron diversas propuestas para mejorar la vida de este sector, en la actualidad muy desprotegido. La creación de un Instituto en favor de personas con discapacidad, encargado de diseñar políticas para el desarrollo de esa comunidad, fue punto central de las iniciativas del PFCRN y del PRI. El Revolucionario Institucional, además, presentó propuestas de modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Fomento al Deporte, la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Aduanera, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y la Ley General de Educación, para que en el ámbito de cada una de estas normas, la población discapacitada goce de manera efectiva de igualdad de derechos y oportunidades frente al resto de la población.

El PRD, por su parte, presentó el 18 de mayo un conjunto de iniciativas en favor de los derechos de los discapacitados. La Ley General de Salud, el artículo 102 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta, fueron los ámbitos legales en los que el Partido de la

**Mesa directiva del segundo mes
del segundo periodo ordinario de
sesiones: 17 de mayo a 15
de junio de 1994**

Tercer año de ejercicio

Presidente

Luis Alberto Beauregard Rivas (PRI)

Vicepresidentes

Jesús Ramírez Guerrero (PRI)

Fernando Estrada Sámano (PAN)

Jorge Torres Castillo (PRD)

Tomás Correa Ayala (PFCRN)

Servando Hernández Camacho (PARM)

Juan Cárdenas García (PPS)

Secretarios

Victoria Reyes Reyes (PRI)

Arturo Núñez Pardo (PAN)

Juan José Bañuelos Guardado (PRI)

Salvador Juárez García (PRD)

Prosecretarios

Vitalicio Cándido Coheto

Martínez (PRI)

Demetrio Santiago Torres (PFCRN)

Alfredo Castañeda Andrade (PARM)

María Clara Mejía Guajardo (PPS)

Revolución Democrática apuntaló la protección a los discapacitados. En la misma sesión, la fracción parlamentaria del PAN propuso modificaciones a la Ley Federal de Turismo, con la misma finalidad.

Otras muchas iniciativas fueron presentadas por los partidos en este segundo mes de sesiones. Entre ellas, cabe destacar la formulada por la perredista Rosa Albina Garavito para que la Cámara de Diputados mejore su tarea de fiscalización sobre el Ejecutivo en materia de gasto público, así como la que presentara el diputado frentista Manuel Terrazas Guerrero para expropiar viviendas en mal estado y contribuir a solucionar el déficit habitacional imperante en el DF.

A su vez, el expriista Juan José Rodríguez Prats propuso una iniciativa

para abrogar la Ley Forestal y otra para reformar el artículo 27 constitucional.

De cara a la elecciones

e singular trascendencia en la cultura política mexicana, fue la elección que hicieran los diputados, el 24 de mayo, de las seis personalidades de la sociedad civil que integrarán el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para calificar las elecciones del 21 de agosto. Con base en las recientes modificaciones al Cofipe, la decisión de los diputados recayó en las personas de José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, José Woldenberg Karakowsky, Ricardo Pozas Horcasitas, Santiago Creel Miranda y Fernando Zertuche Muñoz.

También fueron electos los suplentes de los consejeros ciudadanos, que serán, respectivamente, Jaime González Graff, Rodolfo Peña Villanueva, Rafael Estrada Sámano, José Luis Soberanes Fernández, Jorge Adame Goddard y Luis Ponce de León Armenta.

El PPS, sin embargo, por conducto de Juan Campos Vega ratificó su opo-

sición a la ciudadanización de los órganos electorales.

Con el fin de que los consejeros ciudadanos puedan recibir ingresos derivados de la práctica libre de su profesión, de regalías, derechos de autor o publicaciones, se aprobaron, el 31 de mayo, reformas a los artículos 74 y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). De acuerdo con la iniciativa, presentada en forma conjunta por PRI, PAN y PRD, los consejeros podrán tener esas percepciones, siempre y cuando su actividad no afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir en el ejercicio de su función.

Además, se advierte que los consejeros no podrán desempeñar comisión o empleo alguno en los gobiernos federal, estatal o municipal, ni en partidos políticos, durante el periodo de su gestión.

El tema electoral también fue abordado en tribuna por René Bejarano Martínez, del PRD, quien denunció el 7 de junio el hallazgo de papelería electoral en botes de basura. Bejarano, dirigente perredista en el Distrito Federal, insistió en la necesidad de contar con un padrón electoral confiable para las elecciones de agosto, así como en la prioridad de que haya autoridades electorales imparciales. En respuesta, los diputados priistas Victoria Reyes Reyes y Florencio Salazar Adame argumentaron que el asunto de las boletas encontradas en botes de basura era competencia de las autoridades electorales e hicieron notar el peligro que entrañaba para la estabilidad del país la descalificación del padrón electoral.

En otras oportunidades, el perredista Jesús Martín del Campo y la dipu-

El PFCRN, el
PRI y el PRD
presentaron diversas
propuestas para mejorar
las condiciones de vida
de los discapacitados

Se eligió a las seis personalidades de la sociedad civil que integrarán el Consejo General del IFE para calificar las elecciones del 21 de agosto

tada panista María del Carmen Bolado denunciaron presuntas promociones corporativas del voto a favor del candidato priista a la Presidencia, Ernesto Zedillo.

Por su parte, el PRD hizo varias denuncias referentes a temas diversos, como casos de violación a derechos humanos en el estado de Oaxaca y la existencia de desechos tóxicos en San Luis Potosí.

Conmemoraciones

Al cumplirse un año del asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo y otras seis personas en el aeropuerto de Guadalajara, el panista José Guadalupe Tarcisio Rodríguez exigió se esclarecieran los hechos, haciendo notar que las investigaciones al respecto no ofrecían resultados satisfactorios. Apoyado en tribuna por el perredista Miguel Ángel León Corrales, el diputado panista Víctor Orduña Muñoz presentó a nombre de su fracción y de la del

PRD un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del procurador general de la República a efecto de informar sobre el estado de la averiguación acerca del caso Posadas. Más adelante, la propuesta fue respaldada por la fracción del PFCRN, si bien no prosperó la petición que formulara el panista Juan de Dios Castro Lozano para que al punto de acuerdo se le diera tratamiento de urgente y obvia resolución.

En otro orden de ideas, los diputados se refirieron en la sesión del 8 de junio al Día de la Libertad de Prensa. Oradores del PARM, el PPS, el PRD, el PAN y el PRI coincidieron en señalar la relevancia tanto de la prensa como de los demás medios informativos para estructurar una nueva cultura política en el país. Hicieron énfasis, además, en la importancia de respetar el derecho a la información. El diputado perredista Elpidio Tovar de la Cruz, ratificó la postura de su partido con respecto a la necesidad de asegurar el

acceso equitativo de los partidos a los medios masivos de información.

La necesidad de armonizar las políticas económicas con la preservación ambiental fue tema central de las intervenciones con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Los grupos parlamentarios del PRI, el PFCRN, el PPS y el PRD, manifestaron su preocupación por el grave deterioro del ecosistema a todo lo largo y ancho del planeta. En su turno, la diputada pepe- sista Gabriela Guerrero Oliveros presentó a nombre de su fracción una serie de propuestas encaminadas a mejorar la planificación en materia ambiental en territorio nacional.

El mundo

El primero de junio, los diputados aprobaron la solicitud del Ejecutivo para realizar un viaje de trabajo a Cuba y a Colombia. Todas las fracciones coincidieron en la necesidad de ampliar las relaciones económicas y diplomáticas con Latinoamérica y, de manera especial, se unieron para apoyar al pueblo cubano, tomando el acuerdo de donar un día de dieta para adquirir petróleo que sería enviado a dicha nación.

También en el ámbito internacional, el PPS se refirió en distintas ocasiones a la política exterior de Estados Unidos, a la que consideró dañina para los intereses y soberanía mexicanos. En el mismo sentido fue el pronunciamiento suscrito por todas las fracciones camarales en rechazo a las declaraciones de los legisladores estadounidenses David Bonoir y Robert Torricelli, que sugirieron una posible intervención estadounidense en asuntos electorales de México.

IV



PHOTO FOL VAL TIERRA / CHARTOSQUIRO

Luis Donaldo Colosio, diputado

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950, en Magdalena de Kino, al norte de Sonora. Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, se hizo acreedor por méritos académicos a una beca para efectuar estudios de posgrado en la especialización de desarrollo regional y economía urbana en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo la maestría; de 1975 a 1978, en la misma Universidad, se doctoró en dicha especialidad.

En 1984 casó con Diana Laura Riojas Reyes, con quien procreó dos hijos: Luis Donaldo y Mariana.

Trabajó como investigador en el Instituto Internacional de Sistemas Aplicados de Viena, Austria. Fue catedrático en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en El Colegio de México.

Entre 1985 y 1988 fue diputado federal y en 1988, senador por el estado de Sonora.

Luego de coordinar la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, del 3 de diciembre de 1988 al 13 de abril de 1992. Fue electo candidato a la Presidencia de la República por la VII Convención Nacional priista, el 8 de diciembre de 1993.

El 23 de marzo de 1994 falleció en Tijuana, Baja California, víctima de un incalificable asesinato, que todos los sectores conscientes y democráticos de la sociedad mexicana han condenado.

Reproducimos algunos de los conceptos que Luis Donaldo Colosio externó cuando se desempeñó como diputado federal por el VI distrito electoral de Sonora, durante la LIII legislatura.

No hemos vencido en su totalidad a la crisis, pero no estamos ni con mucho vencidos por la crisis. Tenemos capacidad de hacer, de crecer. Los tiempos difíciles son tiempos para decidir y para cambiar, para que en la coyuntura se den soluciones de estructura. Que lo circunstancial no nos haga perder de vista lo sustancial y permanente.

Para nosotros, los presupuestos no son simples sumas aritméticas. La frialdad de los números se supedita a los objetivos primordiales de las mayorías que el Estado mexicano está obligado a satisfacer en cumplimiento del mandato democrático. Para nosotros, detrás de cada número, detrás de cada cifra está el hombre, su familia, su bienestar.

No es con posiciones totalizadoras que vamos a vencer la crisis. Si tenemos la honesta intención de lograr en forma conjunta vencer la crisis, pasemos ya de las posturas ideológicas a planteamientos viables.

~ * ~

Ejercemos la función legislativa con compromiso, con conciencia y con responsabilidad. Busquemos ejercer nuestra función, respetuosos de los demás poderes, de la misma manera que queremos el respeto de ellos.

~ * ~

El presupuesto tiene como preocupación esencial resolver carencias, atender áreas prioritarias e impulsar áreas estratégicas para el desarrollo del país. Con él se busca ubicar a México en las dificultades de la política mundial, cumplir con nuestras responsabilidades internacionales y establecer la negociación y la búsqueda conjunta de soluciones, como mecanismos que mejor permitan preservar nuestras soberanías.



**“Ejercemos la función legislativa
con compromiso, conciencia
y responsabilidad”**

*P*ara nosotros, detrás de cada número,
detrás de cada cifra está el hombre, su familia,
su bienestar



Junto al realismo económico hay tanto realismo político como para no vulnerar nuestros valores fundamentales y movernos con habilidad negociadora y responsabilidad en un contexto externo de creciente confrontación.

la indecisión, sino por el contrario, la confianza entre nosotros mismos, que tanto necesitamos. Son momentos que exigen de la cohesión social, que demandan hacer de la identidad nacional una práctica cotidiana.

~ * ~

~ * ~

Cierto, las crisis no son las mejores épocas para confiar en el futuro, pero tampoco deben ser pretexto para sentarse y dudar de la solidez de lo que es fundamental ni tampoco tomar decisiones precipitadas que puedan atentar contra ello.

Nuestros representados esperan de nosotros un análisis más serio y responsable que enriquezca el debate político, que fortalezca nuestro pluralismo y que nos ayude a comprender mejor la realidad; la realidad en que nos movemos, la realidad que nos agobia. Por ello, (una) sesión de análisis no puede, no debe convertirse en un muro de lamentaciones, pero tampoco en una fiesta donde cada quien quiere decir lo mejor de sí mismo, destacando la envoltura y ocultando el contenido.

~ * ~

Como representantes populares, tenemos la obligación, la gran obligación diría yo, de transmitir a nuestros representados no el desaliento, la angustia o

*J*unto al realismo
económico hay tanto
realismo político como
para no vulnerar
nuestros valores
fundamentales

Para algunos, las más de las veces, el hacer uso de esta tribuna significa el anhelo, la ansiedad desesperada por desinformar, por tergiversar, por malinterpretar ante la opinión pública, hacer de la crítica como un fin en sí mismo. Nosotros aceptamos la crítica, pero la crítica que construye, la que nos permita avanzar, la que edifique y consolide lo que tenemos para mejorarnos todos, para legar un futuro mejor para nuestras familias, para nuestros hijos.



BAJO LA LUPA

la Cámara en cifras

MUJERES LEGISLADORAS

304 diputadas en las legislaturas XLII a LV

en la XLII Legislatura: 1
 en la XLIII Legislatura: 4
 en la XLIV Legislatura: 8
 en la XLV Legislatura: 9
 en la XLVI Legislatura: 13
 en la XLVII Legislatura: 12
 en la XLVIII Legislatura: 13
 en la XLIX Legislatura: 18
 en la L Legislatura: 23
 en la LI Legislatura: 36
 en la LII Legislatura: 46
 en la LIII Legislatura: 40
 en la LIV Legislatura: 43
 en la LV Legislatura: 38

247 diputadas del PRI en las legislaturas XLII a LV



57 diputadas de otros partidos en las legislaturas XLII a LV

del PPS : 8
 del PAN : 27
 del PARM : 7
 del PDM : 3
 del PST : 4
 del PRT : 2
 del PFCRN : 1
 del PRD : 5

38 senadoras en las legislaturas XLVI a LVI

en las legislaturas XLVI-XLVII: 2
 en las legislaturas XLVIII-XLIX: 2
 en las legislaturas L-LI: 3
 en las legislaturas LII-LIII: 6
 en la legislatura LIV: 6
 en las legislaturas LIV-LV: 3
 en las legislaturas LV-LVI: 2



Mujeres que han presidido la Gran Comisión de la Cámara de Diputados: 2

Mujeres que han coordinado grupos parlamentarios en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados: 2

Mujeres presidentas de comisiones al inicio de la LV Legislatura: 6

Raíces del presidencialismo

Luisa Béjar Algazi

En materia de separación de poderes, cada país tiene su propio arreglo. Es cierto que existen modelos de los que se puede echar mano para tratar de asegurar un ejercicio racional del poder público, pero la aplicación de ellos corresponde al desarrollo histórico de cada realidad nacional.

En lo que toca a México, es claro que la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo tiene sus peculiaridades. Su resultado final, sin embargo, no puede calificarse en modo alguno como un proceso fácil ni mucho menos directo. Antes de que esta expresión logre asentarse con el tiempo, será necesario dar paso a múltiples pruebas y experiencias. Aun entonces, no se habrá dicho la última palabra, puesto que un cambio en la realidad que la nutre dará lugar sin duda a nuevos ajustes y acomodos.

El orden constitucional que norma las relaciones entre gobierno y Parlamento en nuestro país muestra un recorrido no exento de incertidumbres, tanto en su punto de despegue como en los momentos que le suceden antes de lograr su cabal afianzamiento. A él se dedica esta reflexión de *Crónica Legislativa*. De antemano, los constitucionalistas sabrán disculpar cualquier omisión, toda vez que nuestro estudio quizás no se apegue demasiado al dogma de su materia.

Los inicios, en la Carta Magna

La historia moderna de nuestro Legislativo y de su vínculo con el Ejecutivo, se inicia en 1917 con el replanteamiento del orden jurídico-constitucional que da respuesta a los compromisos sociales de la Revolución. De estos acuerdos se desprende el peculiar equilibrio que habrán de mostrar los poderes de la federación como una exigencia del nuevo pacto nacional.



Desde los debates del Constituyente se observa la intención de apuntalar las facultades atribuidas a la rama ejecutiva. A ella se encarga, en nombre de la soberanía nacional, el ejercicio de funciones y derechos cedidos a los particulares durante el régimen porfirista.¹ En el caso de nuestro Congreso, la presunción de una amenaza siempre latente de su parte contra el nuevo Estado que se busca construir, sirve de base para justificar la limitación de sus prerrogativas con energía mayor que en experiencias constitucionales anteriores.²

Los episodios de luchas intestinas, gobiernos endebles o dictaduras personales en nuestra historia, atribuidos a un orden legal extremadamente favorable al cuerpo legislativo, pesan sobremanera en los juicios de los redactores de la Carta de Querétaro. Más aún, se le señala como el responsable del todavía entonces reciente golpe de Estado en contra del gobierno de Francisco I. Madero, debido al permanente antagonismo entre ambos poderes.³

¹ Se trata sobre todo de los contemplados en los artículos 27 y 123. Según Andrés Molina Enríquez, quien participó en la redacción del primero, únicamente un gobierno presidencial en toda su amplitud podría llevar a cabo las reformas previstas en estos capítulos del nuevo documento constitucional con la rapidez necesaria y al menor costo posible. Ver de ese autor, *Los grandes problemas nacionales*, México, ERA, 1983, p. 67.

² Esta opinión es compartida por connotados constitucionalistas, para quienes la Carta de 1857 y aun otros ordenamientos ligados a gobiernos centralistas, son menos parcos con el Congreso de la Unión que la Constitución de 1917. Ver, por ejemplo, *La Constitución comentada*, México, UNAM, 1985.

³ Sobre este problema, ver la obra de Josefina Mac Gregor, *La XXVI Legislatura, un episodio en la historia legislativa de México*, México, Cámara de Diputados, 1983.

Desde los debates del Constituyente se observa la intención de apuntalar las facultades atribuidas a la rama ejecutiva

En estos argumentos cimienta Venustiano Carranza su demanda de mayores facultades para el ocupante de la Presidencia de la República ante los encargados de formular las bases del nuevo orden constitucional, y en ellos se apoyan también varios miembros del Constituyente para lograr el pronunciamiento de la asamblea en favor de un gobierno fuerte.⁴

El temor a provocar un desequilibrio de signo contrario por un excesivo fortalecimiento del Ejecutivo, no desaparece durante el debate de los asistentes al recinto de Querétaro. La controversia se hace manifiesta en varias discusiones. En especial, en las que preceden la aprobación del artículo 67, relativo a la definición de la instancia facultada para convocar a sesiones extraordinarias al Congreso.⁵

Por una parte se reclama esta atribución para el Poder Ejecutivo, para lo cual se resalta la necesidad de dotarlo con atribuciones que le permitan plena libertad de acción. Por la otra, se esgrime el imperativo de no retirar esta potestad al Congreso, a fin de asegurar su vigilancia sobre las actividades gubernamentales y evitar violaciones graves a la Constitución. Al final se impone el criterio de los primeros, pero no logran un consenso pleno en la asamblea.

Para un buen número de parlamentarios no pasa desapercibido el afán con que se persigue el establecimiento de un Ejecutivo virtualmente plenipotenciario y de una legislatura en extremo débil. Esta situación se confirma al aprobarse en el artículo 65 la reducción del periodo de sesiones y al aceptarse con el artículo 66 la intervención presidencial en caso de disputa entre las cámaras por la fecha de terminación del mismo. Caso parecido se produce con el texto del artículo 68 para fijar el lugar de residencia de las cámaras del Congreso, pero también al hacer intervenir al Ejecutivo en diversas etapas del proceso legislativo.⁶

Los motivos de esa desconfianza se comprueban pronto. A una semana de haber entrado en vigor la Constitución, el titular de la administración pública obtiene facultades legislativas en el ramo de Hacienda, aun sin cumplir con las formalidades del artículo 49 constitucional. Tal delegación es aprobada por la Cámara de Diputados el primero de mayo de 1917. Empero, el Senado se niega a ratificarla en su primera fecha de presentación (3 de mayo), aunque la suscribe cinco días después, con la introducción de restricciones y la oposición de numerosos legisladores.⁷

Tentativas infructuosas

Apenas transcurridos unos meses de esta experiencia, se renuevan los intentos de varios legisladores para contener lo que se considera una desmesura. Con este fin, pues, to en marcha el primer Congreso ordinario, el pleno conoce un proyecto signado por 53 diputados para transitar hacia un régimen parlamentario, para lo que se propone la reforma de 35 artículos constitucionales.⁸

El documento resalta las previsiones para el nombramiento del Ejecutivo por un Consejo de Ministros, y la obligatoriedad de éste de pertenecer al Parlamento. Asimismo, se considera el establecimiento de la moción de censura y el derecho de interpelación de sus miembros a cualquier integrante del gabinete.⁹

No se entienden las razones por las que el Constituyente acepta la consolidación y el fortalecimiento del régimen presidencial. La inquietud es tan viva, por otra parte, que en 1918 la continua tergiversación en los recintos legislativos de las disposiciones contempladas en la Carta Magna sobre esta cuestión, da origen a la publicación de un texto sobre la organización y el funcionamiento del parlamentarismo inglés.¹⁰

⁴ A juicio de Arnaldo Córdova, para el jefe del Ejército Constitucionalista, las bondades derivadas de esta condición se imponen por sí mismas, por lo que no requieren de justificación en proyecto alguno de reformas sociales. Ver su prólogo al libro de Molina Enríquez, *op. cit.*, p. 60.

⁵ *El Congreso Constituyente, 1916-1917*, Tomo II, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, pp. 381-386 y 389.

⁶ Ver comentario del Constituyente en *ibid.*, p. 312. Jorge Carpizo destaca los actos en los que el Ejecutivo puede intervenir en la formación de las leyes: el derecho de iniciativa (artículo 71), el derecho de veto (artículo 72 inciso c) y la promulgación final de la misma (artículo 72 inciso a). De igual manera, señala los casos en que este Poder tiene facultades legislativas del Constituyente; a saber: en situaciones de emergencia (artículo 29), para dictar medidas de salubridad (artículo 73, fracción X) y en ejercicio de su potestad reglamentaria (artículo 89, fracción I). Ver *El presidencialismo mexicano*, México, S. XXI, 1979, pp. 82-108.

⁷ Tena Ramírez, F. *Derecho constitucional mexicano*, México, Porrúa, 1985, p. 241. Con este acto, señala el autor, se sienta el grave precedente utilizado por todos los Ejecutivos hasta 1938 de legislar en tiempos de paz y en cualquier materia.

*No se
entienden las
razones por
las que el
Constituyente
acepta la
consolidación
y el
fortalecimiento
del poder
presidencial*



ARCHIVO CASABOLA

El tema reaparece a la menor oportunidad. Así, Alvaro Obregón cita en 1921 a periodo extraordinario del Congreso precisamente para devolver a la Comisión Permanente la facultad de convocatoria para este acto. Su iniciativa se fundamenta en el propósito de corregir "el absolutismo mal disfrazado de la Constitución de 1917", al otorgar esta prerrogativa al Ejecutivo, razón por la que es necesaria su restitución al cuerpo legislativo, de acuerdo con la tendencia seguida por la mayor parte de las constituciones modernas, para evitar así su subordinación a la voluntad o a "los caprichos presidenciales".¹¹

Con este antecedente como telón de fondo, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a la sazón mayoritario en el Congreso, presenta un proyecto de reforma constitucional para promover una vez más la mudanza de nuestro régimen de gobierno hacia un formato parlamentario. Entre otras medidas, se incluye el traslado del control presupuestario de varios departamentos y secretarías de Estado a las cámaras del Congreso, a las que también se les encarga seleccionar

a los miembros del gabinete mediante la presentación al Ejecutivo de una lista de tres nombres. Puesto su titular en dificultades ante la amenaza de estas restricciones, el asunto es finalmente solucionado a su favor, al no encontrarse en la legislatura suficiente apoyo para el proyecto.¹²

Por último, la insistencia en implantar un régimen parlamentario será enarbolada una vez más por otro de los grupos que se disputan las riendas del gobierno con la idea de corregir su curso. En efecto, el Partido Nacional Antirreeleccionista incorpora en su plataforma electoral de 1929, como parte de la campaña presidencial de José Vasconcelos, la propuesta de sujetar al Ejecutivo a un control de este tipo. Con la derrota de este movimiento, el asunto vuelve a ser archivado.¹³

Después de este momento, sin embargo, todo intento en el mismo sentido queda cancelado. Esta evidencia, podría decirse, confirma el asentamiento de las disposiciones constitucionales que hasta ahora han normado el carácter del vínculo establecido en México entre la legislatura y el gobierno. **IV**

⁸ Ruiz Massieu, F. "Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión", en *Política y proceso legislativo*, México, Miguel Ángel Porrúa, 1985, p. 77.

⁹ "Iniciativa para implantar un sistema parlamentario en México", en *Estudios Parlamentarios* 2, México, Centro de Estudios Parlamentarios, Cambio XXI Fundación Mexicana, A.C., agosto-noviembre de 1992, pp. 141-185.

¹⁰ Cruz, M. *La evolución del parlamentarismo en Inglaterra*, México, Imprenta Franco-Mexicana, 1918.

¹¹ Martínez Báez, A. "La dinámica legislativa", en *Política y procesos legislativos*, op. cit., pp. 128-133.

¹² Ver Dulles, J. F. *Ayer en México*, FCE, 1977, p. 124, y Garrido, J. L. *El partido de la revolución institucionalizada*, México, S. XXI, 1982, p. 47.

¹³ Lajoux, A. *Los orígenes del partido único*, México, UNAM, 1981, p. 77.

EL ORDEN DE LOS DÍAS

Zuehaceres de las comisiones



TOMÁS MARTÍNEZ / CUARTOGRUPO

Información, Gestoría y Quejas

Demandas ciudadanas

Desde el inicio de sus labores, la LV Legislatura ha resuelto el 80 por ciento de las mil 958 peticiones recibidas hasta principios de año. La presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, María Esther Scherman Leaño, informó que los rubros en los que se insertan la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos son: servicios y asuntos jurídicos, administrativos, laborales y agrarios. A diario, dijo la diputada jalisciense, se reciben entre cinco y 10 peticiones, mismas que son canalizadas a las dependencias correspondientes para su atención. Las demandas, que son presentadas por ciudadanos, partidos políticos y diversas organizaciones, se incrementan en los meses de junio y julio y disminuyen en diciembre y enero, según las estadísticas de esta Comisión.

Instituto de Investigaciones Legislativas

América del Norte

A lo largo de cinco meses se desarrolló el diplomado de Estudios México, Estados Unidos y Canadá, que organizaron de manera conjunta el Instituto de Investigaciones Legislativas de la LV Legislatura y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Centro de Investigaciones sobre América del Norte.

El propósito del diplomado fue promover una visión más clara de la realidad económica, política y social en la que se ubica México luego de la firma del TLC, gracias a la cual ha pasado a formar parte del bloque económico que cuenta con el mercado más grande del mundo: 360 millones de consumidores.

La clausura de este ciclo académico se efectuó el 23 de marzo, con la presencia del entonces presidente

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rodolfo Becerril Traffon. Antes de hacer entrega de los diplomas a los egresados, el diputado morelense, que también fungía como secretario de la Gran Comisión, señaló que "muy a pesar de la compenetración económica y eventualmente política que se vaya dando en estos años con Estados Unidos y Canadá, habrá que hacer una gran hazaña para que, frente a la homogeneización económica, no se trastoquen los elementos sustanciales de nuestra cultura". Participaron también en la ceremonia, la maestra Mónica Vereá Campos, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, y el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Abraham Talavera.

Gran Comisión

Temas de hoy

Asuntos de indudable actualidad y que requieren urgente atención, son tratados en un folleto editado por la Gran Comisión, que reúne sendas intervenciones en tribuna de los legisladores Juan José Rodríguez Prats, Laura Alicia Garza Galindo y Layda Sansores San Román. El daño ecológico producido por la contaminación de petróleo en Tabasco, los acontecimientos recientes en Chiapas y la situación de los discapacitados en nuestro país, son los temas que se abordan en este fascículo de 32 páginas.

Hacia una nueva legislación

Más de tres décadas de antigüedad, hacen que la Ley de Radio y Televisión, promulgada en 1960, se haya vuelto obsoleta en varios de sus artículos, señaló la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Silvia Pinal. Es el caso, dijo, de la regulación de concesiones a la iniciativa privada para el servicio de televisión por cable o mediante antenas parabólicas.

Con el fin de organizar los trabajos internos de la Comisión que permitan elaborar y promover reformas a dicha ley, se creó un subcomité encargado de reunir información sobre las normas y estatutos que rigen actividades similares en Estados Unidos y Canadá. Al frente de este subcomité jurídico, que estará integrado por especialistas en derecho, estará el diputado panista Miguel Enciso Clark.



ANDRÉS GARAY



ANDRÉS GARAY

Recursos Hidráulicos

Foro regional

Hasta la fecha, el sector privado ha intervenido en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, con un costo superior a los 300 millones de dólares, se informó durante el foro regional "La nueva legislación en el tratamiento de aguas residuales", organizado por la Comisión de Asuntos Hidráulicos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

La reunión, efectuada en Monterrey, Nuevo León, a fines de abril, fue la primera de cinco que se realizarían con el fin de recoger opiniones y propuestas para la preservación de este recurso natural y a la vez hacer una amplia difusión de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Durante el foro, al que asistieron representantes de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Manuel Muñoz Rocha, demandó de la sociedad mexicana y las instituciones gubernamentales una corresponsabilidad en el uso y la preservación de los recursos hidráulicos, y afirmó que el aprovechamiento del líquido en el país debe realizarse con criterios, normas y prácticas que permitan un desarrollo sustentable, sin riesgos económicos ni sociales para la nación o que pongan en peligro el patrimonio ambiental de los mexicanos.

Difundir en toda su amplitud el trabajo legislativo



CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados es la caja de resonancia de lo que ocurre en todo el país. Por eso, los cerca de 125 reporteros de la fuente legislativa deben de tener una gran sensibilidad política, afirma Ramón García González, coordinador general de Comunicación Social de la Cámara.

“Aquí es el único lugar donde representantes de todo el país, pertenecientes a diferentes partidos, confrontan a diario sus ideas y las debaten en torno a proyectos específicos de ley; en consecuencia, los informadores deben conocer muy bien el sistema político y las diversas plataformas de los partidos para dar cuenta cabal de todo lo que aquí sucede”.

Por fortuna —continúa el coordinador de Comunicación Social, que ejerce esa responsabilidad desde octubre de 1993—, el grupo de reporteros que trabaja cotidianamente en la Cámara es muy profesional, conoce a fondo el trabajo legislativo, sabe cómo laboran

los diputados y está muy atento a las reacciones de los partidos.

“Aquí mandan a los reporteros foguados, ya muy hechos; los que han acreditado que tienen sensibilidad y profesionalismo”. Esto se refleja en que varios de ellos llevan aquí muchos años y se han convertido en algunos de los principales reporteros políticos de sus medios. Inclusive, acota, “tenemos acreditados a premios nacionales de periodismo, como Lourdes Galaz y el decano de la fuente, don Federico Barrera”.

Descentralizar la información legislativa

En la tarea de difundir la información que se genera en la Cámara, la Coordinación de Comunicación Social tiene un papel de apoyo y estímulo.

“Una de las principales labores a las que nos hemos abocado dentro del programa de comunicación social

para este año, es hacer ver a la gente la importancia de la función de un diputado federal”, indica quien fuera director de la empresa estatal Películas Mexicanas. Por desgracia, añade, el único trabajo que se ve hacia afuera es el que se realiza en el pleno. “Pero detrás de un debate en el pleno hay un trabajo de comisiones larguísimo, que muchas veces dura años. Eso, la gente no lo ve. A nosotros nos preocupa mucho, y nuestro empeño es que la gente se entere de lo que está pasando en la Cámara, en los trabajos en comisiones, en las actividades en los distritos. La labor del diputado es muy amplia y sin embargo no es conocida”.

Comenta que esta difusión del trabajo legislativo se hará a través de un programa de comunicación que contempla publicaciones, programas específicos de radio, información a los estados.

“Queremos descentralizar la información, que básicamente se ha concentrado en el Distrito Federal, pese a que aquí hay representantes de todos los estados de la federación. Para eso vamos a convertirnos en una especie de agencia de noticias, vamos a utilizar a las agencias de noticias y además vamos a distribuir y mandar voz e imagen de lo que sucede aquí para que las radiodifusoras y las televisoras lo reproduzcan en las capitales de los estados”.

Una labor sui géneris

García González, quien se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Contraloría General de la Federación, define los matices entre una oficina de prensa del Ejecu-

Nuestro empeño es que la gente se entere de lo que está pasando en la Cámara

tivo y ésta, la Coordinación de Comunicación Social de una de las cámaras del Congreso. "Definitivamente hay una gran diferencia. Cuando tú manejas la prensa de una dependencia del Ejecutivo, de una secretaría de Estado, tu ámbito de acción es muy limitado y se constriñe de manera específica al área de competencia de esa entidad. Aquí es muy amplio, en virtud de que en la Cámara de Diputados las tareas son muy plurales, el debate es muy extenso, y eso hace el trabajo totalmente diferente. Allá, como parte de un gobierno en el poder, tienes la obligación de dar cuenta de lo que esa entidad está realizando. Acá, como parte de la Cámara, tienes que dar cuenta de lo que todos los partidos y toda la Cámara en su conjunto llevan a cabo".

Nueva estructura

En días de sesiones, la actividad de la Coordinación de Comunicación Social es incesante. Los cerca de 90 trabajadores que la conforman apenas se dan abasto para cumplir con las diversas tareas de que se encarga esta área. Seis reporteros y cuatro fotógrafos cubren los debates de las sesiones, las declaraciones de los diputados, los trabajos de comisiones. Hay un equipo de camarógrafos que se ocupa del monitoreo por televisión en circuito cerrado, para servicio de la propia Cámara. Y está también el grupo que elabora la síntesis de prensa. El resto del personal son motociclistas para el reparto, secretarías y personal administrativo en general.

La Coordinación consta de dos direcciones generales: una de publicaciones y talleres gráficos, y otra de información. Esta estructura, a través de la

cual, además de las tareas informativas se ocupa de las publicaciones, es reciente; se estableció luego de que la diputada María de los Ángeles Moreno se hizo cargo de la Gran Comisión.

"Estamos estableciendo una normatividad y una política editorial adecuada a las necesidades de la Cámara", explica Ramón García, quien apunta las razones de que se busque coordinar las publicaciones de los diputados: "lo que pasa es que no había un control y entonces un mismo tipo de publicación de la Cámara se editaba en cinco o seis diferentes formas de acuerdo con cada presidente de comisión. Lo que queremos es que sean colecciones específicas para que las bibliotecas y los mismos diputados las vayan coleccionando".

Síntesis y ahorros

Al ritmo que marca la intensidad del trabajo legislativo, se generan los boletines de prensa en la Dirección de Información. Mientras en épocas de receso se produce un par de boletines al día, en tiempos de sesiones se llegan a emitir entre ocho y 10 boletines diarios.

"Esa, la intensidad de trabajo, es otra gran diferencia con oficinas de prensa de secretarías de Estado", dice el funcionario de 46 años, licenciado en ciencia política y administración pública. Añade: "en aquellas hacen dos o tres boletines a la semana, en tanto que aquí el trabajo es mucho más intenso, incluso en tiempo de receso, cuando las fuentes de información son los trabajos de la Comisión Permanente y las actividades de las comisiones legislativas, además de las giras al exterior".

Y ni hablar de épocas de mayor efervescencia política, cuando los diputados y las fracciones parlamentarias definen sus posiciones con respecto a los asuntos críticos para el país. "Los diputados son gente de gran peso en sus regiones y muchos de ellos a nivel nacional. Entonces, lo que ellos digan es importante y hay que recogerlo y eso mismo nos da otra fuente de información que tenemos que atender y cuidar".

Sobre la síntesis de prensa, que también se modificó con la nueva estructura de trabajo, se han presentado inconformidades de algunos legisladores. Preferían la síntesis anterior, que iba acompañada de una carpeta de recortes con las principales notas y las columnas políticas de los diarios. Ahora se les entrega sólo un resumen de noticias, con menos páginas que el anterior.

Las razones del cambio fueron esencialmente económicas, explica Ramón García:

"Se tenían que hacer tantos juegos de esa carpeta de recortes, que su costo sumaba cada año alrededor de tres mil 500 millones de pesos. En virtud del altísimo costo que esto significaba, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política decidió eliminar la carpeta de recortes. De manera alternativa, se ofreció a los diputados que escogieran dos periódicos para enviárselos a ellos en lo particular, independientemente de que cada fracción parlamentaria recibe un juego completo de todos los periódicos y revistas".

Del resumen diario de noticias se producen 600 juegos en tiempo de sesiones; durante los recesos, la cantidad se reduce a 200 o 250 ejemplares al día. Este material se proporciona



también a los funcionarios de la Cámara, “para que estén enterados de lo que pasa”.

Con respecto a los boletines, se elaboran unas 100 copias, que se distribuyen entre los reporteros acreditados y se envían a través de fax a las agencias de noticias y a los periódicos que no tienen reporteros cubriendo la Cámara.

Apoyo permanente

Los boletines diarios conforman sólo uno de los servicios que otorga la Coordinación a los reporteros de la fuente.

“Hay que apoyarlos de manera permanente. La responsabilidad de nosotros con ellos es que el lugar de trabajo sea cómodo, que tengan la información, documentos de apoyo que necesiten para hacer sus notas y puedan informar a la opinión pública del país sobre lo que aquí está sucediendo”.

Para ello, se les otorga “un espacio para trabajar, el uso de fax y teléfonos, la atención de café, refrescos, etcétera, y todo el apoyo que ellos pidan”.

De hecho, la llegada a la Cámara del equipo encabezado por Ramón García se tradujo, como primera acción, en la remodelación y ampliación de la sala de prensa, que ahora es más funcional y cuenta con espacios asignados a cada medio.

Enseguida, se creó un área específica para conferencias de prensa, que pese a resultar indispensable, no existía. “Nos dimos cuenta de que si uno de los diputados estaba en el pleno y quería dar una conferencia de prensa, tenía que venir a la sala de prensa al

tiempo que algunos reporteros estaban trabajando. Llegaba el diputado y se armaba una bola y a veces hasta en los escritorios en los que estaban trabajando los compañeros, se subían reporteros y fotógrafos. Esto me parecía muy inapropiado. Un Congreso de la importancia de éste, requería una sala de conferencias”.

Ahora la hay, con capacidad para 75 personas, que ofrece además la opción de realizar reuniones menos numerosas, pues cuenta con una mesa para 12 personas e incluso con una pequeña sala para que uno o dos reporteros conversen con un solo diputado. “Esta sala la pueden usar los grupos parlamentarios cuando lo soliciten. Nosotros les damos todo el apoyo: micrófonos, grabación, etcétera”.

En fecha próxima habrá una innovación más en cuanto a servicios de apoyo a los informadores: se va a reinstalar el club de periodistas, en el tercer piso del edificio que alberga al recinto parlamentario. “Un lugar donde los compañeros, cuando terminen de hacer sus notas, se puedan ir a leer el periódico, a descansar, a tomar un café con tranquilidad, con monitores para estar siguiendo lo que pasa en el pleno. Es algo que existe en la mayor parte de los parlamentos del mundo y que aquí había antes del incendio”. Con la remodelación del Palacio Legislativo, la sala de prensa se cambió al lado opuesto del que estaba y no quedó espacio para hacer el club de periodistas, “que funcionaba muy bien”, dice el Coordinador de Comunicación Social.

Sin distinciones

Si bien es la presidencia de la Gran Comisión quien designa a los funcio-

*La Coordinación
consta de dos
direcciones generales:
una de publicaciones
y talleres gráficos, y
otra de información*

Federico Barrera Fuentes,
decano de los cronistas parlamentarios

Los debates de ayer y de hoy

narios de esta área, asegura Ramón García que la oficina que dirige es vocero de todos los grupos parlamentarios. "Aquí tú tienes que atender a toda la Cámara, a todos los diputados. Tienes que dar un manejo que trate de ser lo más objetivo, lo más imparcial, sin que haya distinguos para tal o cual partido".

Para un mejor desempeño de su cometido, se mantiene en contacto con los coordinadores de los grupos parlamentarios y con sus encargados de prensa, "a fin de ir afinando las cosas, ir cuidando que los boletines sean muy objetivos, que la síntesis y los resúmenes de noticias reflejen bien lo que está presentando la prensa, que no haya una tendencia hacia tal o cual partido".

—¿No se inclina la balanza hacia el partido mayoritario?

—Lo que pasa es que el partido mayoritario tiene más presencia en la prensa y por ello sale más en el resumen de noticias.

Agrega que la presidencia de la Gran Comisión le otorga especial importancia a la prensa. "La diputada María de los Ángeles Moreno ha dicho que la prensa es la mejor medicina para la soberbia. Ella está muy atenta a lo que dice la prensa, diariamente, lo que se difunde por radio y televisión. Y como ella, muchos otros diputados".

Habla de su satisfacción personal en este cargo: "Para mí es un privilegio poder servir en la Cámara; para quien le interesa la política, servir a los diputados es un honor. Se aprende muchísimo de ellos, tanto los del PRI como los de partidos de oposición; el amor a la patria se da por hecho, todos lo tienen; lo que se está planteando aquí son diferentes enfoques, los caminos de por donde se debe transitar".

Y resume lo que considera, ahora, su reto principal: "Por eso yo siento que es mi obligación hacer ver a la gente esto que tenemos aquí. Que la gente se entere que esta es una de las grandes instituciones del sistema político mexicano y que está destinada a ser cada vez más sólida, más fuerte, y jugar un papel cada vez más preponderante en la definición de las políticas nacionales".

LV

Desde los históricos debates del Parlamento posrevolucionario hasta los actuales tiempos de pluralismo legislativo, don Federico Barrera Fuentes, agudo y memorioso, ha sido testigo de la evolución en el desempeño de la Cámara de Diputados.

Cincuenta y cinco años ha de que se inició como cronista parlamentario, "en la época en que los diputados entraban armados a las sesiones", larga experiencia que lo erige en un compendio de anécdotas, juicios y remembranzas.

Al comparar a los diputados de antes con los de ahora, opina que "el material humano ha mejorado mucho en las cámaras"; sobre todo, dice, "hay respeto a las ideas. Usted puede subir a la tribuna a decir lo que le dé la gana".

"Antes —añade— estaba muy cerrada la libertad para los diputados. No los dejaban hablar en la tribuna". Mas esto no limitaba el trabajo del cronista; por el contrario, los legisladores censurados "iban con los periodistas a contarnos sus quejas y nosotros las publicábamos". Ejemplifica: "una vez, al general Marciano González, que era candidato a senador por Nuevo León, no lo dejaron entrar al Colegio Electoral. Y me agarró en las puertas del Senado, me recargó contra un pilar y allí me contó todo lo que pensaba decir en la tribuna. Se fue y yo me puse a escribir mi nota; sabía que no lo iban a dejar hablar. Pero al otro día se supo por la prensa todo lo que no dijo Marciano González en la tribuna".

Maestros de lujo

Federico Barrera Fuentes empezó a frecuentar la Cámara en 1929, cuando



era estudiante de la Escuela de Derecho. "Llegué aquí, como cualquier gente, a oír. Me tocó presenciar las intervenciones de Aurelio Manrique y de Antonio Díaz Soto y Gama, que fueron realmente las figuras más destacadas del parlamentarismo en la etapa más álgida de la Revolución, cuando se estaban haciendo las leyes".

Fue entonces cuando entró en contacto con quienes califica como "los dos mejores cronistas parlamentarios que ha tenido México": Carlos Quiroz, de *El Universal* y Gustavo Castañares, de *Excélsior*.

"Yo no estaba en ningún periódico —rememora— pero los dos maestros me mandaban a buscarles datos, informaciones, y al día siguiente yo leía con verdadera avidez las crónicas que ellos hacían. Así es como fui aprendiendo".

Quien ha sido nombrado decano de los cronistas parlamentarios, en el ofi-

Un ingrediente de las polémicas de antaño era el ingenio; hoy el lenguaje en la tribuna es más seco, más pragmático

cio periodístico ha cubierto todas la fuentes, “menos la de sociales”.

En la de policía se ocupó del caso Trotsky, siendo reportero de *La Prensa*. Como enviado especial de *El Nacional*, acompañó al general Lázaro Cárdenas en sus frecuentes giras presidenciales, durante “la etapa de más conmoción económica y social que ha tenido México en tiempos de paz”.

En los años cuarenta, fue testigo del rompimiento de relaciones entre México y Japón, durante la segunda Guerra Mundial. “Fue el ministro Ezequiel Padilla —relata— quien le notificó al embajador de Japón que quedaban rotas las relaciones. Yo ahí estuve, me les metí y no se dieron cuenta”.

Actualmente colaborador del semanario *Siempre!*, Federico Barrera inició su carrera periodística en un periódico arzobispal, para después pasar a *El Día*, que entonces era dirigido por Félix Fulgencio Palavicini, “otro de los grandes periodistas de México”, quien había sido destacado miembro de la XXVI Legislatura.

El material
humano ha mejorado
mucho en las cámaras,
pero sobre todo hay
respeto a las ideas

Ya había sido director de su propio periódico, el *ABC* —que se publicó de 1953 a 1965— y después de la revista *Hoy*, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo invitó en abril de 1968 a integrarse al cuerpo diplomático.

Recuerda don Federico:

“Me dijo Díaz Ordaz: oiga, don Federico, usted ya se ha jodido mucho en el periodismo. Le voy a hacer una invitación para que se haga diplomático.

“Señor Presidente, le respondí, me extraña que me invite usted a una misión como embajador, que es esencialmente discreta, cuando la de un periodista es la indiscreción.

“Entonces Díaz Ordaz replicó: mire, en la vida no se puede llegar a ser discreto si antes no se ha sabido ser muy chismoso.

“Y me fui a las Filipinas”.

Once años perteneció al servicio exterior, como representante de México en el país asiático y después en Guatemala, Colombia y —como embajador concurrente— en las islas Barbados.

Once años de diplomacia, que fueron alimento para su vocación primordial: la de periodista.

“Para un periodista ya fogueado, la diplomacia es una oportunidad muy buena, porque el mejor reportero del mundo nunca llega al secreto de Estado, y el embajador más tonto del mundo llega al secreto de Estado con toda facilidad. Por desgracia, no todas las noticias que se ven ahí se pueden publicar.”

Un compendio ambulante

Entre sus décadas de experiencia como cronista y sus incesantes investigaciones históricas, don Federico Barrera

compendia la vida de la crónica parlamentaria de este siglo. Considera que la mejor época de este género fue la correspondiente a la XXVI Legislatura y después la realizada de la XXVII a la XXIX legislaturas.

Resume:

“La primera legislatura revolucionaria, fue la histórica XXVI Legislatura, forjada como ahora por todos los partidos. Es en esa época cuando surge el llamado *cuadrilátero*, que forman Francisco L. de Olaguibel, Querido Moheno, Nemesio García Naranjo y José María Lozano. Esos eran, digamos, voceros del sector reaccionario. Del sector revolucionario estaban Luis Cabrera, Palavicini, Jesús Urueta y otros diputados muy distinguidos y muy jóvenes. Fueron grandes sus discusiones. El cuadrilátero tenía un pensamiento más avanzado que el de los revolucionarios de hoy. Ellos plantearon el problema del riego, el problema del reparto de la tierra, el problema educativo. Olaguibel era el pensador, el serio. Moheno era el agresor, el demoledor. Nemesio García Naranjo, el florilegio, daba elegancia a la discusión. Y luego José María Lozano presentaba las grandes soluciones. Ellos se complementaban muy bien”.

En las siguientes legislaturas posrevolucionarias hubo, dice, grandes discusiones, grandes crónicas parlamentarias. Sin embargo, más adelante, con la formación del partido oficial y como producto de la crisis profunda provocada por la muerte de Obregón, Manrique y Soto y Gama fueron desafiados. “Ahí es donde entra el silencio. Y después vino el golpe militar del 29”.

“Entonces se vinieron las grandes aplanadoras, las que se prolongaron hasta el periodo del general Cárdenas.

Nada de que con Cárdenas hubo grandes discusiones en la Cámara: no. Todavía las cámaras del obregonismo crearon lo que se llamó el bloque revolucionario de la Cámara de Diputados. Los asuntos más gordos se discutían en bloque y luego pasaban a la Cámara y aquí no se discutían, nada más se aprobaban. Era una cámara incondicional.

—¿Y cómo hacía su crónica en ese tiempo?

—Pues la hacía bordando sobre posibilidades, trabajando a fondo las cosas, porque había diputados que no tenían valor para subir a la tribuna a debatir las cosas, pero por debajo del agua sí las soltaban.

Ya en las elecciones de 1946 entra la oposición a la Cámara, con cuatro diputados de Acción Nacional. “Y esa polaridad ha dado lugar a que haya más crónica. Que no la quieran hacer los periodistas es otra cosa”.

La LV Legislatura

Un ingrediente que añora don Federico de las polémicas de antaño, es el ingenio de los debatientes, que abundaba en las discusiones de Soto y Gama y Manrique.

—¿Ya no hay ese ingenio para debatir?

—No, ya no hay. Hoy es un lenguaje más seco, más pragmático.

Apunta que, como cronista, lo que aprecia en un buen parlamentario es “su dialéctica, ver qué recursos tiene”.

—¿Quiénes recuerda como tribunos destacados?

—Un tribuno muy poderoso en la época del callismo, fue don José Aguilar y Maya. Un parlamentario muy bueno de las últimas épocas, sin duda,



fue Enrique Ramírez y Ramírez; muy poderoso en la tribuna.

—Los grandes parlamentarios de la XLVI Legislatura, como Christlieb, como Lombardo...

—Ah, no. Lombardo tenía una capacidad teórica única. Era muy pesado...poseía una dialéctica arrolladora. Eran cosa aparte. Christlieb era un gran negociador político. Esa era su habilidad.

—¿Quién ha dado mejores tribunos, la derecha o la izquierda?

—Pues ahí se van. Por ejemplo, en la izquierda está ahora ese economista Jorge Calderón. Ese es un señor que sabe lo que está diciendo. Nomás que claro, está en la de perder. Un señor orador, jamás le oye usted una destemplanza. Como fierros caen las palabras de Calderón. En el PPS, Martín Tavira, por ejemplo, original, muy respetable, que no pierde sus dos orígenes: maestro de escuela e historiador.

—¿Qué otros diputados de la actual Legislatura le han parecido buenos tribunos?

—Bueno, mire usted, un tribuno muy bueno es Fernando Ortiz Arana. Buen político, con sentido político por la habilidad con que acomete los problemas. En primer lugar, siempre da la sensación de que obra en función de su partido. Y en el PAN, indudablemente Juan de Dios Castro. Es un polemista formidable.

Oficio vital

Don Federico, conocido por todos los reporteros de la fuente, no se pierde ni una sesión de la Cámara. Desde el área destinada a los periodistas o a través de los televisores en la sala de prensa, atiende las intervenciones en tribuna, sin que se le escapen las reacciones del pleno, ni lo que se comenta en los corrillos de pasillo. En 1993 recibió el Premio Nacional de Periodismo y este año presidió el jurado para otorgar los premios correspondientes a 1994.

—¿Qué es el periodismo para usted?

—La razón de mi vida.

—¿Alguna vez tuvo problemas por lo que decía en sus crónicas?

—No, han sido mínimos. Lo que yo he procurado y creo que es lo que debe procurar cualquier cronista parlamentario, es en primer lugar no meterme en la vida privada de la gente —eso como norma general en el periodismo—, y en segunda, no explotar los defectos físicos. Eso es lo que hiere a la gente.

—¿Qué le diría a un periodista que quiere hacer crónica parlamentaria?

—No hay mucho que decir. Simplemente, que la crónica tiene que ser la verdad. La pura crónica en sí encierra todo. Y siempre referirse al ambiente que la rodea, darle vida. Porque poner nadamás “el señor dijo”, dos puntos y comillas...no, eso no.

Novedades en derecho penal

Alejandro Díaz de León Carrasco*

(segunda parte)

Continuamos con la reseña de las principales innovaciones que se introdujeron a la legislación penal el 10 de enero de 1994 y que implican cambios a 12 ordenamientos legales, en la que se ha considerado la reforma penal más importante del siglo, destinada al logro de una moderna procuración de la justicia.

En la edición anterior de *Crónica Legislativa* nos ocupamos de los cambios al Código Penal. Ahora damos un repaso a las principales modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales.

Subordinación de la policía judicial al Ministerio Público

El artículo 2 se reforma para devolverle al Ministerio Público el lugar que le corresponde de acuerdo con la Constitución General de la República en sus artículos 21 y 102, y como responsable total e insustituible en el manejo y conducción de la averiguación previa.

Se corrige así en forma contundente la práctica de que la policía judicial recibía denuncias, tomaba declaraciones, recababa pruebas y al final informaba al Ministerio Público para que éste convalidara jurídicamente lo actuado y ejercitara, en su caso, la acción penal.

El sistema anterior tenía muchos inconvenientes y se prestaba a abusos de autoridad, ya que los involucrados no podían ejercer las garantías previstas en el artículo 20 constitucional hasta que eran turnados al Ministerio

Público. Lo que sucedía estaba fuera de todo procedimiento legal y éste en realidad empezaba cuando el Ministerio Público tomaba cartas en el asunto.

La fuerte corriente humanizadora del derecho penal mexicano se ha impuesto, plasmando en la ley los cambios que resultaban indispensables para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos, en un campo propicio a la corrupción y propicio a la impunidad de funcionarios policiales sin escrúpulos, inclinación que ahora, ante la acción vigilante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una nueva regulación jurídica de los procedimientos penales, tiende a disminuir.

Consideramos que la nueva redacción del artículo 2 que comentamos, viene, como se dice en forma colo-

quial, a poner los puntos sobre las íes y termina con graves vicios que a lo largo de los años habían desvirtuado los principios rectores de una sana procuración de justicia.

Este artículo 2 es prácticamente un manual de funciones para el Ministerio Público y de procedimientos para la realización de la averiguación previa a su cargo. Contiene las atribuciones y responsabilidades del Ministerio Público Federal, lo que le da a su actuación una dimensión más amplia e integral.

Se llevan a la ley los principios doctrinales más relevantes para estructurar un procedimiento penal de elevada calidad técnica procesal.

El artículo 3 se refiere a la participación de la policía judicial "bajo la autoridad y el mando inmediato del



*Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con posgrados en criminología y derecho penal internacional. Ha ocupado, entre otros cargos, los de secretario particular del procurador general de Justicia del DF, y agente del Ministerio Público Federal con carácter de agregado regional de la Procuraduría General de la República en San Antonio, Texas, Estados Unidos. En la actualidad es director de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Ministerio Público”, utilizando la misma expresión del artículo 21 de la Constitución. Para que no exista duda y para enfatizar dicho carácter, el legislador señala que “dentro del periodo de averiguación previa, la policía judicial federal está obligada a...”, con lo que se hace notar que la policía no actúa por ejercicio de un derecho sino por el cumplimiento de obligaciones perfectamente especificadas en la ley, subordinando toda su actuación a instrucciones expresas del Ministerio Público y siempre como un auxiliar de éste.

De igual forma, se ajustan a estos principios otros artículos del Código, sustituyendo las expresiones “diligencias de policía judicial” por “diligencias de averiguación previa”.

Cambios de jurisdicción por razones de seguridad

Los artículos 6 y 10 se reforman para dar competencia a jueces diferentes a los del lugar donde se cometió el delito, cuando por razones de seguridad en las prisiones y para los fines del proceso, se faculta al Ministerio Público a ejercitar la acción penal frente a otro juez.

Además, los jueces quedan facultados de oficio o a petición de parte, para trasladar a un procesado a otro centro de internamiento de mayor seguridad, en cuyo caso es competente el tribunal de la ubicación del centro de reclusión.

Concurso de delitos

Asimismo, se establece que habiendo concurso de delitos, el Ministerio Público Federal y los jueces federales serán competentes para conocer de los



ERNESTO MORENO / CUARTOSURTO

***L**a policía no actúa por ejercicio de un derecho sino por el cumplimiento de obligaciones especificadas en la ley*

delitos del fuero común que concurren con delitos federales.

Derechos de la víctima u ofendido

Para dar cumplimiento a las garantías de defensa penal incorporadas en las recientes reformas al artículo 20 constitucional, se establece en el artículo 16 reformado, que a la averiguación previa tendrán acceso además del inculpado y su defensor, la víctima u ofendido y/o su representante legal.

Con esta nueva disposición, se hace realidad un imperativo constitucional muy importante que antes no existía: permitir a una persona defenderse desde que es sujeta a investigación y demostrar, en su caso, que es ajeno a los hechos que se investigan, ahorrándose para el particular molestias innecesarias y evitándose que el Estado tenga

los gastos inútiles que se generaban al iniciar un procedimiento judicial injustificado, que en un momento procesal posterior quedaría irremediablemente concluido.

Recordemos que antes de estas reformas la etapa de la averiguación previa era de tipo inquisitorial, secreta; no había propiamente partes en un sentido procesal. Las personas eran citadas a declarar y no sabían qué hechos se investigaban ni el nombre del denunciante, porque no tenían acceso a los expedientes y mucho menos podían estar acompañados de un abogado que los representara en su carácter de “sospechosos”.

Con estas reformas, el procedimiento ante el Ministerio Público se democratiza y transparenta. Este es un gran avance que pone a nuestro país a la vanguardia en cuanto a sistemas penales del mundo contemporáneo.

Casos de detención por el Ministerio Público

Los artículos 123, 193 y 194 reformados, tratan un tema de la mayor trascendencia: en qué casos se exceptúa el principio general de que sólo con orden judicial puede ser detenida una persona, dándose al Ministerio Público la delicada atribución de detener o retener a una persona (sujeta a averiguación previa) en los casos de flagrancia y urgencia exclusivamente.

*A*hora rige el principio general de la libertad caucional, que por excepción no se concede cuando se trata de delitos graves

El artículo 16 constitucional en sus párrafos reformados cuarto, quinto y séptimo, regula estas facultades extraordinarias del Ministerio Público.

Recordemos que con la reforma constitucional, la posibilidad legal de detención en casos urgentes sólo se da al Ministerio Público y no a cualquier otra autoridad administrativa, y que esta facultad está limitada a los delitos que la ley califique como graves y no para cualquier delito perseguible de oficio —como antes ocurría—, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no se pueda obtener orden de aprehensión por razón de la hora, lugar o circunstancia. Además, el Ministerio Público deberá fundar y razonar los indicios que motivaron su decisión, bajo su más estricta responsabilidad, decisión que será revisada por el juez. En caso de que se determine el abuso de esta facultad, será sancionado por la ley.

Casos de flagrancia y urgencia

El Código que analizamos ha reglamentado con toda precisión cuándo se está frente a un delito de flagrancia y cuándo se está en un caso de urgencia, desarrollando las bases constitucionales que hemos comentado.

El **artículo 194** hace un listado limitativo de los delitos graves y sólo en esos casos el Ministerio Público puede decretar una detención. Estos delitos son los siguientes, previstos en los artículos del Código Penal que se indican:

- a) Homicidio por culpa grave (artículo 60, tercer párrafo).
- b) Traición a la patria (123, 124, 125 y 126).
- c) Espionaje (127, 128).
- d) Terrorismo (139, primer párrafo).
- e) Sabotaje (140, primer párrafo).
- f) Piratería (146, 147).
- g) Genocidio (149 bis).
- h) Evasión de presos (150).

i) Ataques a las vías de comunicación (168, 170).

j) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo (172 bis, tercer párrafo).

k) Contra la salud (194, 195 primer párrafo, 196 bis, 197 primer párrafo, 198 parte primera del tercer párrafo).

l) Corrupción de menores (201).

m) Violación (265, 266, 266 bis).

n) Asalto en carreteras o caminos (286, segundo párrafo).

o) Homicidio (302, 307, 313, 315, 315 bis, 320, 323).

p) Secuestro (366).

q) Robo calificado (367, 370 segundo y tercer párrafos, 372, 381 fracciones VIII, IX, X, 381 bis).

r) Extorsión (390).

s) Los previstos en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

t) Tortura (4o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura).

u) Tráfico de indocumentados (138 de la Ley General de Población).

v) El previsto en el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación ("lavado de dinero").

De manera que conforme a las nuevas disposiciones, los plazos y las circunstancias en que el Ministerio Público puede detener y retener a una persona son los siguientes:

1. Delito flagrante. Cualquier persona puede detener al infractor, debiendo ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad más próxima, y ésta con la misma prontitud, debe ponerlo a disposición del Ministerio Público.

2. Casos urgentes. Sólo procede la detención en los delitos graves ya enumerados, siempre y cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se pueda sustraer a la acción de la justicia,



Tabla 1
Delitos graves y casos de delincuencia organizada

| <i>Delitos graves previstos en el artículo 194 que permiten la detención urgente por el Ministerio Público y que no permiten la libertad caucional*</i> | | <i>Delitos atribuidos a la delincuencia organizada previstos en el artículo 194 bis que permiten la retención hasta por 96 horas por el Ministerio Público en fase de averiguación previa</i> | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Terrorismo (artículo 139 párrafo 1o.) | 1. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 2. | Sabotaje (artículo 140 párrafo 1o., artículo 142 párrafo 2o. y artículo 145) | 2. | Coincide (artículo 140 párrafo 1o.) |
| 3. | Piratería (artículos 146 y 147) | 3. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 4. | Evasión de presos (artículo 150, con excepción de la parte primera, párrafo 1o. y artículo 152) | 4. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 5. | Ataques a las vías de comunicación (artículos 168 y 170) | 5. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 6. | Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo (artículo 172 bis, párrafo 3o.) | 6. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 7. | Contra la salud (artículos 194, 195 párrafo 1o., 196 bis, 197 párrafo 1o. y 198 parte primera del párrafo 3o.) | 7. | Coincide (<i>idem</i> , salvo artículo 197) |
| 8. | Violación (artículos 265, 266, 266 bis) | 8. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 9. | Asalto en carreteras o caminos (artículo 286, 2o. párrafo) | 9. | Coincide (sólo artículo 286) |
| 10. | Homicidio (artículos 302, 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323) | 10. | Coincide (no incluye artículos 313, 315 bis y 323) |
| 11. | Secuestro (artículo 366, exceptuando párrafos antepenúltimo y penúltimo) | 11. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 12. | Robo calificado (artículos 367, 370 párrafos 2o. y 3o., 372, 381 fracciones VIII, IX y X, y 381 bis) | 12. | Coincide (no incluye artículos 367, 381 fracción VIII) |
| 13. | Extorsión (390) | 13. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 14. | Los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (artículo 84) | 14. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 15. | Tráfico de indocumentados (artículo 138 de la Ley General de Población) | 15. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 16. | Delito previsto en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación (lavado de dinero) | 16. | Coincide (<i>idem</i>) |
| 17. | Traición a la patria (artículos 123, 124, 125 y 126) | 17. | No previsto |
| 18. | Homicidio por culpa grave (artículo 60, 3er. párrafo) | 18. | No previsto |

* Los artículos citados entre paréntesis se refieren al Código Penal.

no se pueda acudir a un juez en razón de la hora, lugar o circunstancia, y debiendo el Ministerio Público fundar y motivar su orden.

3. En cualquiera de los dos casos anteriores, el juez que reciba la consignación revisará de inmediato la legalidad de la detención, para ratificarla o revocarla, decretando la libertad con las reservas de ley.

4. El tiempo de la detención en casos de flagrancia o urgencia no debe exceder de 48 horas. Es decir, se duplica el plazo anterior de 24 horas, a fin de que el Ministerio Público tenga más tiempo para integrar en forma adecuada su averiguación previa. En la práctica, en casos complicados se utilizaba este plazo ampliado a través del mecanismo de retención ilegal, dando lugar a que cumplidas las 24 horas el detenido promoviera un juicio de amparo y el juez federal ordenara su libertad cumplidas las 24 horas a partir de que el actuario notificara al Ministerio Público dicha resolución.

5. El plazo de 48 horas podrá duplicarse a 96 horas cuando se trate de casos que la ley considere como de delincuencia organizada, que serán aquellos delitos previstos en el **artículo 194 bis** "en los que tres o más personas se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento o reiterado o con fines predominantemente lucrativos algunos de los delitos...". Dichos delitos son prácticamente los mismos a los que el artículo 194 se refiere como graves para los efectos de la procedencia de la detención urgente por el Ministerio Público y de la improcedencia de la libertad caucional, a que ya nos hemos referido.

Las diferencias se ilustran en la tabla 1.

La víctima u ofendido tiene derecho a recibir asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera

Como podemos ver, sólo los dos últimos no coinciden.

Derechos del inculcado frente al Ministerio Público

El artículo 128 reformado desarrolla con amplitud los derechos del inculcado frente al Ministerio Público cuando comparece por detención o en forma voluntaria. Estos derechos, que se enuncian en el artículo 16 que ya comentamos, son:

1. Se habla de detenido pero ya no de aprehendido; acto este último que como sabemos es ordenado por el juez, mientras que la detención la ordena el Ministerio Público en los casos de urgencia o flagrancia que ya analizamos.

2. La obligación que tiene el Ministerio Público de hacerle saber al inculcado los derechos que le otorga la Constitución en la averiguación previa.

3. La obligación del Ministerio Público de designarle un defensor de oficio, si el inculcado no tiene medios propios para su defensa.

4. Se facilitarán al inculcado todos los datos para su defensa, pudiendo él y su abogado consultar el expediente de la averiguación previa.

5. Se enfatiza el derecho del inculcado de presentar testigos en su defensa.

6. De acuerdo con la reforma a la fracción I del artículo 20 constitucional, se establece el derecho del detenido de obtener en forma inmediata su libertad caucional frente al Ministerio Público. Habiéndose derogado el requisito del término medio aritmético de la pena no mayor de cinco años para la concesión de este beneficio,

ahora rige el principio general de la libertad caucional y por excepción no se concede cuando se trata de delitos graves así considerados por el artículo 194 al que ya nos referimos.

El artículo 134 reformado que regula el ejercicio de la acción penal y el libramiento de la orden de aprehensión, incorpora ya los nuevos elementos que al respecto marca el artículo 16 de la Constitución. En lo relativo a la acción penal, actualiza la terminología sustituyendo la expresión *cuerpo del delito* por el término *elementos del tipo penal*. En relación con la orden de aprehensión, incorpora un elemento de fondo: que para ordenar la aprehensión ya no sólo debe acreditarse la probable responsabilidad del indiciado, sino también deberán acreditarse los elementos del tipo penal, por lo que ahora los requisitos que se necesitan para ejercitar la acción penal serán los mismos que el juez tome en cuenta para conceder o no la orden de aprehensión.

Lo anterior tiene lógica, porque conforme al artículo 161, para dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez deberá acreditar ambos extremos y no tendría sentido aprehender a una persona sin contar de una buena vez con los elementos que per-

mitirán determinar, dentro del plazo constitucional de 72 horas, la situación jurídica del inculcado.

En este artículo se establece un control de legalidad de oficio por parte del juez que recibe la consignación, ya que éste va a revisar si la detención fue apegada a la Constitución General de la República. En caso afirmativo, ratificará la detención; en caso negativo, decretará la libertad con las reservas de ley. De manera que se aplica un remedio inmediato y directo por el juez, que antes de la reforma no existía.

Libertad del inculcado sin caución

Adiciona un artículo 135 bis que establece una nueva forma de libertad procedente tanto ante el Ministerio Público como ante el juez, en la que no se requiere otorgar garantía por el procesado, siempre y cuando se den las siguientes circunstancias:

1. Que el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de tres años.

2. Que no exista riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia.

3. Que tenga domicilio fijo en el lugar donde está la autoridad, con antigüedad no menor de un año.

4. Que tenga un trabajo lícito.

5. Que no haya sido condenado por delito intencional.

6. Que no se trate de los delitos calificados como graves en el artículo 194.

Sobreseimiento

En el artículo 138 reformado, se proyecta una vez más el ánimo del legislador de humanizar la justicia y hacer más práctica su aplicación, al estable-

cer que se sobreseerán los procedimientos relativos a delitos culposos de daño en propiedad ajena y lesiones que no pongan en peligro la vida o dejen cicatriz perpetua en la cara.

Derechos de la víctima u ofendido

El artículo 141 reformado amplía en forma considerable los derechos de la víctima u ofendido. Antes se le permitía coadyuvar únicamente con el Ministerio Público y por su conducto proporcionar al juez sus pruebas relativas a la reparación del daño, y el juez tenía la facultad de citar de oficio al ofendido o a su representante. Ahora, la víctima u ofendido tiene además los siguientes derechos:

1. Recibir asesoría jurídica y la información que solicite sobre la averiguación previa y el proceso.
2. Estar presente en todos los actos en que tenga derecho a estar el inculpado.
3. Recibir asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera.
4. Proporcionar directamente al juez pruebas no sólo en relación con la reparación del daño sino para acreditar los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado. De hecho, con este artículo se le reconoce tácitamente a la víctima u ofendido el carácter de parte que en el texto anterior a la reforma expresamente se le negaba.

En el artículo 142 se hacen expeditos los plazos para que el juez radique los asuntos sin detenido y para que resuelva sobre las peticiones de órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia y cateo que le formule el Ministerio Público.

Tabla 2
Plazos para radicación y dictar órdenes de aprehensión

| | <i>Plazos anteriores</i> | <i>Plazos actuales</i> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Radicación | 10 días máximo | 2 días |
| Radicación en "delitos graves" | No previsto | De inmediato |
| Órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo | 15 días a partir de la radicación (no se incluía el cateo) | 10 días a partir de la radicación |
| Órdenes de aprehensión o cateo en "delitos graves" | No previsto | 24 horas a partir de la radicación |

Procesos sumarios

El artículo 152 reformado acorta los tiempos de los procesos sumarios y reduce los requisitos para ellos, ampliando las posibilidades en favor del inculpado y en beneficio de la economía procesal. Se otorga al inculpado el derecho a optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le

notifique la instrucción del juicio sumario.

Declaración preparatoria

El artículo 155 se reforma de manera trascendental, pues si bien antes la declaración preparatoria debía ser oral y no se permitía que el inculpado fuera aconsejado o asesorado por persona alguna, ahora se permite al inculpado

Tabla 3
Procesos sumarios

| <i>Requisitos</i> | <i>Tiempos anteriores</i> | <i>Tiempos actuales</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Pena que no exceda de 6 meses de prisión o no sea privativa de libertad | 15 días de instrucción | |
| Pena que no exceda de 2 años o no sea privativa de libertad | | 15 días de instrucción |
| Delito flagrante, confesión ante el juez, que no exceda de 5 años el término medio aritmético de la pena o sea alternativa | 30 días de instrucción | |
| Mismas características pero con pena que exceda de 2 años | | 30 días de instrucción |

rendir su declaración en forma oral o escrita y se le otorga el derecho de ser asesorado por su defensor.

Auto de formal prisión

El artículo 161 reformado, permite que la solicitud que haga el inculcado para que se duplique en su beneficio el plazo de 72 horas relativo al auto de formal prisión, no tenga que ser por escrito. Además, ahora le permite hacerlo aun dentro de las tres horas siguientes a su declaración preparatoria.

Asimismo, la nueva redacción corrige una omisión que tenía este artículo al prever que dicha ampliación del plazo se notifique al director del reclusorio preventivo en donde se encuentre internado, en su caso, el inculcado, a fin de que no se tome esta situación como una prolongación de la detención en perjuicio del inculcado, prohibida y sancionada por el artículo 19 de la Constitución.

Por cierto, al reformarse este artículo 161, el legislador no aprovechó la oportunidad para modificar la fracción IV cuando se refiere a *eximente de responsabilidad*, expresión que debió sustituirse por la de *causas de exclusión del delito*, adoptada por el propio legislador al modificar el Capítulo IV del Título Primero del Código Penal, analizado en la edición anterior de *Crónica Legislativa*.

Elementos del tipo penal y probable responsabilidad

En relación con la comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad del inculcado, se ha operado un cambio muy

Si los bienes
asegurables son
tierras destinables a
actividades
agropecuarias, no
serán objeto de
subasta

importante en el artículo 168, pues ahora se dan reglas generales que definen cuáles son los elementos del tipo penal, así como la forma de determinar la probable responsabilidad. Esto proporciona una verdadera guía didáctica al Ministerio Público y al juez, tanto para el ejercicio de la acción penal

como para el libramiento de la orden de aprehensión y autos de formal prisión y sujeción a proceso, respectivamente.

Derechos de terceros en aseguramientos de bienes

El artículo 181 establece un término de 10 días para notificar a terceros interesados, a partir del aseguramiento de bienes relacionados con la comisión de un delito, para que aleguen lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de 30 días, debiendo proseguir con el procedimiento previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Se establecen también las reglas para hacer dicha notificación. Asimismo, se determina que si se trata de tierras destinables a actividades agropecuarias, los bienes no serán objeto de subasta sino que se entregarán a las autoridades competentes para su regularización legal.

Careos, confesiones y conclusiones

En congruencia con el lugar que ahora se le da al ofendido o víctima en el proceso, el artículo 249 le otorga, junto con el Ministerio Público y el defensor, el derecho de interrogar a los testigos.

Conforme a la reforma de la fracción IV del artículo 20 constitucional, el artículo 265 prevé que los careos se llevarán a cabo en beneficio del inculcado cuando lo solicite, o bien cuando existan contradicciones sustanciales en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse a juicio del Tribunal.

El artículo 287 se refiere a la forma como debe producirse la confesión del



CUARTACERO

inculcado para tener valor legal, agregándose dos elementos nuevos:

1. Que la confesión se rinda con la asistencia del defensor. Antes sólo se decía "en presencia del defensor".

2. Las diligencias practicadas por la policía judicial se tomarán como pruebas testimoniales.

En materia de conclusiones, el **artículo 294** se ha modificado a fin de garantizar mejor los derechos del acusado para que en caso de que las conclusiones del Ministerio Público no concreticen la pena que se solicita o se refieran a algún delito no expresado en el auto de formal prisión o a persona distinta de las procesadas, se tengan por no acusatorias. Antes de la reforma, se establecía que las conclusiones fueran turnadas al procurador general de la República para su modificación.

En el mismo sentido, el **artículo 296** se ha reformado para adicionar un párrafo donde se prevé que en las conclusiones acusatorias que se refieran a un delito que no tenga como sanción pena de prisión o bien que sea alternativa con otra no privativa de libertad, el juez ponga en inmediata libertad al procesado, dejándolo sujeto al proceso.

Casos de sobreseimiento

La procedencia del sobreseimiento se amplía a segunda instancia, lo que estaba prohibido expresamente antes de la reforma. Los casos en que procede son:

1. Cuando la responsabilidad penal esté extinguida.

2. Cuando existan pruebas supervinientes que acrediten la inocencia del encausado.



Omisiones de la defensa

Asimismo, para proteger mejor los derechos del inculcado y no hacerle pagar los errores o descuidos de su abogado, se establece en el **artículo 388**, relativo a los casos en que será repuesto el proceso, una nueva fracción VII bis que señala aquellas omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, que tendrán como consecuencia la reposición del proceso:

1. No haberlo asesorado sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso.

2. No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervención del inculcado durante la averiguación previa y el proceso.

Las omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, tendrán como consecuencia la reposición del proceso

3. No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculcado.

Libertad provisional

En relación con la libertad caucional, que ya mencionamos, el nuevo **artículo 399** la regula bajo la nueva concepción consignada en la reforma al artículo 20 constitucional fracción I, de que el principio general que rige es el de la libertad provisional en tanto dura el proceso y no la prisión preventiva, que ahora se presenta por excepción.

Este es un tema muy importante porque cambia en forma diametral la política criminal del Estado mexicano que por muchos años mantuvo el principio de la prisión preventiva como regla general con los consecuentes problemas de:

- a) Insuficiencia de espacios en las cárceles.
- b) Falta de un sistema penitenciario adecuado.
- c) Aumento de corrupción en los centros de internamiento.
- d) Alto costo social y gubernamental en la atención del delito.
- e) Contaminación carcelaria.
- f) Desintegración de la planta productiva y de la familia.
- g) Generación de revanchismos y frustraciones sociales que originan más delincuencia.

Cambia en forma diametral la política criminal del Estado mexicano, que por muchos años mantuvo el principio de la prisión preventiva como regla general

h) Violación de derechos humanos.
i) Violación del principio jurídico *nulla pena sine crimen* ("no hay delito sin pena"), ya que la prisión preventiva no es otra cosa que un castigo anticipado a la sentencia.

Celebramos este cambio fundamental del sistema penal mexicano, que inscribe a nuestro país en la lista de las naciones precursoras de sistemas modernos y humanistas en la aplicación de la justicia penal.

Si bien a través de una reforma anterior a la que comentamos ya se había incluido en los códigos de procedimientos penales la facultad del juez de conceder la libertad provisional aun en aquellos casos en que la pena del delito imputado fuera mayor del término medio aritmético de cinco años de prisión, en resolución fundada y motivada y bajo ciertos requisitos, en la práctica los jueces no utilizaban esta facultad, con seguridad restringidos por una inercia de prisión preventiva que duró muchos años.

Con la reforma que comentamos, se establece ya no como excepción sino como regla general la procedencia de la libertad caucional.

Tabla 4
Condiciones para la libertad provisional

| Artículo 399 reformado | Artículo 399 anterior |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Principio general: libertad provisional | I. Principio general: libertad sólo en delitos con pena media aritmética de cinco años o menor |
| II. No previsto | II. Excepcionalmente y a criterio del juez en casos de pena media mayor de cinco años, bajo ciertos requisitos |
| III. Requisitos actuales: 1) Garantizar la reparación del daño 2) Garantizar las sanciones pecuniarias 3) Garantizar las obligaciones procesales 4) Que no se trate de los delitos clasificados como graves en el último párrafo del artículo 194 5) No previsto 6) No previsto | III. Requisitos anteriores: 1) El mismo 2) No previsto 3) No previsto 4) Que no se trate de los delitos que se indican 5) Que no constituya un grave peligro social 6) Que no se trate de reincidentes o habituales |

Como podemos ver, el enfoque actual es la garantía patrimonial y la seguridad de que el procesado no se sustraiga a la acción de la justicia sin importar las consideraciones de peligrosidad o reincidencia. La primera se atiende porque va implícita en la clasificación de los delitos considerados como graves; la segunda ha dejado de ser un factor agravante de la pena o un obstáculo para obtenerse la libertad provisional, aunque continúa siendo un elemento a valorarse por el juez al momento de individualizar la pena en la sentencia.

Monto de la caución

En el artículo 400 reformado se establece que los montos de las garantías podrán reducirse sólo en lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones procesales, a juicio del juez si hay otros elementos que denoten que el procesado no fallará en dicho cumplimiento.

Los criterios en los que se basará el juez para fijar el monto de la caución para conceder la libertad, se conservan iguales. Sólo se deroga la última parte del artículo 402 que señalaba que en caso de beneficio económico para el autor o daño patrimonial a la víctima, la garantía sería necesariamente cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño causado.

Informe a Prevención y Readaptación Social

Finalmente, el artículo 531 se modifica para establecer la obligación del juez al dictar sentencia ejecutoriada –sea absolutoria o condenatoria–, a expedir dentro del plazo de 48 horas una copia certificada de la sentencia para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, debiendo dictar de oficio todas las providencias conducentes para que el reo quede a disposición de dicha dependencia. En caso de incumplimiento será multado. **IV**

Las inasistencias de los legisladores

Tomás Osorio Avilés*

El problema de las inasistencias de los legisladores se ha presentado en la mayoría de las legislaturas del Congreso de la Unión. La LV Legislatura no es la excepción. Lograr el quórum que establece la Constitución mexicana para aprobar leyes, en ocasiones ha representado serias dificultades.

Por ejemplo, ha ocurrido que en un periodo de sesiones ordinarias, al recogerse la votación se observe que entre votos a favor, en contra y abstenciones, sumen un total de 257 sufragios. En otras palabras, en esa sesión sólo 257 diputados cumplieron con la responsabilidad que establece el reglamento interior de la Cámara. ¿Qué ocurrió con los otros 243 legisladores?

Este asunto ha provocado diversas declaraciones en los medios de comunicación, en el sentido de que se sancionará a legisladores faltistas. Se ha llegado a decir, incluso, que serían llamados los suplentes para sustituir a los diputados irresponsables. Además, casi todos los coordinadores de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados han emitido opiniones al respecto y exhortaciones a sus compañeros de bancada para que

cumplan con su responsabilidad de acudir a las sesiones del pleno.

Por la importancia del tema, vale la pena apuntar qué señalan al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Unión.

El artículo 63 constitucional establece en su párrafo segundo: "... los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o

sin previa licencia del presidente de su respectiva cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".

Por su parte, el artículo 64 señala: "Los diputados y senadores que no concurren a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten".

Por otro lado, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, entre las atribuciones del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señala en su inciso E: "Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer,

en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con base en el artículo 63 constitucional". Consideramos que a este inciso E del artículo 34 de la Ley Orgánica, debe adicionarse lo que se establece en el artículo 64 constitucional.

A su vez, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a este asunto tan controvertido en varios de sus artículos.



* Diputado federal por el III distrito de Morelos. Perteneció al Partido Revolucionario Institucional.

Cuando un legislador deje de asistir a las sesiones durante 10 días consecutivos sin causa justificada, se publicará su nombre en el Diario Oficial

ERIGIO MENDOZA



El artículo 21, relativo a las obligaciones del presidente de la Cámara, establece en su fracción XVII: "Obligar a los representantes ausentes a concurrir a las sesiones por los medios que juzgue más convenientes, en los casos en que se trate de asuntos de interés nacional".

En el segundo párrafo de la fracción II del artículo 25, con claridad se indica: "Las actas de cada sesión contendrán el nombre del individuo que la presida, la hora de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior, una relación nominal de los diputados presentes y de los ausentes, con permiso o sin él...".

El artículo 45 tiene gran importancia, en virtud de que establece en su primer párrafo: "Los individuos de la cámaras asistirán a todas las sesiones desde el principio hasta el fin de éstas...". Y el párrafo segundo, dice: "Se considerará ausente de una sesión al miembro de la Cámara que no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiere alguna votación nominal y no se encontrare presente, también se considerará como faltante. De igual manera se considerará ausente en caso de falta de quórum al pasarse la lista correspondiente".

También el artículo 47 se ocupa de este asunto. Consigna: "El senador o

diputado que por indisposición u otro grave motivo no pudiere asistir a las sesiones o continuar en ellas, lo avisará al presidente por medio de un oficio o de palabra; pero si la ausencia durase más de tres días, lo participará a la Cámara para obtener la licencia necesaria".

Sobre las ausencias consecutivas, el artículo 50 señala: "Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a las sesiones durante 10 días consecutivos sin causa justificada, la Secretaría hará que se publique el nombre del faltista en el *Diario Oficial* y esta publicación seguirá haciéndose mientras continúe la falta".

En la fracción IV del artículo 147 se establece una disposición muy clara para corroborar quién asiste y quién falta a las sesiones. Dice para el caso de la votación nominal: "Los secretarios o prosecretarios harán en seguida la computación de los votos y leerán desde las tribunas uno de los nombres de los que hubiesen aprobado y otro de los que reprobaran; después dirán el número total de cada lista y publicarán la votación".

Por último, vale la pena consignar lo que establece el artículo 203 del Reglamento Interior del Congreso: "Los tesoreros descontarán de las cantidades que deban entregar como dietas a los diputados y senadores, la suma que corresponda a los días que dejaren de asistir, conforme a la orden escrita del presidente de la Cámara o

de la Permanente. El presidente de cada cámara o el de la Permanente, en su caso, pasará oportunamente las listas de asistencia a las sesiones".

Como podemos observar, la Constitución y la legislación interna del Congreso mexicano son muy claras con respecto al tema. En ambas se consigna el supuesto de que se llamará a los suplentes de los legisladores sólo cuando éstos falten de manera consecutiva y sin causa justificada o sin licencia durante 10 días. También ambos ordenamientos legales señalan que los legisladores que falten a las sesiones sin permiso o sin causa justificada se harán acreedores a sanciones de carácter económico. Sin embargo, el hecho de que no se cumpla con lo que señalan las citadas disposiciones, provoca que el ausentismo de los representantes populares sea mayor.

No obstante, más que utilizar las normas jurídicas como medida de presión para combatir el ausentismo de los legisladores, es necesario que éstos adquieran mayor conciencia para cumplir con la elevada función que el pueblo mexicano confiere a sus representantes populares.

En estos momentos, 500 mexicanos de seis partidos políticos tenemos la enorme responsabilidad de hacer el mejor de nuestros esfuerzos para cumplir con dignidad la confianza que con su voto nos otorgaron millones de mexicanos.

Los asuntos críticos para el país, en la tribuna de la Permanente

El reconocimiento de la grave situación de pobreza, marginación y discriminación prevaleciente en Chiapas, sufrida sobre todo por las comunidades indígenas en ese y otros estados de la República, fue una de las primeras reacciones de los legisladores frente al levantamiento armado del primero de enero. Diputados de diversos grupos parlamentarios identificaron entre las principales causas del rezago social de la entidad, la existencia de grandes cacicazgos y latifundios, el insuficiente reparto agrario y la creciente marginación de las culturas y comunidades indígenas.

En la sesión del 5 de enero, la primera tras el alzamiento en Chiapas, los seis partidos representados en la Comisión Permanente manifestaron su consternación por el conflicto armado. El PARM, el PRD y el PAN, por conducto de los diputados Alfredo Castañeda Andrade, Alejandro Encinas Rodríguez y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente, expresaron que las causas del conflicto se hallaban en los profundos rezagos sociales dominantes en esa entidad del sureste mexicano. Las tres fracciones, empero, signaron una declaración política, también suscrita por el PRI y el PPS, en la que conminaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al abandono de las armas y al encauzamiento del conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Asimismo, el documento hacía un llamado para la difusión oportuna y veraz sobre el conflicto y daba cuenta de la creación de un Grupo Plural de diputados que daría seguimiento al desarrollo del mismo.

Juan Antonio Nemi Dib, del PRI, reconoció los graves problemas socioeconómicos que aquejan al estado de



SERGIO MENDOZA

El levantamiento armado en el estado de Chiapas; el incalificable asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y la celebración de un segundo periodo extraordinario de sesiones en el que se modificó el artículo 41 constitucional y diversas disposiciones del Código Penal, fueron los tres grandes temas abordados por la Comisión Permanente entre el 26 de diciembre de 1993 y el 15 de abril pasado

Miscelánea

Banco de México. El nombramiento de Miguel Mancera Aguayo como gobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México, así como de Guillermo Prieto Fortún, Francisco Gil Díaz, Jesús Marcos Yacamán y Ariel Buira Ceira como vicegobernadores de dicha institución, fueron aprobados en la Permanente el 26 de marzo. Únicamente se opuso el PPS, que explicó su reticencia a convalidar cualquier medida que forme parte de las políticas que tienden a reducir el papel del Estado en la economía nacional.

OCDE. El ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue tema de la intervención del perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien consideró que la desregulación de las inversiones foráneas, así como las diferencias estructurales entre México y los países más industrializados del organismo, podrían acarrear graves consecuencias para el país. A su vez, el priista Javier Garduño Pérez hizo notar que los miembros de la OCDE son aquellos países que poseen las economías más sanas del mundo.

Chiapas, pero hizo énfasis en el esfuerzo que el gobierno federal había realizado en la región. Recordó el aumento en la inversión en materia de infraestructura y servicios así como la resolución de un alto porcentaje de expedientes agrarios. Por último, hizo un llamado a la unidad y a realizar todos los esfuerzos para encauzar los sucesos hacia una solución pacífica.

Por conducto de Alberto Carrillo Armenta, el PFCRN explicó su negativa a firmar la declaración política suscrita por el resto de las fracciones por considerar que ésta no hacía frente al problema esencial, que residía en el

El Grupo Plural postuló que el diálogo y la negociación política debían reemplazar el camino de las armas

reconocimiento explícito del carácter político del conflicto. Asimismo, Carrillo Armenta consideró la conveniencia de reconocer al EZLN como fuerza beligerante, con el fin de sentar las bases para una negociación, además de proponer el cese unilateral del fuego por parte del Ejército mexicano.

El 17 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el decreto por el que se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones con el fin de discutir, y en su caso aprobar, la Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo el día anterior. Esta Ley de Amnistía —aprobada tres días más tarde, como se reseñó en la edición anterior de *Crónica Legislativa*— y el constante trabajo informativo y de seguimiento realizado por el Grupo Plural conformado para tal efecto, fueron las bases del trabajo parlamentario en relación con el conflicto chiapaneco.

Los días 26 de enero y 9 de febrero, el Grupo Plural rindió informes de sus trabajos sobre Chiapas. El senador Víctor Tinoco Rubí fue el encargado de dar cuenta al resto de los integrantes de la Permanente sobre el estado en que se encontraba el proceso de pacificación. Según destacó en ambas oportunidades, el diálogo y la negociación política reemplazaban el camino de las armas, en un ambiente en el que la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cobraba mayor presencia. Asimismo, el Grupo insistió en que reformar el Código Penal del estado de Chiapas y asumir las decisiones de la recién creada Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, eran dos cuestiones que adquirirían vital importancia para superar los pro-

fundos rezagos y el clima de injusticia que privan en aquel estado.

Previamente, el 2 de febrero, todos los partidos habían signado un punto de acuerdo para llamar a una amplia consulta nacional “que permita ponderar los intereses y planteamientos de los pueblos indígenas, y en la que participarán, asimismo, representantes de los propios pueblos, estudiosos de la materia, las diversas fuerzas políticas nacionales y la sociedad en general para, en su caso, proponer los proyectos de iniciativa y medidas que se estimen adecuadas”.

En el contexto del conflicto chiapaneco, los legisladores se refirieron al problema de los medios de comunicación, así como al derecho ciudadano de disponer de información objetiva y oportuna. En este tenor, el 2 de febrero la diputada priista Laura Alicia Garza Galindo presentó una declaración política, signada por todas las fracciones, en la que se expresaba el rechazo de la Comisión Permanente a cualquier acto que lesionara la libertad de expresión en los medios de comunicación, y de manera singular, condenaba los ataques y calumnias en contra del periódico *La Jornada*.

El PRD presentó a su vez, en la sesión del día 9, un punto de acuerdo que condenaba las agresiones a la videoprodutora “Canal 6 de Julio”, al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y a un grupo de reporteros de periódicos y revistas nacionales en San Cristóbal de las Casas. El punto de acuerdo fue aprobado sin discusión. Al final de la siguiente sesión, se propuso incluir, dentro del pronunciamiento de la Permanente contra las limitaciones a la libertad de expresión, una condena por las restric-

ciones del EZLN a la empresa Televisa. Fuerte discusión promovió, en la sesión subsiguiente, el retiro de la firma que el propio PRD hiciera del punto de acuerdo debido a lo que esta fracción calificó de uso parcial y deformador de la información en la cobertura realizada por la empresa Televisa sobre el conflicto chiapaneco. El PRI criticó con vehemencia la decisión perredista; consideró que la libertad de expresión debía ser defendida en todo momento, independientemente de cuál fuera la inclinación política del medio informativo.

A su vez, Francisco Paoli Bolio, del PAN, ratificó la convicción de su fracción de defender la libertad de expresión; sin embargo, hizo notar que también era indispensable defender el derecho del receptor de la información, debido a que era lesionado por información sesgada y parcial. En consecuencia, consideró apropiado que el

derecho de réplica se aplicara en los medios electrónicos de información.

Con el panista coincidió en este punto José de Jesús Martín del Campo, quien abundó en la postura del PRD al opinar que la empresa Televisa hacía un uso tan parcial de la información, que bien se podía ver en ella una "oficina de prensa de la Presidencia". A su vez, el también perredista Alejandro Encinas hizo notar que Televisa administraba una concesión para prestar un servicio público, lo que impedía un planteamiento informativo que no fuera estrictamente imparcial.

Semanas después, en la sesión del 9 de marzo, el PRD externó su preocupación por hechos que, según afirmó el diputado Alejandro Encinas, enrarecían el clima político favorable para una solución del conflicto chiapaneco. Estos hechos, puntualizó, eran las manifestaciones en Ocosingo pidiendo la

Miscelánea

Pemex. Los diputados Gabriel Jiménez Remus, del PAN, y Emilio Becerra González, del PRD, se refirieron en tribuna a las investigaciones sobre las explosiones acaecidas en Guadalajara el 22 de abril de 1992. Ambos exigieron la cabal clarificación de los hechos. En particular, Jiménez Remus expresó que la presentación de conclusiones no acusatorias a favor de los nueve detenidos por parte del agente del Ministerio Público, permitía suponer el encubrimiento de la responsabilidad de Petróleos Mexicanos. Pemex volvió a ser tema de discusión el 16 de febrero. Juan José Rodríguez Prats, del PRI, acusó al PRD de incitar en Tabasco a los trabajadores petroleros para que presentaran demandas contra la paraestatal, con intención de desestabilizar esa entidad con fines electorales. Pronta fue la respuesta perredista: el senador Porfirio Muñoz Ledo explicó que los intereses laborales de los trabajadores de Pemex habían sido seriamente dañados. Hizo notar que los trabajadores habían sido afectados muchas veces por las mismas cúpulas sindicales, y a la vez que negó las acusaciones de Rodríguez Prats, pidió que la situación en Tabasco fuera debidamente investigada y resuelta.

Un mes más tarde, el 16 de marzo, Rodríguez Prats, con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera, ratificó sus consideraciones acerca de las acciones del PRD en Tabasco. Los diputados perredistas Alejandro Encinas Rodríguez y Jesús Martín del Campo propusieron en consecuencia conformar una comisión plural que investigara la situación laboral de los trabajadores de Pemex en aquel estado. Ante las consideraciones de Rodríguez Prats de que no era necesaria dicha comisión, los legisladores del PRD retiraron su propuesta con la intención de buscar los consensos que ella requería.



PIEDRO VALLIERBA / CUARTOSUR

Miscelánea

Huelga en la UAM. El diputado perredista Jesús Martín del Campo se refirió, durante la sesión del 9 de febrero, a la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), iniciada ocho días antes. Dijo que el sistema de beneficios por la vía de estímulos y becas resultaba insuficiente para atender el rezago salarial de la planta docente. En consecuencia, propuso que los montos presupuestales en materia educativa fueran revisados.

Durango. El PAN, por conducto de Juan de Dios Castro Lozano, denunció el 16 de febrero presuntas transgresiones al estado de derecho en Durango. Informó que su partido había denunciado ante las autoridades locales un supuesto desvío de fondos por parte del ayuntamiento de la capital duranguense a favor de la candidata presidencial del Partido del Trabajo, Cecilia Soto. Reconoció que el posible ilícito atañía exclusivamente a las autoridades de esa entidad, pero consideró que la violación al estado de derecho era motivo para hacer uso de la tribuna federal.

De marchas y bloqueos. El de las marchas, plantones y bloqueos viales con fines políticos fue tema de discusión el día 2 de marzo, cuando el diputado priista Rodolfo Echeverría Ruiz, consideró que en las movilizaciones callejeras no sólo había que considerar el derecho del ciudadano que optaba por manifestarse, sino también el de aquel individuo que optaba por la no manifestación. En consecuencia, explicó, los partidos políticos deberían evitar todo acto que lesionara el derecho de los no manifestantes, como es el caso de los bloqueos. El PRD, por voz de René Bejarano Martínez, dirigente de su partido en el Distrito Federal, coincidió en que la ciudad, debido a la altísima complejidad que la caracteriza, precisaba que las manifestaciones y movilizaciones fueran previamente organizadas, si bien aclaró que el gobierno debe atender las demandas ciudadanas antes de que la inconformidad social se exprese masivamente.

expulsión de la CNDH y de los Organismos No Gubernamentales, así como las agresiones a la caravana universitaria Ricardo Pozas y a las religiosas del Hospital de San Carlos. El orador perredista consideró que las presiones ejercidas por grupos caciquiles podían poner en peligro la paz de la región, por lo que era indispensable que las autoridades estatales mantuvieran las condiciones para un clima favorable a la negociación.

En respuesta, la diputada Laura Alicia Garza Galindo, apuntó que el derecho de expresión pertenecía a todos los grupos, en forma independiente de su orientación política, y opinó que los chiapanecos deberían resolver sus diferencias sin injerencias externas, postura apoyada por su correligionario diputado Juan Antonio Nemi Dib y por los senadores Carlos Jiménez Macías y Víctor Manuel Tinoco Rubí, también del PRI.

Un par de días después, el 11 de marzo, el comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Manuel Camacho Solís, se reunió por tercera ocasión con los miembros del Grupo Plural de la Comisión Permanente para informarles acerca del estado de las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entrevistado una vez terminada la reunión, que duró casi tres horas y fue celebrada a puerta cerrada, Camacho Solís expresó: "he encontrado en el Congreso de la Unión el clima más positivo que podía esperarse en favor del proceso de paz. Sin excepción, todos los partidos políticos están ayudando de manera muy responsable y la Comisión Plural será sin duda uno de los garantes del cumplimiento de los acuerdos de paz".

PAN Y PRD

*insistieron en la
creación de un marco
legal que asegurara
la claridad de las
elecciones de agosto
próximo*

Vísperas del extraordinario

En distintas sesiones, los legisladores de las diversas fracciones, en particular del PAN y el PRD, consideraron que el clima de inestabilidad política hacía indispensable la creación de un marco legal que asegurara la claridad de las elecciones federales de agosto próximo.

Particularmente en el mes de febrero y la primera mitad del de marzo, tras del acuerdo signado el 27 de enero por los candidatos a la presidencia de la República y los presidentes de ocho partidos políticos con registro —a excepción del PPS—, conocido ya con el nombre de "Pacto de Civilidad", los legisladores llevaron a cabo una serie de debates en los que plantearon la posibilidad de efectuar un nuevo periodo extraordinario de sesiones.

El senador Porfirio Muñoz Ledo y el diputado Jesús Martín del Campo ratificaron, en la sesión del 2 de febrero, la voluntad del PRD de encaminarse hacia una nueva reforma electoral. Destacaron como posibles y principales temas de ésta, la confiabilidad del padrón electoral, el aseguramiento de la equidad en el acceso a los medios de comunicación, la revisión del sistema de financiamiento de partidos, así como la creación de una fiscalía para

la persecución de los delitos electorales. Con argumentos similares, el diputado panista Juan de Dios Castro Lozano reiteró la voluntad del PAN de cumplir a cabalidad con los acuerdos suscritos, si bien destacó que la voluntad política debería manifestarse primordialmente en los hechos.

Por su parte, el Revolucionario Institucional, por voz de los diputados

Juan Ramiro Robledo Ruiz y Miguel González Avelar, coincidió en señalar la importancia de la suscripción del "Pacto de Civilidad", al señalar que éste incluía las principales exigencias de las fuerzas políticas para la realización de una reforma que permitiera avanzar en la atención de los graves problemas de rezago social del país.

El PPS, en cambio, por conducto de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, expresó su reprobación por el mecanismo mediante el que se había realizado el "Pacto de Civilidad", por considerar que no había sido producto de un verdadero consenso entre todas las fuerzas políticas, si bien explicó que su partido coincidía en la mayor parte del contenido del mismo.

Cuatro sesiones más tarde, el 2 de marzo, los legisladores discutieron de nueva cuenta la posibilidad de un periodo extraordinario. Los acuerdos celebrados entre el PRI, el PAN y el PRD el 28 de febrero con el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, así como la culminación de la primera fase del diálogo entre el EZLN y el Comisionado para la Paz, Manuel Camacho Solís, sentaron nuevas bases para que dicho periodo se realizara. Sin embargo, el PPS volvió a expresar su oposición, porque a su juicio la iniciativa para un periodo extraordinario debía provenir del consenso de los partidos políticos, y no sólo de tres. Asimismo, el Popular Socialista se opuso a la integración de los organismos electorales por ciudadanos que no tuvieran filiación partidaria alguna, pues consideró que esto lesionaba el régimen plural de partidos.

El PRD y el PAN coincidieron también en el planteamiento de que la celebración de un periodo extraordina-



rio debería partir del consenso de las fuerzas políticas partidarias y no de los acuerdos realizados por el Comisionado para la Paz, refrendando, empero, su voluntad política para que ese periodo se efectuara. En discrepancia con el PPS, las fracciones del PAN y del PRD expresaron que la incorporación de miembros de la sociedad civil a los procesos e instancias electorales permitiría una mayor transparencia en los comicios.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRI concordó con los argumentos de panistas y perredistas en torno a la reforma y a la necesidad de que ésta partiera del consenso, si bien negó que el comunicado del Comisionado pudiera interpretarse como una acción que vulnerara la soberanía y autonomía del Congreso y los partidos que lo integran.

Las posiciones en torno a la conveniencia y la agenda del periodo extraordinario continuaron en las siguientes sesiones, hasta que finalmente se acordó que se efectuara dicho periodo —que se reseña por separado en esta edición de *Crónica Legislativa*— a partir del 22 de marzo.

Miscelánea

Denuncia perredista. En la sesión del 2 de marzo, el PRD presentó una declaración política en la que denunciaba las agresiones sufridas el 24 de febrero por los jóvenes Jorge Bustamante y David Lascarie, al término de una manifestación perredista en el zócalo del Distrito Federal, y exigía el esclarecimiento de los hechos.

La Permanente en la LVI Legislatura. El 9 de marzo, el PAN presentó una iniciativa para reformar el artículo 78 de la Constitución, con el fin de ajustar el número de senadores y diputados que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a raíz de las recientes modificaciones en la integración del Senado. La iniciativa propone que la Comisión Permanente quede integrada por 51 miembros, de los cuales 26 serán diputados y 25 senadores. En sus consideraciones, la iniciativa hace notar que esta integración conserva la proporción actual de diputados y senadores, al mantener el 51 por ciento para los primeros y el 49 por ciento restante para los segundos.

Miscelánea

Mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado la víspera, la Comisión Permanente reiteró el 9 de marzo su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer, al signar un punto de acuerdo —apoyado por todas las fracciones— presentado por la diputada del PRI, Layda Sansores San Román.

Expropiación petrolera. Al conmemorarse la expropiación petrolera, los diputados de las fracciones del PRD, PRI y PPS hicieron uso de la tribuna para referirse a la acción emprendida el 18 de marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas. Por el PRD, Jesús Martín del Campo rindió homenaje al general Cárdenas y señaló que la expropiación había permitido la construcción de sólidas instituciones de carácter popular. Consideró que la política económica actual, así como el papel jugado por el sindicato de Petróleos Mexicanos en contra de los intereses de los trabajadores, dañaban seriamente el proyecto original de dicha empresa.

A su vez, el senador priista José Ramón González León subrayó la importancia que la nacionalización del petróleo había tenido para el país y señaló que ese acontecimiento había marcado el principio de la independencia económica de México, razón por la cual debería defenderse y sostenerse a toda costa. Por su parte, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, ~~coordinador de la fracción parlamentaria del PPS en la Cámara~~ rescató el importante papel que ha jugado el sindicato de Petróleos Mexicanos, e hizo énfasis en que la expropiación había sido posible debido al apoyo social que el presidente Cárdenas había tenido, destacando la acción de Vicente Lombardo Toledano en la conducción y organización del sindicato petrolero.

La Cámara y el exterior

La solicitud del Ejecutivo para ausentarse del país del 27 al 30 de enero, con objeto de acudir a una reunión de trabajo en Davos, Suiza, se debatió el día 26 de ese mes. El dictamen fue votado en contra por el PRD, que argumentó que la presencia del Ejecutivo en el país era prioritaria debido a la crisis chiapaneca. El PRI y el PFCRN consideraron que la asistencia del Ejecutivo a la reunión en Davos resultaba de significativa importancia porque eso ayudaría a que los inversionistas refrendaran su confianza en México y coadyuvaría a fortalecer la política diversificadora del país, por lo que externaron su voto aprobatorio. En el mismo sentido fue la participación del PPS, que condicionó su aprobación al dictamen a que el Ejecutivo mantuviera en la reunión de Suiza un discurso autocrítico de la política neoliberal. Por su parte, el PAN se abstuvo.

Las fracciones del PRI, el PFCRN, el PARM, y el PPS, suscribieron el 2 de febrero una declaración política con motivo de las audiencias convocadas por el Congreso de Estados Unidos para examinar la violación de derechos humanos en diversos países del mundo, entre ellos México. En ella, los legisladores expresaron su rechazo a que dichas audiencias derivaran en actitudes o acciones intervencionistas en contra de México. En otra declaración, los miembros del PAN y del PRD consideraron legítimo el derecho de otros congresos del mundo de discutir el tema de los derechos humanos, si bien manifestaron su preocupación de que pudiera derivar en cualquier tipo de intervencionismo.

En la sesión siguiente, el 9 de febrero, los legisladores del PRI, el PAN, el PFCRN, el PARM y el PPS, suscribieron una declaración política en torno a las medidas anunciadas el 3 de febrero por autoridades estadounidenses para intensificar la política antimigratoria. En la declaración se proponía realizar una consulta en México y Estados Unidos para permitir un enfoque integral del problema migratorio. Asimismo, todos los partidos signaron un punto de acuerdo propuesto por el PRD, para que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Fronterizos, convocara a audiencias públicas para la discusión del problema del flujo migratorio. Del inicio de los foros para efectuar la consulta pública daría cuenta el 2 de marzo el diputado perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien en esa oportunidad denunció que esas consultas habían comenzado sin que se convocara a las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Fronterizos de la Cámara y pidió la modificación del procedimiento.

En la sesión del 16 de febrero, el PRD se refirió al VIII Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), efectuado en Montevideo del 9 al 12 de febrero. Alejandro Encinas manifestó que los acuerdos del TLC que México firmara con Estados Unidos y Canadá obstruían una efectiva política de diversificación económica, en particular hacia la región del sur del continente. En consecuencia, propuso que los titulares de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores comparecieran ante la Comisión Permanente para explicar “la

política que el gobierno mexicano promueve ante la Asociación Latinoamericana de Integración", propuesta que posteriormente fue rechazada.

Con motivo de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en México, el PRD, por conducto de Jesús Martín del Campo, consideró el 23 de febrero que la mayúscula pobreza que azota a los países latinoamericanos hacía indispensable una modificación del rumbo trazado por las políticas neoliberales. En relación con las consideraciones perredistas, el senador priista Raúl Enrique Carrillo Silva destacó como parte fundamental de las sesiones de la OEA, el concepto de desarrollo integral, que es "el desarrollo económico con equidad social". Manifestó que en México se habían dado importantes avances en materia social, y consideró fundamental para alcanzar las metas trazadas por el desarrollo integral, las políticas de diversificación, la apertura comercial y la generación de empleos productivos. A su vez, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del PPS, consideró que la OEA debería transformarse "en un órgano no continental sino en un órgano regional latinoamericano", debido a los pocos nexos históricos y culturales que unían a Estados Unidos con los países de Latinoamérica.

La diputada priista Julieta Mendivil Blanco dio a conocer en la sesión del 16 de marzo una declaración política suscrita por todas las fracciones, en la que los legisladores manifestaron su preocupación "por la decisión de los Estados Unidos de América de excluir a México de la prohibición para exportar desechos peligrosos desde los Estados Unidos a países que no son miem-



bro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico". Asimismo, se recomendaba al gobierno mexicano participar en la reunión de trabajo convocada por la Comisión Económica para América Latina (CE-

PAL), a fin de "favorecer un acuerdo de los países latinoamericanos y caribeños que prohíba la importación de desechos tóxicos peligrosos con cualquier propósito, incluido el reciclamiento".

Caso Colosio

El 24 de marzo, los miembros de la Comisión Permanente aprobaron dos puntos de acuerdo y una declaración política en torno al asesinato del candidato priista Luis Donald Colosio, acaecido el día anterior en Tijuana, Baja California. En el primero de ellos se solicitaba al Presidente de la República que declarara el 25 de marzo día de duelo nacional, mientras que en el segundo se establecía la conformación de una Comisión Especial que diera seguimiento a las investigaciones sobre la muerte de Colosio. Dicha Comisión quedó integrada por los senadores Ernesto Luque Feregrino y Héctor Terán Terán, y los diputados Gustavo Carvajal Moreno, Alejandro Encinas Rodríguez, Alfredo Castañeda Andrade y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

El 5 de abril, el diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente de la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) de la Permanente, dio cuenta de los trabajos realizados por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donald Colosio. Al respecto, señaló que los miembros de la comisión se habían entrevistado el 25 de marzo con el procurador general de la República, Diego Valadés, para informarle sobre el papel y las atribuciones de la misma. Días más tarde, el 29 de

***S**e conformó una
comisión especial
para dar seguimiento
a las investigaciones
sobre la muerte
de Colosio*



marzo, los legisladores viajaron a Mexicali para entrevistarse con el gobernador de Baja California, el presidente municipal de Tijuana, el procurador general de Justicia de la entidad y el director de Seguridad Pública del ayuntamiento tijuanaense.

Fiscal especial

Tres días después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 26 de marzo los miembros de la Permanente —con la oposición del PRD— aprobaron la licencia presentada por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes García, para fungir, a solicitud del Ejecutivo, como subprocurador federal especial para dirigir las investigaciones en torno a la muerte del candidato priista a la Presidencia de la República.

El senador perredista Porfirio Muñoz Ledo objetó que la elección del Presidente de la República recayera en la persona de Montes García, pues consideró que éste “ha sido un abogado y funcionario al servicio del gobierno y de su partido en los niveles local y federal. No ha sido su principal característica la independencia de criterio respecto del poder público”.

La postura del PRD fue refutada por otros partidos. Gabriel Jiménez Remus, del PAN, expresó que la difícil coyuntura histórica por la que atravesaba el país impedía cuestionar las acciones para esclarecer el asesinato de Luis Donaldo Colosio, e hizo notar que los partidos políticos tendrían la oportunidad de dar seguimiento a las averiguaciones emprendidas por Miguel Montes en su calidad de subprocurador especial. Su postura fue refrendada en turno posterior por su

***S**e aprobó la
licencia al magistrado
de la Suprema Corte
de Justicia, Miguel
Montes, para fungir
como subprocurador
federal en el caso
Colosio*

correligionario Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien hizo ver a los miembros de la Permanente la posibilidad de que la situación de inestabilidad e incertidumbre del país creciera si se cuestionaba la figura del subprocurador especial.

También el legislador priista Miguel González Avelar rechazó las consideraciones perredistas acerca de la posible parcialidad de Miguel Montes y, además de señalar su coincidencia con Jiménez Remus en torno al papel de seguimiento de la Comisión Especial de diputados, expresó que la investigación del atentado debía ser lo más expedita posible. El senador Manuel Díaz Cisneros, del PRI, clarificó más adelante la postura de su fracción: “Creo que los primeros interesados, después de la familia Colosio, en que se esclarezcan esos hechos, somos los militantes del Partido Revolucionario Institucional”. El diputado Gustavo Carvajal Moreno y la senadora Silvia Hernández, ambos priistas, se pronunciaron en términos similares a favor de la licencia de Montes García.

Reforma electoral

En la sesión del 5 de abril, el senador perredista Porfirio Muñoz Ledo expresó la voluntad de su fracción para dar continuidad a la reforma política en el siguiente periodo ordinario, último de la LV Legislatura. Muñoz Ledo enfatizó la importancia de flexibilizar el sistema de coaliciones electorales previsto por la ley, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación y el voto de los mexicanos que residan en el extranjero.

El senador del PRI Carlos Jiménez Macías, ratificó a su vez la convicción

de su partido y de su candidato presidencial, Ernesto Zedillo, de profundizar en el diálogo político. Hizo notar que los acuerdos establecidos por los partidos políticos en el seno del Instituto Federal Electoral eran prueba fehaciente de la vocación democrática del Partido Revolucionario Institucional.

Distinta fue la visión del diputado Israel González Arreguín, del PFCRN, quien criticó los acuerdos que signaran en el IFE el PRI, el PAN y el PRD, al señalar que los conflictos en Chiapas y el atentado contra Luis Donaldo Colosio habían creado un clima político muy complejo, y que éste sólo podría avanzar con un sentido democrático con la participación y el consenso de todos los partidos políticos.

También en pro de que la reforma electoral incluyera a todos los partidos políticos fue la intervención del diputado Jorge Tovar Montañez, del PPS, quien además dijo que la auditoría al padrón electoral debería correr a cargo de alguna institución académica nacional.

Balance del periodo

En la última sesión de la Comisión Permanente, el 15 de abril —día de inicio del último periodo ordinario de sesiones de la LV Legislatura—, los grupos parlamentarios hicieron el acostumbrado balance de las labores del periodo. Los legisladores externaron su satisfacción por la labor realizada, encaminada a fortalecer el papel del Poder Legislativo en la sociedad.

El senador Carlos Jiménez Macías, del PRI, puso énfasis en el esfuerzo realizado por todos los partidos en favor del respeto irrestricto al estado de

Comisión Permanente: sus 37 integrantes

Durante el receso del primero de enero al 15 de abril, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estuvo integrada, como es habitual, por 19 diputados y 18 senadores.

En esta ocasión, correspondió a la Cámara de Diputados presidir los trabajos de la mesa directiva, por lo cual fungió como presidenta la diputada María de los Ángeles Moreno, en tanto que el cargo de vicepresidente lo ocupó el diputado Miguel González Avelar. Fueron secretarios los senadores Gustavo Salinas Íñiguez y José Ramón González León, así como los diputados Efraín Zúñiga Galeana y José Francisco Paoli Bolio.

Los 37 miembros de la Comisión Permanente fueron:

Diputados

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (PPS) | Felipe Calderón Hinojosa (PAN) |
| Juan Moisés Calleja García (PRI) | Juan de Dios Castro Lozano (PAN) |
| Alberto Carrillo Armenta (PFCRN) | Gustavo Carvajal Moreno (PRI) |
| Rodolfo Echeverría Ruiz (PRI) | Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) |
| Javier Garduño Pérez (PRI) | Laura Alicia Garza Galindo (PRI) |
| Miguel González Avelar (PRI) | Gabriel Jiménez Remus (PAN) |
| Adolfo Kunz y Bolaños (PARM) | Jesús Martín del Campo (PRD) |
| María de los Ángeles Moreno Uriegas (PRI) | Francisco José Paoli Bolio (PAN) |
| Juan Ramiro Robledo Ruiz (PRI) | Juan José Rodríguez Prats (PRI) |
| Efraín Zúñiga Galeana (PRI) | |

Senadores

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Miguel Alemán Velasco (PRI) | Roberto Anzar Martínez (PRI) |
| Orlando Arvizu Lara (PRI) | Raúl Enrique Carrillo Silva (PRI) |
| Manuel Díaz Cisneros (PRI) | José Ramón González León (PRI) |
| Gustavo Guerrero Ramos (PRI) | Silvia Hernández Enríquez (PRI) |
| Carlos Jiménez Macías (PRI) | Alger León Moreno (PRI) |
| Humberto Lugo Gil (PRI) | Ernesto Luque Feregrino (PRI) |
| Porfirio Muñoz Ledo (PRD) | Oscar Ramírez Mijares (PRI) |
| Gustavo Salinas Íñiguez (PRI) | Germán Sierra Sánchez (PRI) |
| Héctor Terán Terán (PAN) | Víctor Manuel Tinoco Rubí (PRI) |

derecho y la solución política de los conflictos. Al igual que otros legisladores, Jiménez Macías expresó su beneplácito por el trabajo realizado por el Grupo Plural encargado de dar seguimiento a los acontecimientos en Chiapas. Ponderó el punto de acuerdo en el que las fracciones condenaron los ataques a varios medios de comunicación. Otras de las resoluciones de la Comisión que merecieron los comentarios del senador priista, fueron la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre el asesinato de Colosio, el nom-

bramiento de Miguel Montes García como subprocurador especial, así como el acuerdo para declarar al 25 de marzo día de luto nacional.

“La Comisión Permanente que hoy concluye sus trabajos estará enmarcada por la historia”, declaró el perredista José de Jesús Martín del Campo. En su intervención destacó el papel de la Comisión Plural encargada de atender el conflicto chiapaneco y la aprobación de la Ley de Amnistía. La reforma al artículo 41 constitucional y la firma de los “Acuerdos para la Paz, la Justicia y la Democracia”, fueron motivos de

Los legisladores externaron su satisfacción por la labor realizada, encaminada a fortalecer el papel del Poder Legislativo en la sociedad

satisfacción para la Comisión Permanente, desde el punto de vista del perredista, si bien dijo que para su fracción era indispensable profundizar la reforma electoral en el último periodo ordinario de la LV Legislatura.

A nombre del PFCRN, Israel González Arreguín lamentó que la realización del periodo extraordinario no hubiera sido producto del consenso de todos los partidos políticos, y consideró que los acuerdos realizados entre las tres principales fuerzas del país y el director del IFE dañaban el sistema plural de partidos. Además, consideró que el conflicto de los altos de Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio habían creado un clima de violencia e inseguridad que era necesario solucionar vía la fortificación y credibilidad de las candidaturas presidenciales.

A su vez, el parmista Alfredo Castañeda Andrade criticó las políticas neoliberales, pues consideró que ellas promovían una inequitativa distribución

del ingreso y el trastocamiento de los pilares fundamentales de la Constitución.

Por el PPS, Jorge Tovar Montañez negó las consideraciones tendentes a afirmar que el conflicto chiapaneco era un parteaguas en la historia mexicana. "Los sucesos de Chiapas —dijo— en modo alguno rebasaron ni a los partidos políticos ni a las instituciones. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demostró sensibilidad y agilidad frente a estos lamentables hechos". Al igual que el representante del PFCRN, el diputado pepesista cuestionó el mecanismo mediante el cual se celebraron los acuerdos para la realización del periodo extraordinario. Tovar Montañez finalizó su intervención expresando su reconocimiento a la labor de María de los Ángeles Moreno al frente de la Comisión Permanente.

Concluidas las intervenciones correspondientes al balance del periodo,

Víctor Manuel Tinoco Rubí, senador priista, rindió un último informe sobre los trabajos del Grupo Plural para dar seguimiento al conflicto en Chiapas. Tinoco Rubí hizo notar a los legisladores que la viabilidad de algunas de las soluciones propuestas no dependía directamente del gobierno o de las comunidades indígenas, sino que estaban ligadas a factores externos como el crecimiento demográfico, la depreciación internacional del café y la baja productividad de la tierra chiapaneca.

Al final de la sesión de clausura, la diputada María de los Ángeles Moreno se dirigió a los integrantes de la Permanente. En su intervención, expresó su satisfacción por el clima plural y altamente participativo de las distintas fracciones parlamentarias. "Hemos desempeñado la importante tarea de debatir entre las fuerzas políticas organizadas del país los temas nacionales más relevantes, y hemos mantenido, por tanto, el papel orientador que corresponde al Congreso en una sociedad democrática", aseveró la diputada Moreno, quien fuera presidenta de la mesa directiva durante este periodo de la Comisión Permanente. **LV**



El derecho parlamentario, puntal de la democratización

El derecho legislativo, al que en México se le ha dado hasta ahora la mayor importancia, "es sólo parte del derecho parlamentario". El cabal conocimiento de éste, dotará al parlamentario del siglo XXI de instrumentos que le permitirán desarrollar una labor mucho más amplia y trascendente, lo que redundará en el fortalecimiento del proceso democratizador de nuestro país.

Así lo considera el exdiputado federal Francisco Berlín Valenzuela, autor del libro *Derecho parlamentario*, publicado en fecha reciente por el Fondo de Cultura Económica.

Advierte el especialista —que fue miembro de la LIII Legislatura, durante la cual ocupó la secretaría del Instituto de Investigaciones Legislativas— que la escasez de literatura sobre esta materia es manifiesta. "La falta de interés de los profesores e investigadores de nuestras universidades y, desde luego, de los líderes políticos a quienes incumbe directamente el asunto, explica en parte este fenómeno", dice.

Ese desinterés contrasta con la avidez de conocimientos sobre el tema, plasmada en el hecho de que la primera edición de su libro se agotó en sólo 20 días, a pesar de su carácter eminentemente técnico.

Entrevistado en su biblioteca particular, Berlín Valenzuela, de 54 años de edad, presidente y fundador del Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos, A.C. dice:

"Hemos señalado que en México se ha tenido una visión muy parcial del derecho parlamentario puesto que se le ha enfocado desde el punto de vista del derecho legislativo, el cual no constituye sino una parte del primero. Esta concepción, derivada de la estrechez



con que se han considerado las actividades de los parlamentos en el mundo moderno, es resultado de un viejo vicio decimonónico que considera como los aspectos más importantes de la función parlamentaria, únicamente los que se refieren a la elaboración de las leyes".

A su juicio, también ha influido en la poca atención prestada a esta rama del derecho, el que nos movemos en un sistema presidencialista, porque "hay la creencia de que no estamos obligados a estudiar el parlamento, puesto que no tenemos un sistema parlamentario". Tal "error de apreciación" ha sido aclarado en su texto, toda vez que la institución parlamentaria "debe verse de manera más amplia como el lugar de reunión de los representantes de las distintas tendencias ideológicas que

constituyen en este momento el gran centro del debate de la nación", dice el exlegislador jalapeño.

Romper el círculo vicioso

Rodeado de sus libros, Berlín Valenzuela relata cómo 15 años de labor docente le han permitido concluir que muchos profesores de derecho constitucional tienen todavía una percepción equivocada del contenido tanto del derecho electoral como del parlamentario.

"El hecho de no comprender cabalmente las cuestiones tocadas por ambas disciplinas ha llevado a una indiferencia que se ha traducido en la no publicación de textos referidos a las mismas", lamenta.

Refiere que en otros países como Francia, Italia e Inglaterra, en cambio, gracias a que se ha enfocado el estudio del Parlamento desde una perspectiva más completa, se cuenta con un sinnúmero de obras precursoras del derecho parlamentario en el mundo.

"Lo importante es romper el círculo vicioso, como en su momento lo hicimos con el derecho electoral con la publicación en 1980 de nuestro libro *Derecho electoral como instrumento normativo de la democracia*", destaca el egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, institución en la que también realizó estudios de especialización, maestría y doctorado. "Entonces nos encontramos con que daba la impresión de que tanto en el aspecto electoral como en el parlamentario, México no tenía muchos antecedentes sobre estas actividades, no obstante que desde las Cortes de Cádiz se nombran representantes y se tienen también experiencias parlamentarias".



La importancia creciente del Parlamento como institución fundamental en los regímenes políticos democráticos, ha llevado a que un buen número de estudiosos de la ciencia jurídica se planteen la pertinencia de la autonomía del derecho parlamentario de su tronco originario, que es el derecho constitucional. Esta es una de las vertientes del libro *Derecho parlamentario*, de Francisco Berlín Valenzuela.

Esta obra constituye una valiosa aportación al conocimiento y estudio del Parlamento, en su doble función de asamblea soberana que se integra como producto de la voluntad popular expresada mediante el voto ciudadano —legitimada por ello para producir las normas legales que rigen la convivencia social y depositaria, en consecuencia, del Poder Legislativo— y, por otra parte, como centro de la discusión y debate de los problemas políticos nacionales. Y, como tal, foro de encuentro para la construcción de los consensos plurales y colectivos que posibilitan la solución del conflicto político mediante la creación, precisamente, de un marco jurídico legítimo.

El libro se divide en dos grandes apartados. El primero se dedica a estudiar los aspectos jurídicos generales que abarcan el concepto de derecho parlamentario, su ubicación en la ciencia jurídica, sus

Derecho parlamentario: acercamiento a una institución

fuentes y las características del Parlamento en los regímenes políticos. La segunda parte analiza las funciones parlamentarias, las estructuras bicameral y unicameral, las comisiones, los medios de información del Parlamento y el Parlamento en México. Incluye un apéndice dedicado a comentar las reformas constitucionales en materia de política electoral, aprobadas por la LV Legislatura del Congreso de la Unión, referentes a la nueva composición del Senado con tres senadores de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría política de cada entidad federativa. Asimismo, se refiere a las reformas para el gobierno del Distrito Federal. Por último, la obra aporta una extensa bibliografía relacionada con el tema de su estudio.

Para Berlín Valenzuela, el derecho parlamentario “es el conjunto de normas que crean, establecen, impulsan, garantizan y rigen las acciones de los parlamentos, las interrelaciones sociopolíticas que mantienen con los otros poderes del Estado, los partidos políticos, las instancias de la sociedad civil y los individuos, así como con los valores y principios que animan su existencia institucional y lo motivan a procurar su realización, por haber sido instituidos por el pueblo como expresión de su querer político”.

El derecho parlamentario, asevera el autor, no logra aún pleno reconocimiento a su autonomía. Berlín Valenzuela aboga por otorgarle esa autonomía y deplora que “en muchos países se le

Sin embargo, dice Berlín Valenzuela, es hasta casi 190 años después que se está tratando de sistematizar los estudios de derecho electoral y de derecho parlamentario. “En tan sólo 14 años, el derecho electoral ha tenido un gran desarrollo, lo que ha permitido impulsar el avance democrático del país, y creemos que en materia parlamentaria va a suceder lo mismo”.

Hasta ahora, advierte, la escasez de literatura dedicada al derecho parlamentario ha tenido importantes efectos negativos en la vida académica. En primer lugar, por no haber permitido la formación de especialistas en esta problemática. El estudio de esta disciplina, por ejemplo, apenas fue introducido el año pasado en la Facultad de

Derecho. No obstante, “hay muchas universidades en provincia donde esta materia aún no forma parte de sus programas”.

—¿Qué tanto le sirvió su experiencia como parlamentario para escribir su nuevo libro?

—La posibilidad de participar como miembro de la LIII Legislatura me brindó una rica experiencia para ver en la práctica cómo se desenvuelve la vida parlamentaria en México. Al mismo tiempo, el ser secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas me permitió adquirir un conocimiento más preciso de los temas propios del derecho parlamentario.

“Desde este Instituto, proyectamos una interesante actividad como fue la

realización del primer curso de derecho parlamentario que ha habido en México, con la participación de visitantes muy distinguidos que reunían la doble función de ser destacados académicos en su país, pero también parlamentarios”.

Recuerda que en esa ocasión se contó con la presencia de representantes de España, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y México. “Cada uno de los ponentes desarrolló un tema de un programa que previamente habíamos elaborado, pensando que pudiera ser el inicio de los estudios sistemáticos del derecho parlamentario en México”.

Producto de esta experiencia fue el libro *Derecho parlamentario iberoame-*

N

o puede haber teoría
parlamentaria si no hay práctica
parlamentaria

continúe relegando a un segundo plano y se haga caso omiso de la trascendencia que posee”.

La segunda parte del libro es un exhaustivo estudio de las funciones parlamentarias a partir de la doctrina de la división de poderes. Establece la diferencia conceptual entre Asamblea y Parlamento. Precisa que aquella tiene como función principal elaborar leyes, en tanto que éste es un órgano político colegiado, de carácter representativo en el que recaen las funciones más elevadas de la dirección del Estado y quien además de la función creadora de leyes, ejerce —entre otras— la de controlar los actos de los gobernantes.

A las funciones clásicas del Parlamento, que en su origen fueron la representativa y presupuestaria, hoy es preciso añadirles las de deliberación, financieras, legislativas, de control, políticas, de inspección, jurisdiccionales, de indagación, de comunicación y educativas. A cada una de estas funciones, el autor le dedica detallados y fundados comentarios, y en ocasiones señala la insuficiencia en el cumplimiento material de determinada función. De esta manera, expresa que la identificación política de la mayoría cameral con el titular del Ejecutivo tiene como una de sus consecuencias que la “función de control resulta tan reducida que su eficacia es cuestionada y en la práctica considerada como meramente teórica”.

El capítulo dedicado a las estructuras bicameral y unicameral presenta un extenso estudio comparativo entre ambas formas parlamentarias. Expone también la manera como se integran los parlamentos de diversos países. En el ámbito de procedimientos parlamentarios

se reseñan las comisiones, los grupos, la administración y las sanciones disciplinarias. El tema de los medios de información parlamentaria analiza las preguntas parlamentarias en sus diferentes variantes, así como las peticiones de información que el Parlamento tiene la obligación de hacer a los representantes del Ejecutivo.

El apartado sobre el Parlamento en México es, en cierta forma, una síntesis aplicada de manera específica al Congreso federal de nuestro país. Estudia las funciones y facultades de las cámaras de diputados y de senadores, analiza las sesiones de ambas cámaras como Congreso de la Unión, examina el carácter de la Comisión Permanente, la organización interna de uno y otro cuerpo, sus funciones, las prerrogativas de cada una de ellas y las de sus miembros, las comisiones parlamentarias y el financiamiento de las cámaras.

Derecho parlamentario es una oportuna y valiosa contribución al estudio de este cuerpo de representación política de tanta importancia para el desarrollo democrático nacional. El Congreso en México, creemos, tiene la urgente necesidad de plantearse nuevos horizontes en el ejercicio de sus funciones y facultades para contribuir de manera más eficaz a la conducción del Estado y del gobierno de la República. Por eso, obras como la que se comenta serán siempre bienvenidas, ya que constituyen aportes al conocimiento de nuestras instituciones políticas fundamentales.

Francisco Berlín Valenzuela, *Derecho parlamentario*, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

ricano, publicado por Editorial Porrúa en 1983.

“Toda experiencia es fundamental para el desarrollo de los enfoques teóricos dentro de la ciencia política y de las disciplinas que le son afines, porque permite comprender hasta dónde hay que ir reencauzando el punto de vista teórico de la práctica parlamentaria. Como bien se ha expresado, no puede haber teoría parlamentaria si no hay práctica parlamentaria, y en ese campo México tiene mucho que aportar”.

Francisco Berlín Valenzuela augura: “es indudable que si nuestro país está inserto en un proceso de democratización que se ha venido logrando en forma gradual, todo lo que coadyuve al

conocimiento de las instituciones democráticas habrá de servir para alcanzar esta meta más pronto. De tal manera que si tanto el proceso electoral como el parlamentario pertenecen a las instituciones propias de la democracia —puesto que sólo florecen donde hay un estilo de vida democrático—, el avance en esa dirección habrá de ser mucho más rápido y en mejores condiciones”.

De ahí, dice, que se debería tratar de que las autoridades y los partidos políticos divulguen estos temas, pero no sólo entre aquellos que van a formar parte de los parlamentos, sino también entre el pueblo, ya que éste es el destinatario de las acciones que realiza un parlamento, para que conozca

con claridad qué puede esperar de los parlamentarios y del parlamento, y qué no debe esperar de ellos.

Debido al poco conocimiento que se tiene del derecho parlamentario, agrega, en ocasiones los grupos políticos quisieran que la institución fuera más allá de la funciones que tiene asignadas, o que resolviera problemas que corresponden al área ejecutiva. Es importante que se divulguen estos temas. “Por eso la función de comunicación debe ser de ida y vuelta: que se conozcan todas las actividades del parlamento, pero que también se recoja el sentir del pueblo en torno al mismo. En la medida en que esto ocurra, la democracia seguramente saldrá beneficiada”.

LV

Diputados en campaña

Es tiempo de efervescencia política y decenas de diputados federales de los diversos grupos parlamentarios han sido postulados por sus partidos para cargos de elección popular. En especial, varios integrantes de la Cámara se encuentran ya en campaña para ganar el voto ciudadano que los lleve al Senado a partir del primero de noviembre.

Los diputados que aspiran a un escaño en el Senado de la República son, por **partido político** y en orden alfabético:

Por el Partido Revolucionario Institucional

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Hugo Andrés Araujo de la Torre | Tamaulipas | José Manuel Medellín Milán | San Luis Potosí |
| Héctor Argüello López | Tabasco | Juan Millán Lizátraga | Sinaloa |
| Rodolfo Becerril Straffon | Morelos | Melquiades Morales Flores | Puebla |
| Porfirio Camarena Castro | Guerrero | María de los Ángeles Moreno Uriegas | Distrito Federal |
| Eloy Cantú Segovia | Nuevo León | Fernando Ortiz Arana | Querétaro |
| Gustavo Carvajal Moreno | Veracruz | Laura Pavón Jaramillo | Estado de México |
| Francisco José Dávila Rodríguez | Coahuila | Juan Ramiro Robledo Ruiz | San Luis Potosí |
| Pedro De León Sánchez | Zacatecas | Amador Rodríguez Lozano | Baja California |
| José de Jesús González Gortázar | Jalisco | Carlos Antonio Romero Deschamps | Hidalgo |
| José Guadarrama Márquez | Hidalgo | Layda Elena Sansores San Román | Campeche |
| Guillermo Hopkins Gámez | Sonora | José Antonio Valdivia | Baja California Sur |
| Graciela Larios Rivas | Colima | Mario Vargas Aguiar | Baja California Sur |

Por el Partido de la Revolución Democrática

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Cristóbal Arias Solís | Michoacán | José Camilo Valenzuela | Sinaloa |
| Elot Vásquez López | Oaxaca | Elpidio Tovar de la Cruz | Tamaulipas |



Además, tres diputados que fueran del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, han sido postulados como candidatos al Senado de la República por diferentes partidos:

Yolanda Elizondo Maltos es ahora candidata del PRD para ocupar un escaño por el estado de Coahuila.

Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, a su vez, es candidato a senador del Distrito Federal, postulado por la Unión Nacional Opositora.

En tanto, Leónides Samuel Moreno Santillán ha sido incluido en las listas de candidatos del PFCRN a la Cámara alta, por el estado de Hidalgo.

Por el Partido Popular Socialista

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cuauhtémoc Amezcua Dromundo | Tlaxcala |
| Juan Gualberto Campos Vega | Quintana Roo |
| Gabriela Guerrero Oliveros | Distrito Federal |
| Francisco Hernández Juárez | Oaxaca |
| Heli Herrera Hernández | Veracruz |
| Héctor Morquecho Rivera | Coahuila |
| Martin Tavera Urióstegui | Guerrero |

Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

| | |
|------------------------------------|------------|
| Servando Antonio Hernández Camacho | Tamaulipas |
|------------------------------------|------------|



JOSE NUÑEZ / CUARTOSURJO

Hacia la Asamblea

Quince diputados de la LV Legislatura aspiran a un lugar en la III Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Ellos son:

Por el PRI

Everardo Gámiz Fernández
Javier Garduño Pérez
José Antonio González Fernández
Manuel Jiménez Guzmán
Julio Méndez Alemán
Alberto Nava Salgado
Filiberto Paniagua García
Silvia Pinal Hidalgo
Amado Treviño Abatte
Paloma Villaseñor Vargas

Por el PAN

Salvador Abascal Carranza
Gonzalo Altamirano Dimas
Fauzi Hamdan Amad
Victor Martín Orduña Muñoz

Por el PPS

Juan Jacinto Cárdenas García

Por el Partido Acción Nacional

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Benigno Aladro Fernández | Hidalgo |
| María del Carmen Bolado del Real | Tamaulipas |
| Luis Felipe Bravo Mena | Estado de México |
| Alfredo Castillo Colmenares | Oaxaca |
| Juan de Dios Castro Lozano | Durango |
| José Luis Del Valle Adame | Morelos |
| Marco Antonio García Toro | Colima |
| Luis González Pintor | Tlaxcala |
| Juan Huesca Pérez | Tamaulipas |
| Enrique Gabriel Jiménez Remus | Jalisco |
| Ricardo Alfredo Ling Altamirano | Guanajuato |
| Pedro Macías de Lara | Baja California Sur |
| Manuel Rivera del Campo | San Luis Potosí |
| Luis Alberto Rejón Peraza | Yucatán |
| Francisco Javier Salazar Sáenz | San Luis Potosí |
| Jorge Sánchez Muñoz | Aguascalientes |
| Roderico Tapia Ruiz | Sonora |
| Arturo Torres del Valle | Guanajuato |
| Diego Heberto Zavala Pérez | Distrito Federal |
| Jorge Zermeño Infante | Coahuila |

Por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Luisa Álvarez Cervantes | Tamaulipas |
| Rodolfo Barbosa Rodríguez | Michoacán |
| Félix Bautista Matías | Guerrero |
| José de Jesús Berrospe Díaz | Jalisco |
| Odilón Cantú Domínguez | Estado de México |
| Abundio Ramírez Vázquez | Coahuila |

Luis A. Beauregard R.

El ciclo de la LV Legislatura empieza a languidecer y, como sucede con cualquier final, es hora de preguntarse sobre el resultado de las actividades realizadas por esta representación popular, que tuvo a su cargo, entre otras cosas, la modificación del marco legal de materias tan trascendentales para el desarrollo del país y tan arraigadas en la historia nacional, como la cuestión agraria, la relación del Estado con las iglesias, la educación pública, la política monetaria y los procesos electorales. Es claro que la mayor parte de las reformas emprendidas tienen aún un largo trecho por andar para que rindan los frutos esperados, pero no será ocioso revisar la operatividad y la eficacia de ese nuevo marco jurídico en los ámbitos a los que se dirigieron esas normas para evaluar su aporte a la modernización nacional.

Si el balance de la producción legislativa es un importante ejercicio de reflexión jurídica, no lo es menos el análisis político sobre el funcionamiento del conjunto de la institución parlamentaria, en su doble vertiente de parte del Estado y como depositaria de la representación popular. Este ejercicio no debe soslayarse si se quiere un Congreso funcional con las nuevas realidades de este país, que se asume en proceso de modernización, que se acepta plural, se afirma democrático y cuyos casi 90 millones de habitantes conviven en amplias franjas de tiempos históricos diferentes.

Desde la curul se observa que la reforma del Estado será incompleta si no va acompañada de una revaloración del Parlamento mexicano. Cualquiera que sea el resultado de los comicios del próximo 21 de agosto, que con seguridad añadirán a la agenda nacional nuevos asuntos de interés político, uno de los puntos centrales de tal agenda será sin duda la reforma del Poder Legislativo. Esa responsabilidad deberá recaer, desde luego, en la próxima legislatura, la cual deberá retomar, por cierto, los primeros pasos dados en ese sentido por esta representación popular, en trance ya de concluir el periodo constitucional para el que fue electa.

Hay mucho que hacer para revalorar el Congreso mexicano. Las dimensiones de la reforma parlamentaria abarcan tanto el fondo como la forma de la representación popular, sus funciones, facultades, relaciones con el Ejecutivo y con la sociedad, por mencionar las áreas centrales de este proyecto indispensable en el rediseño del sistema político mexicano. La tarea es de los políticos, pero también de la sociedad a la que el Congreso aspira a representar.

Mientras tanto, es posible hacer un somero recuento del destino político de una buena porción de los diputados que llegaron a la Cámara el primero de noviembre de 1991. Este recuento, hecho a vuelo de pluma *Desde la curul*, sujeto a una ulterior y más rigurosa verificación, arroja interesantes datos, como los siguientes:

Tres diputados, Cecilia Soto, Diego Fernández de Cevallos y Pablo Emilio Madero, son candidatos a la Presidencia de la República; tres son gobernadores y

tres son subsecretarios de Estado; cuatro ocupan altos cargos en el gobierno federal y ocho tienen puestos de primer rango en los gobiernos estatales. Uno es embajador, seis son alcaldes, 65 son candidatos al Senado y 15 a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Otros 15 diputados abandonaron el partido que los trajo a la Cámara para declararse independientes y tres se pasaron de un partido a otro; en tanto, una de las fracciones parlamentarias prácticamente se desintegró, ya que de 15 miembros que tenía al inicio de la Legislatura, sólo cinco permanecen en ella.

Todos estos cambios son normales en un cuerpo tan dinámico como es la Cámara de Diputados; sin embargo, creemos que siempre son útiles los análisis comparativos, sobre todo el recuento de las actividades tanto del Congreso como de sus integrantes, para ir documentando la historia legislativa mexicana, la cual está aún por escribirse.

Todavía está por verse la suerte que correrán los diputados que son candidatos a senadores, aunque es de esperarse que la mayor parte de ellos lleguen, ya sea por fórmula de mayoría o a través de la primera minoría, lo que hará que una buena parte del futuro Senado se integre con miembros de la hornada camarlal procedentes de esta LV Legislatura. Ojalá que la experiencia aquí adquirida por esos futuros senadores, les sea útil para llevar aires de renovación que tanto urgen a ese cuerpo parlamentario.

En el Senado está todavía, por cierto, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso, enviada por su colegisladora hace ya más de un año. Es deseable que los señores senadores se decidan a sacarla de la congeladora —a la que inexplicablemente la metieron— antes de que termine el último periodo ordinario de sesiones. De aprobarse esas modificaciones, la próxima legislatura podría iniciar sus trabajos con una norma actualizada y congruente con las necesidades que plantea el quehacer de un Parlamento moderno. Complemento necesario de la Ley Orgánica es el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, cuya cincuentenaria vigencia lo hace anacrónico para regular con eficacia a unas cámaras tan numerosas y plurales como las que hoy conforman el Poder Legislativo federal.

Desde la curul se mira venir tan inexorable como vertiginosamente el 21 de agosto y, con él, las elecciones más competidas y observadas de cuantas se hayan realizado en nuestro país, inaugurando un nuevo sistema electoral y, quién no dice que también, un nuevo sistema político. Encuestas y escenarios, conjeturas e hipótesis, son cosas de todos los días en un horizonte político sobrecargado de acontecimientos inéditos que le confieren singularidad al proceso de agosto de 1994. Pero la apuesta en la que debemos empeñarnos todos los mexicanos es que tengamos un proceso electoral limpio, creíble y práctico, que constituya un significativo avance para la democracia de la nación. **LV**

registro

• **DIPLOMACIA.** Un año de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores se resume en los volúmenes IV y V de *Diplomacia Parlamentaria*. En el prólogo al primero de ellos, la diputada María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sintetiza el espíritu de las labores de esta Comisión, presidida por el diputado Rodolfo Becerril: "que la diplomacia parlamentaria sea eficaz, dinámica y creativa esté en la voluntad de todos los que

creemos en la fuerza e importancia de avanzada de los sistemas legislativos mundiales, bastio-



nes de democracia en el mundo contemporáneo y más aún, en los resultados que la labor conjunta puede propiciar".

El volumen V de *Diplomacia Parlamentaria* presenta un resumen de las principales actividades de la LV Legislatura en este rubro: 84 visitas de delegaciones de otros países al Congreso mexicano, 115 visitas parlamentarias de legisladores mexicanos a otros países, 41 declaraciones de la Cámara de Diputados en materia de política exterior y ocho reuniones interparlamentarias.

• **CULTURAL.** Recuento de las políticas culturales y educativas del Estado en los últimos cinco años, es la publicación *La cultura en México*, que acaba de elaborar la Comisión de Cultura y que se presentó el primero de junio en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, con la asistencia del secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador Osuna. El capítulo de "Cultura y arte" del Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994; el discurso del titular del Ejecutivo con motivo de la instalación del

Diputados que se incorporaron al trabajo legislativo

| Nombre | Entidad | Distrito | Partido | Fecha | Sustituyó a |
|---------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| René Silvestre Benítez Treviño | 5a. Circunscripción | | PRI | 10/XII/93 | Javier Ignacio Muñoz y Domínguez |
| Alberto Loyola y Pérez | 1a. Circunscripción | | PAN | 21/XII/93 | Diego Fernández de Cevallos |
| Rafael Alberto Castilla Peniche | Yucatán | I | PAN | 23/III/94 | Luis Humberto Correa Mena |
| Manuel Santos Pérez | Veracruz | XII | PRI | 23/III/94 | Fidel Herrera Beltrán |
| Luz Ma. Lucero González | 4a. Circunscripción | | Indep. | 23/III/94 | Cecilia Soto González |
| Javier Villaseñor Maytorena | Sonora | III | PRI | 23/III/94 | Julián Luzanilla Contreras |
| Rafael Guerrero | 2a. Circunscripción | | PAN | 4/V/94 | Rubén Raymundo Gómez Ramírez |
| Guillermo Sánchez Arellano | Jalisco | I | PRI | 10/V/94 | Jorge Leobardo Lepe García |
| J. Concepción Salinas Vázquez | Distrito Federal | XXIX | PRI | 18/V/94 | Juan Moisés Calleja García |
| José Concepción Solano González | Distrito Federal | XXX | PRI | 18/V/94 | Benjamín González Roaro |
| Mario Tránsito Chan y Chan | 3a. Circunscripción | | PRI | 18/V/94 | Blanca Ruth Esponda Espinosa |
| Rosalío Mendoza Cisneros | Oaxaca | VII | PRI | 24/V/94 | Irma A. Piñeyro Arias |
| Juan Hernández Villanueva | Baja California Sur | II | PRI | 1/VI/94 | Mario Vargas Aguiar |
| Manuel Gustavo Terrazo Ramírez | Distrito Federal | XXXII | PRI | 1/VI/94 | Rodolfo Echeverría Ruiz |
| Armando Zamora Canizales | Sinaloa | IV | PRI | 7/VI/94 | Juan Sigfrido Millán Lizárraga |
| Elizabeth Rodríguez de Casas | Puebla | VII | PRI | 7/VI/94 | Melquiades Morales Flores |
| Felipe Hernández Castro | Jalisco | XX | PRI | 8/VI/94 | Jesús Enrique Ramos Flores |
| Mario Cardona Mendoza | Michoacán | VII | PRI | 15/VI/94 | Virgilio Hermán Pineda Arellano |
| Ma. de Lourdes Bolívar Gorra | Tabasco | II | PRI | 15/VI/94 | Héctor Argüello López |

COMISIONES. Debido a que varios diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones y algunos han dejado sus cargos en presidencias y secretarías de comisiones, se han designado otros legisladores para sustituirlos en sus cargos. De esta manera, se ha nombrado a los siguientes diputados en las comisiones y los cargos que enseguida se mencionan:

| Diputado | Comisión | Cargo | Sustituye a |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Mario del Valle Fernández | Comisión especial para dar seguimiento a los acontecimientos ocurridos el 23 de marzo en la ciudad de Tijuana | | Gustavo Carvajal Moreno |
| Antonio García Sánchez | Comisión especial para dar seguimiento a los acontecimientos en el estado de Chiapas | | Juan Ramiro Robledo Ruiz |
| Ildefonso Zorrilla Cuevas | Cultura | Presidente | Luis Dantón Rodríguez Jaime |
| Jorge Uscanga Escobar | Población y Desarrollo | Presidente | Blanca Ruth Esponda Espinosa |
| Luis Dantón Rodríguez Jaime | Relaciones Exteriores | Presidente | Rodolfo Becerril Traffon |
| Alfonso Godínez López | Trabajo y Previsión Social | Presidente | Juan Moisés Calleja García |
| Oscar René Nieto Burciaga | Asentamientos Humanos y Obras Públicas | Secretario | Jorge Leobardo Lepe García |
| Juan Carlos Alva Calderón | Asuntos Hidráulicos | Secretario | José Guadarrama Márquez |
| Cándido Coheto Martínez | Asuntos Indígenas | Secretario | Irma Piñeyro Arias |
| Gabriela Avelar Villegas | Derechos Humanos | Secretaria | Juan Ramiro Robledo Ruiz |
| Benjamín Avila Guzmán | Fomento Cooperativo | Secretario | Alfonso Godínez López |
| Armando Romero Rosales | Población y Desarrollo | Secretario | Jorge Uscanga Escobar |
| Tomás Osorio Avilés | Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias | Secretario | Alejandro Ontiveros Gómez |
| Manuel Díaz Infante | Gran Comisión | Secretario | Rodolfo Becerril Traffon |

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en diciembre de 1988, y el Programa Nacional de Cultura 1990-1994, son algunos de los documentos incluidos en este compendio, en el que destaca un resumen de la legislación vigente sobre la materia, denominado "Los 365 ordenamientos de la política educativa y cultural", que incluye antecedentes de las disposiciones legales y su área de influencia.

• **PRESIDENTE.** A partir del cuatro de marzo, la Comisión de Asuntos Hidráulicos es presidida por el tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, quien desde el inicio de la LV Legislatura se ha desempeñado como coordinador de la diputación priista de su estado.

• **ECOLÓGICAS.** De los cambios climáticos a la consultoría



ambiental, pasando por la protección a la ballena gris, el Día Mundial del Medio Ambiente, las opiniones del grupo Greenpeace y las visitas a otras latitudes, son algunos de los temas que se abordan en el informe que sobre sus actividades durante 1993 elaboró la Comisión de

Ecología y Medio Ambiente, que preside el veracruzano Juan Antonio Nemi Dib.

• **ELECTORAL.** Circulan ya los primeros seis números de la serie *Cuadernos electorales*, con trabajos, ensayos, artículos y capítulos de libros que tratan sobre el proceso electoral y que se editarán en forma periódica a manera de cuadernos. Los publica la Secretaría de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a cargo del diputado bajacaliforniano Amador Rodríguez Lozano. Pese a ser un elemento fundamental de la democracia, el proceso electoral ha sido estudiado sólo por unos cuantos especialistas, por lo que los *Cuadernos electorales* pueden constituir un aporte para la formación de una necesaria cultura electoral.

• **PREMIO.** Mención honorífica en el Premio 1993 del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), obtuvo la maestra en ciencia política Luisa Béjar, integrante del equipo que elabora *Crónica Legislativa* desde sus inicios. El objetivo del Premio es estimular la investigación en el campo de la administración pública y el jurado estuvo integrado por José Chanes Nieto, Sergio García Ramírez, Rafael Segovia y Fernando Solana Morales, además de los miembros del Consejo de Honor y el presidente del Consejo Directivo del INAP. La maestra Béjar, acuciosa investigadora y analista que se ha especializado en el tema de Poder Legislativo en México, cursó con su tesis de doctorado, titulada "Las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura". **LV**

PERFILES *Parlamentarios*

María Esther de Jesús SCHERMAN LEAÑO



CÁMARA DE DIPUTADOS

Es licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara, ciudad donde nació el 5 de enero de 1957. Perteneció al PRI desde 1979, donde ha desempeñado los cargos de presidenta de la sección 64 del XIII distrito de Jalisco; delegada del Comité Directivo Estatal en Acatic, Jalisco; secretaria de Organización del XIII comité distrital; secretaria de Promoción y Gestoría del CDE de Jalisco; en ese estado, delegada del CDE en Zapotlanejo; subsecretaria de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional; comisionada suplente del CEN ante la Comisión Federal Electoral; secretaria adjunta a la presidencia del CEN; consejera de la mayoría priista de la Cámara de Senadores ante el órgano superior del Instituto Federal Electoral y coordinadora del movimiento de respuesta de la Escuela Nacional de Cuadros del Comité Ejecutivo Nacional. También fue secretaria de Acción Femenil y Social de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, secretaria de Acción Femenil en Guadalajara de la Confederación de Jóvenes Mexicanos y secretaria de Consulta Popular del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Fue senadora por Jalisco en la LIV Legislatura y es diputada federal por segunda vez —lo fue en la LIII Legislatura—, por el XVI distrito electoral con cabecera en Guadalajara. Preside la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Además, pertenece a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Hacienda y Crédito Público, y al Comité de Administración.

Juan Luis CALDERÓN HINOJOSA



CÁMARA DE DIPUTADOS

Ingeniero civil, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nació en Morelia, Michoacán, el 23 de junio de 1961. Fue regidor del Ayuntamiento de Morelia entre 1987 y 1989. Milita en el Partido Acción Nacional desde 1979, donde ha desempeñado los cargos de secretario juvenil y secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Michoacán. Antes, se ocupó como docente de preparatoria y subgerente de la empresa Prefabricados de Concreto. Es diputado federal por la IV circunscripción plurinominal, integrante de las comisiones de Población y Desarrollo; Vivienda; Comunicaciones y Transportes, y secretario de la Comisión de Asuntos Hidráulicos.

Guillermo FLORES VELASCO



CÁMARA DE DIPUTADOS

Ingeniero electrónico por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1950. Fue miembro de la Comisión Organizadora Estatal del Partido de la Revolución Democrática, al que pertenece desde su fundación en 1989, en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo del Distrito Federal. Perteneció al Movimiento Revolucionario del Pueblo y al Comité Ejecutivo del Partido Mexicano Socialista en el DF. Fue coordinador de la Dirección de Damificados de la Ciudad de México y asesor del Despacho de Orientación y Asesoría Legal. Profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y coordinador del Instituto de Comunicación y Educación Popular, es autor del un libro de matemáticas publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de los libros *Cibernética y Computación I y II*, editados por el CCH. En la LV Legislatura es diputado federal por la I circunscripción plurinominal, es secretario de la Comisión de Salud e integrante de las comisiones de Distrito Federal, Energéticos y Comercio.

PERFILES *Parlamentarios*

Pablo PAVÓN VINALES



CÁMARA DE DIPUTADOS

De Minatitlán, Veracruz, donde nació el 27 de agosto de 1945. Realizó estudios de vocacional y en el Partido Revolucionario Institucional ha sido en dos ocasiones presidente del Comité Municipal en su ciudad natal. Fue también secretario del interior, presidente del Consejo Local de Veracruz y presidente del Consejo General de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es diputado federal por el XIV distrito de Veracruz con cabecera en Minatitlán y miembro de las comisiones de Energéticos; Trabajo y Previsión Social; Ecología y Medio Ambiente, y Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio.

Eloí VÁSQUEZ LÓPEZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Cursó la licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y posteriormente una maestría en planificación de desarrollo regional en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Nació en esa ciudad el 31 de octubre de 1955 y pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 1989, donde ha sido miembro del Consejo Nacional. En el Partido Socialista Unificado de México fue secretario general del Comité Estatal de Oaxaca y en el Partido Mexicano Socialista, secretario general del Comité Estatal de la misma entidad. Fue asesor de los ayuntamientos de Magdalena Ocotlán, Coatecas Altas y Tlacolula, Oaxaca; director de Comunicación Social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca; gerente de publicidad del periódico *El Sol de Oaxaca*; director de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma Benito Juárez y miembro del Consejo de dicha Universidad. En la LV Legislatura es diputado federal por la V circunscripción, secretario ejecutivo de la Comisión de Reconstrucción del Palacio Legislativo y miembro de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y Radio, Televisión y Cinematografía.

Jesús Madrazo MARTÍNEZ DE ESCOBAR



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en Huimanguillo, Tabasco, el 26 de noviembre de 1940, lugar de donde llegaría a ser presidente municipal, docente en la Escuela Preparatoria y presidente de la Asociación de Profesionistas y Técnicos. Estudió licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Partido Revolucionario Institucional, al que ingresó hace 30 años, fue director del Consejo de Estudios Políticos, Económicos y Sociales en Huimanguillo, y a nivel estatal, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, secretario general del Comité Directivo Estatal, secretario de Acción Política y Asuntos Legislativos y presidente de la Comisión de Estudios en la XIV Asamblea Nacional en Tabasco. En el mismo estado fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y secretario particular del gobernador. Es diputado federal por el IV distrito de Tabasco con cabecera en Comalcalco, secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos e integrante de las Comisiones de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Marina y Justicia.

María Cristina HERMOSILLO RAMÍREZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

En el Partido Acción Nacional, al cual ingresó en 1982, ha desempeñado los cargos de secretaria municipal de Promoción Política de la Mujer en Celaya, Guanajuato; secretaria general del Comité Directivo Municipal de esa misma ciudad; secretaria estatal de promoción política de la mujer en Guanajuato; consejera estatal y consejera nacional; secretaria de Capacitación en Guanajuato y oficial mayor de la Casa del Funcionario del PAN en Celaya. Fue secretaria de Administración y Patrimonio Sindical de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Contadora privada egresada del Colegio Progreso, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de julio de 1950, fue diputada local en Guanajuato de 1985 a 1988. Es diputada federal por la II circunscripción plurinominal y pertenece a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos e Información, Gestión y Quejas.

PERFILES *Parlamentarios*

Gustavo GÁMEZ PÉREZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Milita en el PRI desde 1970, donde ha desempeñado los cargos de secretario de Prensa y Propaganda del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional en diversos estados, secretario general del CEN del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria del Sector Popular y secretario de organización del Comité Directivo Estatal de Veracruz. Fue también secretario de organización de la Federación de Organizaciones Populares, coordinador de Prensa y Relaciones Públicas en el Distrito Federal y en el gobierno del estado de Veracruz, así como director del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en la Delegación Cuauhtémoc, donde también fue jefe de Prensa y Relaciones Públicas. Nació en Playa Vicente, Veracruz, el 14 de marzo de 1951 y estudió la vocacional en el Instituto Tecnológico Regional de Orizaba. Diputado federal por el I distrito de Veracruz con cabecera en Tantoyuca, forma parte de las comisiones de Información, Gestoría y Quejas; Turismo; Radio, Televisión y Cinematografía; Pesca y Marina.

Félix BAUTISTA MATÍAS



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en Cuetzala del Progreso, Guerrero, el 31 de mayo de 1941. Maestro egresado de la Escuela Normal Superior, ingresó al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en 1990, en el que ha sido comisario político y delegado en Colima, así como presidente estatal en Guerrero. Es diputado federal por la quinta circunscripción plurinominal y miembro de las comisiones de Justicia, Turismo y Marina.

Alejandro ONTIVEROS GÓMEZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Licenciado en economía por la Universidad de Guadalajara, nació en Tepatlitlán de Morelos, Jalisco, el 8 de diciembre de 1953. Como integrante del Partido Revolucionario Institucional, ha tenido a su cargo la coordinación de varias campañas políticas en Jalisco; fue subdelegado del CEN en Quintana Roo, secretario general del Comité Municipal, asesor político del oficial mayor del CEN, secretario de Organización y secretario general del CDE de Jalisco, además de subsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, donde fungió también como coordinador general. Fue subsecretario general para Asuntos de Política Interior del gobierno del estado de Jalisco y en la Secretaría de Gobernación, jefe de Información de la Dirección General de Investigaciones Políticas y asesor político del secretario de Gobernación. Diputado federal por segunda vez —lo fue ya en la LIII Legislatura—, por el X distrito de Jalisco, con cabecera en Ciudad Guzmán, es secretario de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias e integrante de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y Asuntos Hidráulicos.

José Antonio ALBA GALVÁN



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7 de julio de 1962. Estudió en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el área de su profesión ha sido secretario de la Asociación Dental del Colegio Médico. Como miembro del PAN, partido al que pertenece desde 1984, ha sido secretario del Comité Municipal de Piedras Negras, Coahuila, miembro del Comité Directivo Estatal y del Consejo Estatal de Coahuila. Diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal, pertenece a las comisiones de Asuntos Fronterizos y Deporte.

PERFILES *Parlamentarios*

José RAMOS GONZÁLEZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Pertenece al Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional desde 1991. Antes, militó en el Partido Revolucionario Institucional, donde desempeñó los cargos de secretario del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria de Ensenada y secretario general del Comité Ejecutivo Municipal en la misma ciudad. A nivel estatal, fue secretario de Vanguardia Juvenil Agrarista y secretario de Acción Sindical y de Organización en Baja California, por parte de la Confederación Nacional Campesina. Supervisor de cosechas en Ensenada por parte del Banco Nacional de Crédito Rural; director del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud y coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en Baja California. Técnico analista por el Instituto de Mecanización y Computación, nació en Ensenada, Baja California, el 16 de septiembre de 1955. Diputado federal por la cuarta circunscripción, es secretario de la Comisión de Reforma Agraria y pertenece también a las comisiones de Asuntos Fronterizos y Pesca.

Elpidio TOVAR DE LA CRUZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Maestro normalista por la Escuela de Ciencias Sociales de la Normal Superior de Tamaulipas, nació en Los Ramones, Nuevo León, el 6 de abril de 1949. Perteneció al Partido de la Revolución Democrática desde su nacimiento en 1989 y en él fungió como presidente del Comité Estatal en Tamaulipas. Antes fue, sucesivamente, en la misma entidad, secretario general del Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano (PCM), secretario general del Comité Estatal del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y presidente del Comité Estatal del Partido Mexicano Socialista (PMS). De 1984 a 1986 fue diputado local en Tamaulipas. Diputado federal por la III circunscripción plurinominal, es secretario de la Comisión de Asuntos Hidráulicos y miembro de las comisiones de Salud, Educación y Asuntos Fronterizos.

Rodrigo Alejandro NIETO ENRÍQUEZ



CÁMARA DE DIPUTADOS

Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, nació en el Distrito Federal el 21 de agosto de 1950. Posee dos maestrías, una en planeación urbana y regional, y otra en economía, por la University of Southern California, de Estados Unidos. En la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, fue asesor técnico del subsecretario de Asentamientos Humanos y coordinador de la *Revista de Ciencias Urbanas*. Se ha desempeñado también como asesor externo de la Coordinación de Proyectos de Desarrollo de la Presidencia de la República y director general de Tierra para Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En el gobierno del Estado de México, director general del Gasto de la Secretaría de Finanzas, secretario de Desarrollo Económico, director general del Organismo de Centros Estratégicos de Crecimiento, y secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Planificador urbano de la Comisión Económica para América Latina, vicepresidente nacional de Arquitectos Revolucionarios de México, jefe de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde también impartió cátedra, y cofundador de la Escuela de Planeación Urbana y Regional de la UAEM. Es miembro del PRI desde 1968, donde ha tenido los cargos de delegado en Ciudad Nezahualcóyotl, secretario general adjunto para Asuntos Electorales en el Distrito Federal y secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del Estado de México. Es diputado federal por el XVII distrito con cabecera en Nicolás Romero, secretario de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y miembro de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente; Distrito Federal; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Instituto de Investigaciones Legislativas.

LV

Moral y política

Albert Camus

Democracia y modestia

El Parlamento reinicia sus sesiones. Van a recomenzar los arreglos, los regateos, las triquiñuelas. Los mismos problemas que nos abruman desde hace dos años van a ser llevados a los mismos callejones sin salida. Y cada vez que una voz libre intente decir, sin pretensiones, lo que piensa de ellos, un ejército de perros guardianes, de todo pelo y color, ladrará furiosamente para tapar su eco (...)

No hay, tal vez, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia. Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres cree poseer la verdad absoluta (...)

Demócrata, en definitiva, es aquél que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia, entonces la democracia no existe más.

Orden y equilibrio

Se trata de conciliar justicia y libertad. Que la vida sea libre para cada uno y justa para todos, es nuestro objetivo (...) Por lo demás, sepamos que en el mundo de hoy, sólo por el esfuerzo vale la pena vivir y luchar. Contra una condición tan desesperante, la dura y maravillosa tarea de este siglo es edificar la justicia en el más injusto de los mundos, y salvar la libertad de esas almas destinadas a la servidumbre desde su comienzo (...)

Se habla mucho de orden en estos momentos. Es que el orden es algo bueno que nos ha hecho mucha falta. Pues el orden es también una noción oscura. Hay distintas clases de órdenes. Está el que esconde el desorden y el que se opone a la justicia. Está también ese orden superior de los corazones y de las conciencias que se llama amor, y ese orden sangriento en que el hombre se niega a sí mismo, y que se alimenta del odio. Quisiéramos, entre todo esto, distinguir el orden justo (...)

De esto podemos inferir que no hay orden sin equilibrio y sin armonía. En cuanto al orden social, será un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Y esa armonía debe lograrse en nombre de un principio superior. Ese principio es, para nosotros, la justicia. No hay orden sin justicia y el orden social de los pueblos reside en su felicidad.

El resultado es que no se puede invocar la necesidad de orden para imponer la propia voluntad, pues de ese modo se toma el problema al revés. No se debe exigir orden para gobernar bien, sino hay que gobernar bien para lograr el único orden que tiene sentido. No es el orden el que

refuerza la justicia, sino la justicia lo que le da su certeza al orden (...)

Se plantea aquí el problema del realismo: se trata de saber si todos los medios son legítimos. Todos estamos de acuerdo en los fines, pero discrepamos en cuanto a los medios. Todos aportamos, sin duda alguna, una pasión desinteresada por la felicidad imposible de los hombres. Pero simplemente, hay entre nosotros quienes creen que se puede recurrir a cualquier medio para lograr esa felicidad, y hay quienes no lo creen. Nos contamos entre los últimos (...)

Se trata de estar al servicio de la dignidad del hombre por medios que sean dignos, en medio de un contorno histórico que no lo es. Mídase la dificultad y la paradoja de tal empresa (...)

Pero, en primer lugar, no es absolutamente necesario que las doctrinas políticas sean nuevas. La política (no decimos la acción) no necesita genios. Los asuntos humanos son complicados en su detalle, pero simples en sus principios.

La justicia social puede muy bien lograrse sin una filosofía ingeniosa. Sólo exige algunas verdades de sentido común y esas cosas simples como la clarividencia, la energía y el desinterés. En esta materia, querer innovar a toda costa es trabajar para el año 2000. Y debemos poner en orden los problemas de nuestra sociedad enseguida, mañana si es posible.

En segundo lugar, las doctrinas no son eficaces por su novedad, sino solamente por la energía que transmiten y por el espíritu de sacrificio de los hombres que las sirven (...)

Nada hay que se pueda condenar en general y a una nación menos todavía. Esta época no pretende dar lecciones de moral a la que la ha precedido. Pero sí tiene el derecho adquirido en medio de terribles convulsiones, de rechazar pura y simplemente la moral que la condujo a la catástrofe (...)

El pueblo está a la búsqueda de una moral, ésta es la verdad. Todavía no es la definitiva. Pero ya ha dado bastantes pruebas de su abnegación y de su espíritu de sacrificio. Los franceses están cansados de virtudes mediocres; saben ahora cuánto desarraigo y dolor puede costar un conflicto moral extendido a una nación entera. No es pues de extrañar que se aparten de sus falsas élites, ya que ellas fueron, en primer lugar, las élites de la mediocridad (...)

Por esto consideramos que decir que Francia necesita más una reforma moral que una reforma política es tan tonto como afirmar lo contrario. Necesita las dos, precisamente para impedir que una nación entera sea juzgada por los escandalosos benefi-

cios de unos pocos miserables. Siempre hemos puesto el acento sobre las exigencias de la moral. Pero sería una estafa que esas exigencias sirvieran para escamotear la renovación política e institucional que necesitamos. Es menester dictar buenas leyes si se quiere tener buenos ciudadanos.

De los Clásicos